



NACIONES UNIDAS

ASAMBLÉA  
GENERAL

UN LIBRARY

NOV 3 1976



Distr.  
GENERAL

A/C.3/31/6/Add.1

28 octubre 1976

ESPAÑOL

ORIGINAL: ESPAÑOL/FRANCES

UN/SA COLLECTION

Trigésimo primer período de sesiones  
TERCERA COMISION  
Tema 12 del programa

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Protección de los derechos humanos en Chile

Adendo

/En el presente adendo se reproducen los Anexos a las "Observaciones del Gobierno de Chile al Informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc para investigar la situación de los derechos humanos en Chile" transmitidas por el Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en carta dirigida al Secretario General de fecha 26 de octubre de 1976/

INDICE DE ANEXOS

<u>MATERIA</u>	<u>ANEXO N°</u>
Nota de 5 de agosto de 1976, de la Misión Permanente de Chile ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, por medio de la cual reitera a la División de Derechos Humanos la disposición del Gobierno de Chile a seguir proporcionando los antecedentes que le sean requeridos y puedan serles de utilidad para el objetivo veraz y serio cumplimiento de la misión que ha sido encomendada al Grupo de Trabajo Ad-Hoc	1
Nómina de Radioemisoras extranjeras que emiten programas que atentan contra la seguridad del país y pretenden una quiebra del Gobierno, a través de una campaña sistemática y organizada.	2
Acta Constitucional N° 1, de fecha 31 de diciembre de 1975, que crea el Consejo de Estado	3
Discursos pronunciados por S.E. el Presidente de la República, General don Augusto Pinochet, y por el Presidente del Consejo de Estado y ex-Presidente de la República, don Jorge Alessandri, el 14 de julio de 1976, con ocasión de la constitución del Consejo de Estado	4
Acta Constitucional N° 2, de fecha 11 de septiembre de 1976: "Bases esenciales de la Institucionalidad chilena"	5
Acta Constitucional N° 3, de fecha 11 de septiembre de 1976: "De los Derechos y Deberes Constitucionales".	6
Acta Constitucional N° 4, de fecha 11 de septiembre de 1976: "Regímenes de Emergencia"	7
Carta de Respuesta del señor Ministro del Interior de fecha 28 de mayo de 1976, al señor Obispo de Talca, Monseñor Carlos GONZALEZ Cruchaga, en relación con 23 personas detenidas en su diócesis.	8
Declaración manuscrita del señor Julio Hernán MAIGRET Leyton, morador de la propiedad ubicada en calle Alejandro Fierro 5513, desmintiendo la afirmación hecha en el Informe.	9

MATERIA

ANEXO N°

Declaración manuscrita del señor Luis LACOSTE Ossa, morador de la propiedad ubicada en calle Conferencia 1587, desmintiendo la afirmación hecha en el Informe.	10
Copias del Decreto de Detención, Comunicación de Detención, Acta de Allanamiento del domicilio y Acta de Allanamiento de la Oficina del señor Hernán MONTEALEGRE que comprueban el estricto cumplimiento de todas las normas legales vigentes.	11
Declaración Jurada de Sr. y Sr. ... contenida como prueba en el Informe del Grupo de Trabajo. Documento que por su naturaleza anónima y su contenido no puede constituir prueba en ningún procedimiento serio.	12
Copia de la comunicación de fecha 24 de marzo de 1976, por medio de la cual la Prefectura Santiago Oriente, 13a. Comisaría, Ñuñoa, del Cuerpo de Carabineros de Chile, da cuenta al Segundo Juzgado Militar de Santiago del fallecimiento de don Patricio Amador ALVAREZ en un enfrentamiento con las fuerzas del orden.	13
Notas de fecha 1° y 21 de septiembre pasado, respectivamente, de las Misiones Permanentes de Chile ante Naciones Unidas con sede en Ginebra y Nueva York, dirigidas una al señor Ghulam Alí ALLANA, y la otra al señor Secretario General de las Naciones Unidas, en relación con el fallecimiento del ciudadano chileno don Carmelo SORIA.	14
Lista de dependencias del sótano del edificio del Congreso Nacional de Chile, ubicado en Santiago.	15
Certificado del Director General del Servicio de Gendarmería de Chile desmintiendo que personal de la Dirección de Inteligencia Nacional "tenga libre acceso a los establecimientos que se encuentran bajo su dependencia".	16
Certificado del Subsecretario del Ministerio de Justicia en relación con los exámenes médicos practicados a los señores Patricio BUSTOS y José MOYA durante la visita realizada por el Ministro de la Cartera al campamento de "Cuatro Alamos".	17
Declaración del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en relación con los casos de Manuel GUERRERO, José MOYA, Claudio Eugenio BLANCO, Francisco Javier REYES Ortiz e Iván PARVEX Alfaro.	18

MATERIA

ANEXO N°

Certificados de la Sección Internacional de Fronteras relacionados con Mario Jaime ZAMORANO, Onofre Jorge MUÑOZ, Bernardo ARAYA Zúleta y María Olga FLORES Barraza, acreditan <u>do</u> su salida del territorio nacional.	19
Relación de hechos con respecto a ocho <u>detenidos</u> en Valparaíso	20
Extracto de Filiación y Antecedentes de Jorge Hernán MULLER Silva, Ruperto ARANEDA Torres, Sergio Miguel MAUREIRA Muñoz, Sergio Daniel TORMEN Méndez y Ramón CARREÑO Silva.	21
Relación de hechos con respecto a la familia VARGAS.	22
Decreto N° 2.077, de fecha 24 de mayo de 1975, que dispone la libertad de doña María Antonieta CASTRO Ramírez. Decreto N° 1.584, de fecha 30 de septiembre de 1975, que dispone el traslado a Puchuncaví de Oscar CASTRO Ramírez, desaparecido según el Informe, lugar donde se encuentra en la actualidad.	23
Decreto N° 1.911, de fecha 13 de febrero de 1976, que dispone el arresto de don Jaime Manuel ZURITA Campos. Declaración manuscrita del señor Jaime Manuel ZURITA Campos expresando estar detenido en el campamento "Tres Alamos".	24
Decreto N° 2.244, de fecha 11 de septiembre de 1976, por el cual se dispone la libertad de 190 detenidos, entre ellos los supuestos desaparecidos señora Haydée OBERREUTER Umazábal y Eloy Segundo Ramírez Valenzuela. Declaración manuscrita de la señor OBERREUTER expresando encontrarse en libertad y <u>residiendo</u> en Valparaíso.	25
Lista de algunas personas desaparecidas	26
Declaración de la Presidente del Colegio de Psicólogos de Chile en relación a lo <u>aparecido</u> en la prensa extranjera sobre la participación de una supuesta psicóloga chilena exiliada, doña Ana VASQUEZ, en un Congreso de <u>Psicología</u> en París.	27
Declaraciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos publicadas por periódico chileno "El Cronista", en <u>relación</u> con el estado de los detenidos.	28

MATERIA

ANEXO N°

Declaraciones manuscritas de los señores Iván Adolfo PARVEX, Carlos Raúl GONZALEZ, León Renato HUERTA, Eduardo Francisco REYES, Juan Ernesto SEGURA y José Miguel MOYA negando haber firmado contrato alguno con la Dirección de Inteligencia Nacional.	29
Copia del artículo aparecido, con fecha 17 de septiembre de 1976, en el periódico "Voix Ouvriere" de Ginebra, dando cuenta de una conversación telefónica entre el Alcalde de Nápoles y el detenido Luis CORVALAN.	30
Copias de los Fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema de Justicia de Chile con respecto a los Recursos de Amparo presentados en favor de los señores Eugenio VELASCO y Jaime CASTILLO.	31
Respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la presentación hecha por diversas personas de fecha 18 de agosto de 1976, solicitud que informe transcribe en su anexo XXIII.	32
"Curriculum Vitae" de los señores miembros de la Corte Suprema de Justicia de Chile.	33
Estadística de Matrículas de las Universidades chilenas.	34
Decreto N° 19 del Ministerio de Educación Pública, de fecha 4 de enero de 1976. De su texto completo se desprende la falsedad de la interpretación dada por el Informe en relación con la intervención del Estado en la totalidad de las iniciativas culturales.	35
Copia de la Nota, de fecha 15 de octubre de 1976, dirigida al señor Secretario General de las Naciones Unidas en la que se transcribe el desmentido del Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago a supuestas declaraciones atribuidas al Cardenal don Raúl SILVA Henríquez y aparecidas en una publicación europea.	36

Anexo 1

Nota de 5 de agosto de 1976, de la Misión Permanente de Chile ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, por medio de la cual reitera a la División de Derechos Humanos la disposición del Gobierno de Chile a seguir proporcionando los antecedentes que le sean requeridos y puedan serles de utilidad para el objetivo, veraz y serio cumplimiento de la misión que ha sido encomendada al Grupo de Trabajo Ad Hoc

Nº 1011.-

La Delegación Permanente de Chile ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, saluda muy atentamente al señor Secretario General de las Naciones Unidas (División de Derechos Humanos) y tiene el honor de referirse a las distintas informaciones remitidas por el Gobierno sobre Derechos Humanos.

Las informaciones remitidas por notas 703, 705, 779, 786, 946, 947, 949, 950, 951 y 990, dicen relación con diversos aspectos de la vida política y económica tanto internacional como nacional del país, como asimismo, de la forma como se está dando cumplimiento a las medidas de protección de los detenidos, conmutaciones de penas y liberaciones.-

En efecto, en lo político y económico interno se ha proporcionado información sobre actas constitucionales, creación del Consejo de Estado, constitución y primeras sesiones del mismo, discursos u opiniones de los dos ex Presidentes de la República, señores Alessandri y González Videla, discurso del Presidente de la República y otros antecedentes. Asimismo, a través de publicaciones económicas nacionales se ha proporcionado a la División de Derechos Humanos diversos antecedentes sobre el estado actual de la Economía y Hacienda Pública, plan económico, deuda externa, balanza comercial y de pago, situación de la industria, ocupación, desarrollo del plan, preocupación social, empleo mínimo, etc....

Las últimas medidas adoptadas, esto es, la revaluación del peso, moneda nacional, con sus repercusiones tanto internas como externas tampoco han dejado de ser enviadas a ese organismo, como consta de la nota 949, de 2 del mes pasado.

Con respecto a lo político y económico en el exterior el Gobierno de Chile, a través de esta Delegación, ha puesto en conocimiento de la División de Derechos Humanos de los pormenores, desarrollo, fin, repercusiones y comentarios de la reciente Asamblea General de la OEA en Santiago, incluyendo el texto del Informe de la CIDH sobre Derechos Humanos en Chile, la respuesta del Gobierno, la

//

discusión general, la carta enviada a los delegados extranjeros por cinco abogados, opiniones de Cancilleres y Delegados sobre la situación chilena a los distintos medios de comunicación social y otros antecedentes. Asimismo, se ha agregado a las notas referidas, la exposición hecha en Washington ante el CEPICIES por el Ministro de Hacienda, señor Jorge Cauas y de Planificación Nacional, señor Roberto Kelly y los comentarios sobre ellos realizados por representantes del CEPICIES, BID, BIRF, FMI, AID y Corfo Andina, documentos y comentarios que traducen fielmente la situación de Chile en los planos económicos, financiero y monetario.

En este mismo plano hemos acompañado valiosos antecedentes como el manifestado en el Senado de los Estados Unidos por uno de sus miembros al relatar lo sucedido en Chile entre el año 1970 y 1973 y el estado en que quedó el país.

También se ha comunicado las liberaciones ordenadas con indicación del número y nombre de las personas, conmutación de pena, visitas del señor Ministro de Justicia y Presidente de la Corte Suprema a los campos de detenidos, visita del señor Orfila, Secretario General de la OEA y sus opiniones al respecto.

De este modo el Gobierno de Chile, por propia iniciativa, ha mantenido adecuada y ampliamente informada a la División de Derechos Humanos de la situación del país y hechos más destacados incluyendo, cuando se le ha solicitado, la información pertinente sobre casos individuales.

La Delegación Permanente de Chile está cierta, como lo ha señalado en las distintas notas anteriores, que los antecedentes proporcionados serán de enorme utilidad para esclarecer definitivamente la situación de los derechos humanos en Chile, desfigurada absolutamente a través de una campaña internacional interesada.

La Delegación Permanente de Chile, junto con reiterar a la División de Derechos Humanos que está pronta a seguir proporcionando los antecedentes que le sean requeridos y puedan serles útiles para el objetivo, veraz y serio cumplimiento de la misión que ha sido encomendada al Grupo de Trabajo Ad-hoc, se vale de esta oportunidad para reiterar al señor Secretario General de las Naciones Unidas (División de Derechos Humanos) las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

GINEBRA, 5 de agosto de 1976.





Anexo 2

Nómina de Radioemisoras extranjeras que emiten programas que atentan contra la seguridad del país y pretenden una quiebra del Gobierno, a través de una campaña sistemática y organizada

Las siguientes radioemisoras emiten programas que atentan contra la seguridad del país y pretenden una quiebra del Gobierno a través de una campaña sistemática y organizada propaladas por las siguientes emisoras en los horarios y frecuencias que se indican :

BANDAS	FRECUENCIAS	NOMBRES DE LAS	PAIS	HORA CHILENA
Mts.	Kcs.	RADIOS		
16.	17.780	Radio Moscú	URSS.	18,30
16.	17.790			18,30
16.	15.150			19,00
19.	15.180			19,00
19.	15.210			19,30
25.	11.790			19,30
25.	11.960			20,00
25.	11.960			20,30
31.	9.665			20,30
31.	9.685			21,00
31.	9.600			21,00
41.	7.340			18,30
41.	7.241			18,30
41.	7.150			18,30
41.	7.170			18,30
31.	9.535	Radio Paz y	URSS.	21,30
41.	7.241	Progreso		21,30
25.	12.190	Radio Magalla-	URSS.	22,00
31.	9.535	nes		22,00
41.	7.241			22,00

BANDAS	FRECUENCIAS	NOMBRES DE LAS	PAIS	HORA CHILENA
Mts.	Kcs.	RADIOS		
31.	9.500	Radio Internacio-	DDR.	20,00
31.	9.620	nal de Berlin		20,00
31.	9.645			20,15
31.	9.720			20,15
49.	5.955			20,45
49.	6.040			20,45
41.	7.345	Radio Praga	Checoslo-	24,00
31.	9.630			24,00
16.	18.750	Radio Habana	Cuba	
16.	17.705			
19.	15.530			
25.	11.960			
25.	11.760			
31.	9.680			
25.	11.534	Radio Corea	Rep. Popu-	05,00
31.	9.420		lar y Democra-	05,00
			tica de Corea.	

Anexo 3

Acta Constitucional No. 1, de fecha 31 de diciembre de 1975,  
que crea el Consejo de Estado

# ACTA CONSTITUCIONAL Nº 1

## CREA CONSEJO DE ESTADO

Santiago, 31 de diciembre de 1975.

### Considerando:

1º— Que al Presidente de la República está confiada, por mandato constitucional, la administración y el gobierno del Estado;

2º— Que los problemas que corresponde resolver al Jefe Supremo de la Nación en ejercicio de dicha atribución, son por su naturaleza, múltiples y complejos;

3º— Que es de conveniencia que el Presidente de la República en asuntos de trascendencia para la Nación y cuando lo estime procedente, pueda contar con la recomendación u opinión de un Consejo Consultivo de la más alta jerarquía y amplia representatividad nacional, formado especialmente por personas calificadas, de profunda versación y experiencia y de reconocida rectitud y prestigio;

4º— Que la creación de un Consejo de Estado, con tales características responde, además, al propósito del Gobierno de propender a la integración y participación de los diversos

sectores de la comunidad en el conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales;

5º— Que los referidos objetivos deben cumplirse sin menoscabo de las prerrogativas y facultades decisorias del Presidente de la República;

6º— Que la Junta de Gobierno ha enunciado su propósito de dictar Actas Constitucionales con el objeto de poner en vigencia gradualmente aquellos preceptos orgánicos que respondan a la evolución de nuestra realidad nacional y sirvan de base a la institucionalidad fundamental y definitiva de la República;

Visto, lo dispuesto en los decretos leyes N.ºs 1 y 128, de 1973, 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional N.º 1,

### Decreto Ley:

**ARTICULO 1º**— Créase el Consejo de Estado como supremo cuerpo consultivo del Presidente de la República en asuntos de gobierno y administración civil.

**ARTICULO 2º**— El Consejo de Estado estará integrado por los ex Presidentes de la República, por derecho propio, y por las siguientes personas designadas por el Presidente de la República:

- a) Por un ex Presidente de la Corte Suprema;
- b) Por un ex Contralor General de la República;
- c) Por un ex Comandante en Jefe del Ejército;
- d) Por un ex Comandante en Jefe de la Armada;
- e) Por un ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea;
- f) Por un ex General Director de Carabineros;
- g) Por un ex Ministro de Estado;

h) Por un ex Diplomático con categoría o rango de Embajador;

i) Por un ex Rector de las Universidades del Estado o de algunas de las reconocidas por éste;

j) Por un profesor o ex-profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de cualesquiera de las Universidades indicadas en la letra precedente;

k) Por un profesor o ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de cualesquiera de las Universidades indicadas en la letra i);

l) Por una persona representativa de las actividades profesionales colegiadas;

ll) Por una persona representativa de la actividad empresarial;

m) Por un trabajador, empleado u obrero, representativo de la actividad laboral;

n) Por un representante de una organización femenina, y

ñ) Por un representante de la juventud.

Las personas indicadas en las letras c), d), e) y f), serán designadas por el Presidente de la República a proposición del Comandante en Jefe de la referida rama de las Fuerzas Armadas o del General Director de Carabineros, en su caso.

Las personas señaladas en las letras g), h) e i), deberán haber servido el respectivo cargo, a lo menos, durante un año, y las indicadas en las letras j) y k), deberán haber desempeñado la cátedra por un lapso no inferior a cinco años.

**ARTICULO 3º**— Los consejeros nombrados por el Presidente de la República durarán tres años en sus cargos, su designación podrá ser renovada y permanecerán en sus funciones mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República.

El Consejo de Estado tendrá un Presidente y un Vicepresidente que serán designados, de entre sus miembros, por el Presidente de la República.

**ARTICULO 4º**— El Presidente de la República podrá solicitar la opinión del Consejo de Estado en los siguientes asuntos:

a) Proyectos de reforma constitucional;

b) Proyectos de decreto ley o aspectos determinados de los mismos, relativos a materias de importancia de carácter económico, financiero, tributario, administrativo o social;

c) Celebración de tratados o convenios internacionales de gran significación para el país;

d) Convenios, contratos y negociaciones que, por su naturaleza, puedan comprometer el crédito o los intereses del Estado, y

e) En cualquier otro asunto de trascendencia para la Nación.

**ARTICULO 5º**— Los Consejeros de Estado serán inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en las sesiones del Consejo.

**ARTICULO 6º**— Por decreto ley se determinarán las normas básicas del funcionamiento del Consejo de Estado; se fijará la dotación de su personal y sus remuneraciones.

Un Reglamento, dictado por el propio Consejo de Estado, establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización interna y funcionamiento.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.

Anexo 4

Discursos pronunciados por S.E. el Presidente de la República, General don Augusto Pinochet, y por el Presidente del Consejo de Estado y ex Presidente de la República, don Jorge Alessandri, el 14 de julio de 1976, con ocasión de la constitución del Consejo de Estado

• Discurso de S.E. el Presidente de la República

"Constituídas las Comisiones Legislativas que permitirán a los Sres, Miembros de la Junta Militar disponer de la Asesoría Técnica necesaria para el estudio de las Leyes de la República, el que habla ha querido inaugurar hoy, oficialmente, y dentro de un marco solemne, el Consejo de Estado, Cuerpo Consultivo del Presidente de la República.

Válgome de esta oportunidad para exponer a los distinguidos Miembros, integrantes del Organismo Consultivo, del más alto nivel, que dispondrá el Ejecutivo, las líneas generales que guiarán su funcionamiento y destacar ante la comunidad nacional la singular trascendencia que él reviste para nuestra vida cívica.

Miremos el pasado y recordemos una de las primeras decisiones que el actual régimen tomó para afianzar la Liberación Nacional del 11 de Septiembre de 1973, adoptada cuando aún las FF-AA. combatían en las calles frente al extremismo que pretendía llevar al país a una guerra civil.

En aquellos difíciles días, el Gobierno que presido designó una Comisión de Juristas distinguidos y de probada vocación democrática, para preparar un Anteproyecto de una nueva Constitución Política del Estado.

El nuevo Gobierno advirtió con claridad, desde el primer momento, que la Institucionalidad chilena vigente se había agotado definitivamente



2.-

y se encontraba sobrepasada por los acontecimientos.

Si en esos años oscuros del Gobierno de la Unidad Popular hubiésemos asistido sólo al quebrantamiento repentino y ocasional de nuestra Carta Fundamental, habría resultado factible pensar sólo en el establecimiento de un nuevo Gobierno rectificador y respetuoso del derecho para restablecer el imperio de un Sistema Institucional meramente traicionado.

Más cuando el quiebre Institucional de un país llega hasta los límites mismos de su convivencia cívica; cuando la tensión política y el completo caos moral, económico y social lo coloca al borde mismo de una guerra civil, es a todas luces que la Institucionalidad Jurídica vigente está definitivamente quebrada, pues ello ha sido fruto de su incapacidad para resolver, dentro de los mismos cauces previstos por ella, problemas que comprometen la vida del Estado como Nación organizada.

Así lo comprendió la ciudadanía sana de Chile, cuando llamó a las Fuerzas Armadas a que asumieran el poder en Septiembre de 1973 para evitar la brutal amenaza que pendía sobre nuestra Patria y sobre la esencia libertaria del alma nacional.

Bien había comprendido la ciudadanía toda que el marxismo era una agresión constante en contra de la democracia y de la libertad asentada en una filosofía perversa y ante la cual teníamos la obligación de organizarnos para defendernos de ella.

Inteligentemente el marxismo-leninismo ha ocultado esta concepción de agresión totalitaria porque sabe que cerrado el camino por la vía de la lucha abierta y directa puede continuar su acción destructora por otras sendas sutiles. Para ello, además estimula y explota una falsa polarización entre izquierda y derecha, entre fascismo y comunismo, cuando en realidad la alternativa es totalitarismo o libertad.

Sin embargo, hay quienes hablan de un supuesto "retorno a la democracia", con lo cual están sirviendo directa o indirectamente al marxismo-leninismo, y también están por ello incurriendo en un lenguaje equívoco, impropio o aún quizás interesado.

El Movimiento del 11 de Septiembre no representó la destrucción ni la suspensión de nuestra vida democrática, sino que superó el colapso casi total a que otros la habían llevado, y precisamente las medidas adoptadas, por duras que ellas se consideren, han sido tomadas para

salvar la esencia misma de la democracia chilena, orgullo de la Nación toda.

Además, el Movimiento del 11 Septiembre no se hizo ni podría haberse hecho para volver a un pasado que había muerto bajo el signo de su propio fracaso, era necesario iniciar una nueva etapa histórica en la vida nacional, configurándose como un imperativo ineludible, del nuevo régimen, la creación de una nueva Institucionalidad, que conformara una "nueva democracia" capaz de resistir la agresión totalitaria del marxismo-leninismo en todas sus formas.

La tarea que se asignaba al nuevo Gobierno nos imponía una reflexión profunda, seria y honesta sobre las causas más hondas que nos habían llevado a la destrucción de nuestra Institucionalidad democrática anterior.

Al señalar los errores del pasado no lo hago con mezquino afán de colocar estigmas sobre grupos o personas, o el afán de ofender, nada más lejos de mi pensamiento, sólo me lleva al sano deseo de exponer con precisión, valentía y nitidez lo que se considera como la raíz de los males que hemos sufrido, para luego indicar con una base sólida el remedio más eficaz que se aconseja para evitar, con energía, la repetición del mal en el futuro.

Como en otras oportunidades lo he señalado, la gran falla de nuestro régimen democrático tradicional fue lo inadecuado que resultaron en su aplicación los instrumentos legales que se poseían para poder neutralizar y derrotar a los dos grandes vicios que corroyeron el sistema nacional: por un lado la demagogia política y por el otro, la acción organizada y constante de quienes aspiraban a carcomer, hasta su destrucción, un sistema en el cual no creían, para luego, reemplazarlo por el régimen totalitario del marxismo-leninismo.

Al amparo de normas constitucionales equivocadas o insuficientes, se perdió de vista la exigencia de mirar a Chile en función de un Objetivo Nacional, y nuestra vida cívica se convirtió en escuela de prácticas políticas viciosas, fomentadas por una hipertrofia partidista que convirtió a la lucha por el poder en un fin en sí mismo, al entenderla no como un medio para servir el bien común sino como un vehículo para beneficiar con injustos privilegios a los Miembros del Partido o a los Grupos que electoralmente los sustentaban.

Este cuadro se fue agudizando, gravemente, en el decenio que precedió a 1973.

Efectivamente, día a día, fue encontrando un terreno más fértil la acción desquiciadora, de quienes, guiados por la utopía totalitaria y materialista más implacable que la historia humana haya conocido, fueron infiltrándose poco a poco, en el cuerpo social, hasta llegar al poder el 1970.

Tres años más tarde, liberado Chile de lo que hoy parece una extraña pesadilla, el país vio resurgir virtudes y valores espirituales que nuestro pueblo guardaba en lo más profundo de su alma y la Nación inició así un proceso reintegrador.

Estimo vital subrayar este elemento, porque de nada valen las estructuras políticas, económicas o sociales de un país, por perfectas que aparezcan en teoría, si ellas no están vivificadas por una conducta de gobernantes y gobernados que se ajuste a sólidos principios morales, capaces de ofrecer el marco y la fisonomía de una convivencia social justa.

Dichas convicciones comunes, son las que deben nutrir toda institucionalidad que aspire a perdurar fecundamente.

La nueva democracia que estamos construyendo, de posición genuinamente nacionalista, recibe esa clara fundamentación de parte de la Declaración de Principios del actual Gobierno.

La fé en esos principios reclama una voluntad dinámica y creadora, porque es su propia raíz, es decir la libertad del hombre, la que hoy se vé debilitada o aplastada por la acción de modernas formas de esclavitudes colectivas, en las que un Estado omnipotente masifica y avasalla al ser humano.

El fortalecimiento del principio de autoridad, y específicamente de las facultades propias de un sistema presidencial, es particularmente apremiante en el mundo moderno, ya que la defensa del orden jurídico y del sistema democrático, requiere hoy de armas eficaces para enfrentar la acción de las fuerzas totalitarias y disgregadoras.

A igual objetivo de afianzar la libertad, se orienta el fortalecimiento de los cuerpos intermedios de la sociedad, sean éstos territoriales o funcionales, ya que su vitalidad y su legítima autonomía frente al Estado, es lo que permite construir una sociedad de verdadera par

ticipación, capaz de resistir las garras del estatismo.

Una nueva democracia con las características señaladas, podrá culmi  
nar en forma orgánica, con la generación de los futuros integrantes  
del poder político, como lo establece nuestro Objetivo Nacional.

En ese documento se contempla la participación de partidos políti-  
cos y de grupos o personas independientes, constituyendo corrientes de  
opinión, cuyo peso sólo pueda provenir, eficazmente, de la calidad de  
sus miembros que pretendan acceder a funciones públicas, y de la seried  
dad de sus planteamientos doctrinarios y prácticos.

A quienes piden fecha cierta para la vigencia plena de esa nueva  
democracia, les decimos que su impaciencia, aparte de dañar el proceso  
de recuperación nacional en que estamos empeñados, resulta completament  
te impropcedente, ya que parecen desconocer que la nueva democracia ya  
empezó, y que avanza gradualmente hacia su plenitud, de acuerdo a las  
circunstancias.

¿ Habría sido factible, por ejemplo, la constitución de este Consej  
o de Estado inmediatamente de producida la Liberación Nacional ?

Es evidente que ello hubiese resultado impracticable en aquel moment  
to de encendidas pasiones y efervescencia, y que hoy es, en cambio,  
una realidad que fluye sólida y oportuna, como la demostración más concl  
uyente de que nuestro país ha comenzado ya a vivir su nueva instituci  
cionalidad y su nueva democracia.

No obstante, el progreso en esta materia debe ser gradual y decantad  
o, tanto para asegurar su armonía con la profunda evolución que nues-  
tra sociedad está sufriendo, como asimismo para no ofrecer brechas im-  
prudentes al aparato marxista-leninista, siempre presto para infiltrar  
y carcomer toda construcción jurídica o social que se genere en el mund  
o libre.

Un paso histórico en nuestro camino hacia la plenitud de una nueva  
democracia, se da hoy, al inaugurarse oficialmente el funcionamiento  
de este Consejo de Estado.

Su honda e indiscutible legitimidad, proviene tanto de la misma leg  
itimidad originaria del 11 de Septiembre, como de la proyección que  
este organismo adquiere en cuanto un primer paso que es, hacia los o'rganos  
legislativos del futuro.

La complejidad de los problemas modernos, y la emergencia cívica que vive el país, hacen que el Presidente de la República requiera de un cuerpo consultivo de alta jerarquía e independencia, que puede ilustrar con su juicio las resoluciones más trascendentales en que el Jefe del Estado estime oportuno el valioso aporte de tal alto organismo.

El curso de los acontecimientos será el que determinará el género y la frecuencia de dichas consultas, pero los Sres. Consejeros pueden estar ciertos de que ellas versarán siempre sobre materias de verdadera importancia para la vida nacional.

Señores Consejeros de Estado :

En tan solemne ocasión, deseo agradecer a todos y a cada uno de vosotros, la aceptación que habéis hecho de esta alta responsabilidad.

El destino ha hecho posible que recaiga la Presidencia y la Vicepresidencia de este Consejo de Estado, en dos de mis más ilustres antecesores en el Mando Supremo de Chile, que han apreciado como se deber patriótico el prestar en esta hora al servicio de la Patria, su experiencia rexogida en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Al terminar estas palabras, presento un reconocimiento a la incansable y abnegada lucha en contra de la demagogia, que ha caracterizado la intachable vida pública de don Jorge Alessandri Rodríguez, como asimismo lo hago a la preclara lucidez y valentía con que don Gabriel González Videla supo descubrir y combatir el peligro de la amenaza comunista. La presencia de estos distinguidos estadistas junto al Presidente que os habla, es la comprobación más viva de que las luchas libradas por ellos no fueron en vano, y que después de incertidumbres y angustias hoy ya felizmente superadas, su obra ha fructificado para bien de la Patria.

Se agrega asimismo el generoso aporte de todos vosotros, Señores Consejeros de libre designación, cuyos nombres han sido escogidos atendiendo vuestros indiscutibles atributos de patriotismo y honradez, y vuestra trayectoria auténticamente representativa de nuestras mejores expresiones sociales y republicanas.

Este hecho, además de constituir un macizo ejemplo de integración cívico-militar, pone de relieve cómo un régimen que asume resueltamente su carácter creador y reoriginador, entronca sin rupturas con la auténtica tradición nacional, y es capaz de recoger sus más calificadas expresiones.

7.-

Estoy cierto de que más allá de mi propio agradecimiento, será la historia la que os reconocerá vuestra patriótica actitud de asumir un mandato imperativo de las circunstancias, prescindiendo de todo interés personal, y en algunos casos, de viejos lazos partidistas, que a despecho de la crítica de algunos, hoy ceden paso al llamado ineludible de la Patria.

Que el gran Dios os ilumine en vuestras altas funciones, y que El nos ayude a todos a continuar llevando a Chile hacia destinos de libertad, de justicia y de grandeza.

2. Intervención del ex mandatario Don Jorge Alessandri Rodríguez,  
Presidente del Consejo de Estado

Excmo. señor Presidente de la República, señores miembros de la Honorable Junta de Gobierno, señor Presidente de la Corte Suprema, señor Cardenal, señores Jefes de Misiones Diplomáticas, señores Ministros de Estado, autoridades civiles y militares, señoras y señores:

El Excmo. señor Presidente de la República ha terminado el notable discurso que acabamos de escucharle, con palabras y juicios muy halagadores para cuantos formamos parte de este Consejo de Estado. A nombre de todos mis colegas y en el mío propio, quiero agradecerle tan generosos conceptos, como también la confianza y el honor que el Supremo Gobierno nos ha dispensado al designarnos miembros de este alto organismo.

En las palabras de S.E. se contienen juicios y se indican metas, que nos obligan a multiplicar nuestros esfuerzos para hacernos dignos de la confianza depositada en nosotros, y para contribuir a que sus nobles y elevados propósitos fructifiquen plenamente.

Hubiese deseado vivamente consultar en forma previa a todos los señores Consejeros de Estado a fin de procurar que las ideas que hoy debía expresar interpretaran en su conjunto el pensamiento de todos ellos. Por desgracia, atendidas las circunstancias, ello no me resultó posible, hecho que da a mis palabras el estricto alcance de mis opiniones personales.

Es un hecho que todo intento por dar vida a una nueva institucionalidad despierta fuertes e injustificadas críticas. No es extraño, entonces, que la creación de este Consejo haya suscitado también algún reparo.

Por ejemplo, la aprobación de la Constitución de 1925 fue sometida a un plebiscito, pero se trataba de un cuerpo constitucional completo. Pese a que su aprobación llevaba implícito el llamado a elecciones presidenciales y parlamentarias, dicho plebiscito fue públicamente repudiado por todos los partidos políticos, los que ordenaron abstenerse a sus miembros, por considerar que aquel comicio no se ajustaba a las fórmulas constitucionales.

Para mí, en cambio, la creación de este Consejo es un significativo paso dado por el Gobierno, que demuestra su deseo de ampliar el campo de quienes hasta ahora han intervenido en las resoluciones por adoptar. Se pide el concurso de personas que, por su participación pasada o presente en las actividades públicas o privadas, puedan aportar su experiencia cuando el Presidente de la República lo estime útil, en las materias que someta a este Consejo.

Queda así en evidencia el propósito que anima al Supremo Gobierno de promover el establecimiento paulatino de la nueva institucionalidad que propicia, porque sería fatal volver a un sistema que nos llevó al borde del abismo.

Estimo muy afortunada la diferencia que S.E. establece entre lo ocurrido el 11 de Septiembre y un quebrantamiento repentino y ocasional de la Constitución Política. Es factible remediar, --como él dijo--, --este último, mediante la instauración de un nuevo gobierno rectificador y respetuoso del derecho, encargado de restablecer el imperio de un sistema institucional meramente traicionado. Muy distinto es, por cierto, el quebranto completo, desde sus bases mismas, de la institucionalidad jurídica vigente, ya que tal desastre conlleva inevitablemente la necesidad de construir una nueva, también desde sus cimientos.

El mal era muy hondo; tan hondo y palpable que todo aquel que observara en profundidad nuestro quehacer político, podía advertir hacia dónde caminábamos.

Durante años estuve señalando, con incansable insistencia, que el régimen constitucional vigente y las prácticas políticas imperantes eran contraproducentes para lograr las soluciones que se buscaban en orden a lograr una más justa convivencia económica, ya que los problemas sociales sólo podían alcanzar soluciones satisfactorias, --especialmente para los más humildes,-- mediante un crecimiento económico acelerado que aquel régimen y aquellas prácticas hacían imposible. Las dolorosas experiencias vividas por nuestro país han demostrado la efectividad de este aserto.

Antes de llegar a la Presidencia de la República y después como gobernante, advertí públicamente, en múltiples ocasiones y como algo fatal, el colapso inminente de nuestra vida constitucional, si se continuaba por el camino que el país venía siguiendo.

En mi juventud pude apreciar en carne propia los dolores que tales crisis entrañaban para muchos grupos ciudadanos y, por eso, sentía la imperiosa obligación de procurar evitarla.



De ahí también mi insistencia para propiciar cambios en nuestras normas constitucionales, que pusieran coto a las viciosas prácticas políticas.

Fue violentamente combatido, pero eran tan efectivos los males que señalaba, que mi sucesor debió recurrir a los procedimientos que yo usaba para defenderme de las desquiciadoras iniciativas parlamentarias y, más aún, requirió y obtuvo la aprobación de muchas de las reformas que yo propiciaba y que tanto se combatieron cuando las propuse.

Esto demuestra que en los sectores partidistas no había un concepto claro del principal problema político chileno: crear una nueva institucionalidad, que permitiera vivir en libertad, sin peligros para la estabilidad de nuestra economía y sin riesgos de abocar el país al caos.

Es necesario revisar sin timideces algunos conceptos fundamentales, cuya interpretación, según ha demostrado la experiencia, ha llegado a límites profundamente perjudiciales para el bien común. Tal ocurre con la mal llamada libertad de prensa.

Nadie habrá olvidado cuántos años vivimos dentro de una atmósfera asfixiante de groserías y calumnias, propaladas por cierta prensa que hacía gala del más soez de los lenguajes. Por otra parte, hoy comprobamos que hasta algunos importantes diarios de países democráticos, difunden una concepción no sólo absolutamente equivocada sino calumniosa de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nada tiene esto de extraño si vemos que en lo interno están socavando sus propias estructuras fundamentales.

Sobre esta materia, creo del caso repetir lo que el máximo jurista de nuestra América, don Andrés Bello, decía sobre la obligación de proteger la honra de las personas: "Nada es más pernicioso a la libertad, --expresaba, -- que la licencia, y nada perjudica en tanto grado a la libre discusión de las medidas y negocios públicos, como los ataques licenciosos a la reputación individual. Nuevos en el goce de los derechos y garantías de un gobierno popular, no es extraño que nos dejemos extraviar en su aplicación y ejercicio, y que, no acertando a fijar la línea de demarcación entre lo que deben permitir las leyes y lo que deben vedar, creamos que se restringe y estorba el uso, cuando sólo se reprime el abuso".

Y añadía el eminente jurista: "¿Es acaso el buen nombre una propiedad menos sagrada que la de los bienes materiales? O son los golpes que se asestan a la reputación los que producen heridas me-

nos dolorosas? Está pues obligado el legislador a prevenir y reparar esta especie de injurias con no menos cuidado que las otras; y tanto olvidaría su misión, dejando expuestas la buena opinión y la respetabilidad social de los ciudadanos a los ultrajes de la maledicencia, como dejando su vida y sus bienes a merced de los ladrones y asesinos".

Otro aspecto que estimo esencial introducir en la futura organización democrática es el que dice relación con los cargos de elección popular.

Para ocupar cualquier cargo modesto en la Administración Pública se exigen ciertos requisitos. Es monstruoso que a quienes llegan a ocupar cargos representativos, a través del sufragio universal, no se les exija también que demuestren poseer la capacidad necesaria para su cabal desempeño.

Todos los ciudadanos en el ejercicio de sus actividades, y hasta los más altos Magistrados de la República, están expuestos a sanciones si abusan en el goce de sus derechos, o si se extralimitan en el desempeño de sus funciones. Resultaba inverosímil, entonces, que los parlamentarios estuvieran absolutamente exentos de toda responsabilidad por el mal uso que podían hacer de sus atribuciones.

Finalmente, en la vida moderna los sindicatos de trabajadores han cobrado una enorme importancia; la legislación respectiva requiere una modernización que la adecúe a la realidad actual. Los dirigentes sindicales deben cumplir una serie de requisitos para poder ser elegidos y estar sometidos a incompatibilidades que impidan su politización.

Creo tener autoridad para expresarme como lo he hecho. Soy hijo de quien rindió permanente culto a la libertad, lo que le depuró a él y a su familia grandes dolores y quebrantos. Por mi parte, en mi modesta vida pública y privada nada hay que me haya hecho desviarme de esa línea. Como Mandatario, jamás usé ni de las más leves facultades que la ley me otorgaba para defender el orden público, pero la evidencia de que los desbordes partidistas nos llevaban fatalmente al trastorno, me impulsó a señalar sin cesar, que la politiquería y demagogia crecientes en que veníamos viviendo no podía continuar.

Con igual convicción proclamo hoy que una vuelta precipitada al total restablecimiento de la normalidad, sin que se haya formado conciencia colectiva sobre los errores del pasado, podría tener las más funestas consecuencias.

Resulta, por eso, inexplicable que, pese al profundo sentido legalista de nuestro país, tantas veces demostrado, la gran mayoría de los países democráticos lancen contra él toda clase de anatemas, por el delito de que la inmensa mayoría de sus hijos pidieran a sus Institutos Armadas, --modelos no superados de consagración profesional, -- que los salvaran del precipicio hacia donde caminábamos y de una inminente y sangrienta lucha fratricida. Y además porque no se establece súbitamente una plena normalización institucional. Olvidan que es público y notorio que grandes cantidades de armamentos están todavía repartidos a través del país, introducidos con el beneplácito del Gobierno anterior, y que, tal vez, continúen incrementándose por el contrabando a través de nuestras dilatadas fronteras territoriales y marítimas.

Finalmente, creo que la formación de este Consejo puede resultar de gran utilidad, porque contribuirá, además de otras finalidades importantes, a crear acercamientos entre distintas corrientes de opinión que proporcionen una base sólida de unidad nacional, tan indispensables para el futuro del país y para una definitiva normalidad.

Respetando la resolución de don Eduardo Frei, de no participar en este Consejo, lo lamento hondamente, porque su presencia habría sido de mucha utilidad para los fines que he señalado.

Excmo. señor: agradezco sinceramente la confianza y el honor que me habéis dispensado, designándome Presidente de este Consejo. Podéis estar cierto de que la serenidad que ha prevalecido en todas mis actuaciones públicas, acrecentada por el paso de los años, vive junto al deseo de hacerme digno de esa confianza y de que un muy hondo anhelo de conciliación guiará todos mis actos.

Escusadme, señores, por haberos tomado tanto tiempo para escuchar mis opiniones personales, pero, cuando se acerca el final de una larga vida consagrada al servicio público; cuando en todos esos años ha sido posible conocer las grandezas y miserias de hombres y de instituciones; cuando, en fin, se siente latir en el corazón el mismo amor por la Patria que en la juventud, creo que a ese hombre le resulta lícito reafirmar principios y plantear puntos de vista, que estima consustanciales al progreso espiritual y material de Chile.

Anexo 5

Acta Constitucional No. 2, de fecha 11 de septiembre de 1976:  
"Bases esenciales de la Institucionalidad chilena"

Santiago, 11 de Septiembre de 1976.

Considerando:

1º— Que las Fuerzas Armadas y de Orden, en cumplimiento de su deber esencial de resguardar la soberanía de la Nación y los valores superiores y permanentes de la chilenidad, a justo y legítimo requerimiento de aquélla, asumieron el 11 de septiembre de 1973, la conducción de la República con el fin de preservar la identidad histórico cultural de la patria y de reconstruir su grandeza espiritual y material;

2º— Que para el logro de tan altos objetivos es necesario dar al país una nueva institucionalidad que afiance su destino como Nación soberana y libre y permita que en ella la evolución y el progreso se encaucen vigorosamente, con la dinámica que la hora actual exige, dentro de un régimen de autoridad que garantice la libertad y seguridad de sus habitantes;

3º— Que para ello es indispensable establecer sus bases fundamentales, a las que deberá sujetarse el ordenamiento jurídico de la Nación;

4º— Que entre los valores esenciales en que estas bases se sustentan, coincidentes con la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de Chile, de 11 de marzo de 1974, cabe destacar:

a) La concepción humanista cristiana del hombre y de la sociedad que considera a aquél como un ser dotado de una dignidad espiritual y de una vocación trascendente, de las cuales se derivan para la persona derechos naturales anteriores y superiores al Estado, que imponen a éste el deber de estar a su servicio y de promover el bien común

Dentro de esta concepción, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado protegerla y propender a su fortalecimiento, como asimismo, es deber suyo reconocer a los grupos intermedios entre el hombre y el Estado, conforme el principio de subsidiariedad

b) El concepto de unidad nacional, expresado a través de un propósito de integración armónica de todos los sectores de la Nación que persiga los grandes objetivos señalados en el considerando primero y rechaza, en consecuencia, toda concepción que fomenta antagonismos sociales;

c) El concepto de Estado de Derecho, que supone un orden jurídico objetivo e impersonal, cuyas normas inspiradas en un superior sentido de justicia obligan por igual a gobernantes y gobernados;

d) La concepción de una nueva y sólida democracia que haga posible la participación de los integrantes de la comunidad en el conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales y dotada de mecanismos que la defiendan de los enemigos de la libertad los que, al amparo de un pluralismo mal entendido, sólo pretenden su destrucción;

e) La existencia de un Estado unitario, con una administración funcional y territorialmente desconcentrada, que haga posible el desarrollo armónico, equilibrado y de participación de las regiones, y

Visto lo dispuesto en los Decretos Leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974.

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente Decreto Ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 2.

Decreto Ley:

**ARTICULO 1º**— El Estado de Chile es unitario. El país se divide en regiones y su administración es funcional y territorialmente desconcentrada.

**ARTICULO 2º**— El Estado debe promover el bien común, creando las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a la seguridad, libertad y dignidad del ser humano y a su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

El Estado propenderá a la integración armónica de todos los sectores de la Nación. En consecuencia, se rechaza toda concepción de la sociedad inspirada en el fomento de antagonismos sociales.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado la protegerá y propenderá a su fortalecimiento.

El Estado reconoce a los grupos intermedios de la comunidad.

**ARTICULO 3º**— Las potestades estatales y las autoridades públicas someten su acción a las Actas Constitucionales, a la Constitución y a las leyes.

**ARTICULO 4º**— La soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida de acuerdo al Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y a todas las normas que se hayan dictado o se dicten en conformidad a ella.

La soberanía no reconoce otra limitación que el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza humana.

**ARTICULO 5º**— Chile es una república que se estructura como una nueva democracia con participación de la comunidad y dotada de mecanismos que aseguren su protección, fortalecimiento y autoridad.

**ARTICULO 6º**— Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma y con los requisitos que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y origina las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

**ARTICULO 7º**— Los preceptos de las Actas Constitucionales y de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de los distintos órganos de autoridad, como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

**ARTICULO 8º**— Son Emblemas Nacionales el Escudo de Armas de la República, la Bandera Nacional y la Canción Nacional.

**ARTICULO 9º**— La mención que en esta u otras Actas Constitucionales se haga a la Constitución Política de la República debe entenderse referida a su texto vigente al 10 de septiembre de 1973, con las modificaciones posteriores de que ha sido objeto en conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 788, de diciembre de 1974.

Las Actas Constitucionales sólo podrán ser modificadas

en ejercicio del Poder Constituyente y por medio de reformas expresas que deberán incorporarse a su texto

**ARTICULO 10º**— Deróganse el Capítulo I y sus artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Constitución Política de la República.

#### ARTICULOS TRANSITORIOS:

**ARTICULO 1º**— La presente Acta Constitucional entrará en vigencia el 18 de septiembre de 1976.

**ARTICULO 2º**— Dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta Acta, los Decretos Leyes que hayan modificado la Constitución Política de la República en lo relativo a los Poderes del Estado y su ejercicio, deberán revestir la forma de Acta Constitucional.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.

Anexo 6

Acta Constitucional No. 3, de fecha 11 de septiembre de 1976:  
"De los Derechos y Deberes Constitucionales"

Santiago, 11 de Septiembre de 1976.

Considerando:

1º— Que siendo los derechos del hombre anteriores al Estado y su vida en sociedad la razón de ser de todo ordenamiento jurídico, la protección y garantía de los derechos básicos del ser humano constituyen necesariamente el fundamento esencial de toda organización estatal;

2º— Que la tradición jurídica e histórica chilena ha sido consecuente con estos principios y ha evidenciado un propósito permanente de perfeccionamiento de los derechos de las personas y de los procedimientos que aseguren su eficaz protección;

3º— Que la amarga realidad que Chile vivió en los años previos al 11 de septiembre de 1973 ha demostrado, sin embargo, la necesidad de fortalecer y perfeccionar los derechos reconocidos en la Carta de 1925 e incorporar nuevas garantías acordes con la doctrina constitucional contemporánea y su consagración internacional;

4º— Que entre estas últimas cabe destacar el derecho a la vida y a la integridad de las personas, la protección legal de la vida del que está por nacer, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la legalidad del proceso, y el derecho a defensa y otras que requieren jerarquía constitucional y reafirman el valor del hombre como célula fundamental de nuestra sociedad;

5º— Que, por otra parte, la ausencia de toda consideración y respeto a la vida privada de las personas y de sus familias, así como a su honra, que caracterizó al período político, que precedió al actual Gobierno, hace necesario contemplar esta garantía constitucional sujeta a los correspondientes mecanismos de protección que esta Acta establece;

6º— Que siendo la libertad de opinión y de informar una de las que tiene mayor trascendencia en el mundo de hoy, se hace necesario, junto con consagrarla, estatuir las normas indispensables para evitar que su ejercicio abusivo atente contra los derechos de las personas o aquellos valores superiores que regulan la vida de la comunidad;

7º— Que la convicción del constituyente en orden a que, por muy eficaz que sea la protección de la persona humana, ella no resulta satisfactoria si no se procura y estimula su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida, hace necesario contemplar, además de la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y el deber correlativo de dispensarla que compete a la comunidad nacional toda, pero que comienza con los padres mismos, quienes no sólo tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, sino que, además, el deber de hacerlo;

8º— Que el desarrollo económico y social debe fundarse en una clara definición y adecuada protección del derecho de propiedad y su función social, ya que, además, él contribuye a hacer posible el ejercicio de las libertades públicas;

9º— Que no puede tampoco el constituyente ignorar el

peligro de la contaminación ambiental, el que, aunque no tratado todavía por otras Cartas Constitucionales, implica un riesgo permanente para la vida y desarrollo del hombre;

10º— Que por muy perfecta que sea una declaración de derechos, éstos resultan ilusorios si no se consagran los recursos necesarios para su debida protección. Uno de los más trascendentales lo constituye la creación de un nuevo recurso de protección de los derechos humanos en general, con lo cual el resguardo jurídico no queda sólo limitado al derecho a la libertad personal y al recurso de amparo, sino que se extiende a aquellos derechos cuya naturaleza lo permita,

11º— Que para un mayor resguardo del ordenamiento jurídico que se contempla, se dispone que nadie puede invocar precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos que esta Acta reconoce, o para atentar contra la integridad o funcionamiento del Estado o del régimen constituido;

12º— Que como una manera de proteger los valores fundamentales en que se basa la sociedad chilena, debe declararse ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República todo acto de personas o grupos destinado a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido;

13º— Que en el entendido que la vida en sociedad no sólo implica la existencia de derechos, sino que, además, de deberes, procede contemplar un capítulo que contenga los deberes constitucionales, como lo son, entre otros, el respeto a Chile y a sus emblemas; el de honrar a la Patria y defender su soberanía e integridad, el de contribuir a preservar la seguridad nacional, el de acatar las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes, que comprende el de obedecer las órdenes de las autoridades constituidas; el de concurrir a los gastos públicos; el de alimentar, educar y amparar a los hijos



y de honrar y socorrer a los padres, todo sin perjuicio de los demás deberes que impongan las leyes, y

VISTO lo dispuesto en los Decretos Leyes N.ºs 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente, dicta el siguiente Decreto Ley con el carácter de Acta Constitucional N.º 3:

Decreto Ley:

## CAPITULO I

### DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y SUS GARANTIAS

**ARTICULO 1º**— Los hombres nacen libres e iguales en dignidad. Esta Acta Constitucional asegura a todas las personas.

1.— El derecho a la vida y a la integridad de la persona, sin perjuicio de la procedencia de las penas establecidas por las leyes.

La ley protege la vida del que está por nacer.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

2.— La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

El hombre y la mujer gozarán de iguales derechos.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.

3.— La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo

concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos Estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselo por sí mismos.

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción necesita fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

En las causas criminales, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

4.— La admisión a todos los empleos y funciones públicas, sin otros requisitos que los que impongan las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes.

5.— La igual repartición de los impuestos y contribuciones, en proporción de los haberes o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

6.— El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual y, en consecuencia, los derechos de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.

a) Nadie puede ser privado ni restringido en su libertad personal, sino en los casos y en la forma determinados por las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes.

b) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y

después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta cinco días.

c) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido le requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito.

d) La libertad provisional es un derecho del detenido o sujeto a prisión preventiva. Procederá siempre, a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como estrictamente necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

e) En las causas criminales no se podrá obligar al in-

culpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; así como tampoco a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.

No podrá imponerse como sanción la pérdida de los derechos previsionales ni la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes.

Sin embargo, será procedente la pena de confiscación de bienes respecto de las asociaciones ilícitas.

f) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquiera instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia.

7.— El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca.

8.— El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

La autoridad dará respuesta a las peticiones que se le formulen, conforme a las normas que establezca la ley.

9.— El derecho de asociarse sin permiso previo.

Las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley para gozar de personalidad jurídica.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, salvo lo dispuesto en el inciso sexto del N° 20 de este artículo.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

10.— El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia.

La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse, en los casos y formas determinados por la ley.

11.— La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes.

12.— La libertad de emitir sus opiniones y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley. Con todo, los tribunales podrán prohibir la publicación o difusión de opiniones o informaciones que afecten la moral, el orden público, la seguridad nacional o la vida privada de las personas.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición de la producción cinematográfica y su publicidad.

Asimismo, esta Acta Constitucional asegura el derecho de recibir la información en forma veraz, oportuna y objetiva sobre el acontecer nacional e internacional, sin otras limitaciones que las expresadas en el inciso primero de este número.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por ese medio de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica tendrá el derecho de fun

dar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que determine la ley.

Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo, cuya composición y funcionamiento serán determinados por la ley, al que corresponderá ejercer las atribuciones que ésta le encomiende, destinada a velar por que la radiodifusión y la televisión cumplan con las finalidades de informar y promover los objetivos de la educación que esta Acta Constitucional consagra.

La ley determinará la forma de otorgar, renovar y cancelar las concesiones de radiodifusión.

El Estado, aquellas universidades y demás personas que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

No podrán ser dueños, directores o administradores de un medio de comunicación social, ni desempeñar en ellos funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva o por delito que atente contra el ordenamiento institucional de la República, así calificado por ley.

Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de los medios de comunicación social.

La expropiación de los medios de comunicación social sólo procederá en virtud de ley especial que la autorice, previo pago de la indemnización.

13.— El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida y, para ello, se promoverá en los educandos el sentido de responsabilidad moral, cívica y social; el amor a la Patria y a sus valores fundamentales; el respeto por la dignidad del ser humano y el espíritu de fraternidad entre los hombres y de paz entre los pueblos.

Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, y la facultad de escoger el establecimiento de ense

ñanza. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos.

Es deber de la comunidad nacional contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. El Estado debe atender las necesidades de la educación como una de sus funciones prioritarias.

La educación básica es obligatoria. El Estado deberá mantener las escuelas gratuitas que, para este efecto, sean necesarias y asegurar el acceso a la educación media de quienes hayan egresado del nivel básico, atendiendo sólo a la capacidad de los postulantes.

Corresponderá asimismo al Estado fomentar el desarrollo de la educación superior en conformidad a los requerimientos y posibilidades del país, contribuir a su financiamiento y garantizar que el ingreso a ella se determine atendiendo únicamente a la capacidad e idoneidad de los postulantes.

La ley contemplará los mecanismos adecuados para crear, mantener y ampliar los establecimientos educacionales tanto públicos como privados y establecerá las modalidades y requisitos para la distribución de los recursos disponibles.

14.— La libertad de enseñanza.

Un Estatuto especial regulará el ejercicio de esta libertad.

15.— La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que por su naturaleza son comunes a todos los hombres o deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así.

La ley, en casos calificados y cuando así lo exija el interés nacional, puede reservar al Estado determinados bienes que carecen de dueño y, también, limitar o establecer requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

Para promover el acceso de un mayor número de personas al dominio privado, la ley propenderá a una conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.

16.— El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporeales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energía productiva para el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.

No obstante, nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo en contrario, la indemnización debe ser pagada en dinero efectivo, de inmediato o en un plazo máximo de cinco años en cuotas iguales, una de las cuales se pagará de contado y el saldo en anualidades a partir del acto expropiatorio mediante la entrega de pagarés del Estado o garantizados por éste. En casos calificados en que el interés nacional lo exija, la ley podrá ampliar este plazo hasta diez años. En todo caso, el monto de la indemnización se pagará reajustado desde la fecha de la expropiación, de modo que mantenga un valor adquisitivo constante y con los intereses que fije la ley.

Para tomar posesión material del bien expropiado será previo el pago del total de la indemnización o de la parte de

ella que corresponda pagar de contado, las que, a falta de acuerdo, serán determinadas provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

Con todo, la pequeña propiedad rústica y urbana, los talleres artesanales y la pequeña empresa industrial, extractiva o comercial, definidos por la ley, así como la vivienda habitada por su dueño, no pueden expropiarse sin pago previo del total de la indemnización.

Un Estatuto especial regulará todo lo concerniente a la propiedad minera y al dominio de las aguas.

17.— El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Este derecho comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que señale la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial, lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.

18 — El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de algunos derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

La integridad territorial de Chile comprende la de su patrimonio ambiental.

19.— El derecho a la salud.

El Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones integradas de salud.

Es deber preferente del Estado la ejecución de acciones de salud, sin perjuicio de la libre iniciativa particular en la forma y condiciones que determine la ley.

20.— La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena en los casos que ella determine.

Toda persona tiene, asimismo, derecho a la libre elección del trabajo y a una justa retribución que asegure a ella y su familia a lo menos un bienestar acorde con la dignidad humana.

La ley establecerá mecanismos que contemplen formas de participación del trabajador en la comunidad humana de trabajo que constituye la empresa.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

La colegiación será obligatoria en los casos expresamente exigidos por la ley, la cual sólo podrá imponerla para el ejercicio de una profesión universitaria.

No se podrá exigir la afiliación a una organización sindical como requisitos para desarrollar un determinado trabajo.

La ley establecerá los mecanismos adecuados para lo-

grar una solución equitativa y pacífica de los conflictos del trabajo, los que deberán contemplar fórmulas de conciliación y de arbitraje obligatorios.

La decisión del conflicto, en caso de arbitraje, corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuyas resoluciones tendrán pleno imperio, y velarán por la justicia entre las partes y el interés de la comunidad.

En ningún caso podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado o de las Municipalidades, como tampoco las personas que trabajen en empresas que atienden servicios de utilidad pública, o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional.

21.— El derecho a la seguridad social.

Corresponde al Estado formular la política nacional de seguridad social, controlar el funcionamiento del sistema y asegurar el derecho preferente de los afiliados a efectuar su operación.

La ley establecerá un sistema de seguridad social que satisfaga de modo uniforme, solidario y suficiente los estados de necesidad individuales y familiares producidos por cualquier contingencia y, especialmente, por los de maternidad, vejez, muerte, accidente, enfermedad, invalidez, cargas familiares y desempleo, mediante las correspondientes prestaciones preventivas, reparadoras y recuperadoras.

22.— El derecho a sindicarse en el orden de las actividades de la producción o de los servicios, o en la respectiva industria o faena, en los casos y en la forma que señale la ley.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en un organismo autónomo en la forma que determine la ley.

La ley contemplará mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y su propio financiamiento.

## CAPITULO II

### DE LOS RECURSOS PROCESALES

**ARTICULO 2º**— El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 1, Nº 1, 3, inciso cuarto, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, inciso primero, 16, 17, 19, inciso final, 20, inciso octavo, 22, inciso primero, y en la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La Corte Suprema dictará un auto-acordado que regule la tramitación de estos recursos.

**ARTICULO 3º**— Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en esta Acta Constitucional o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera

otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La Corte de Apelaciones respectiva dictará en tal caso las medidas indicadas en el inciso anterior que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

### CAPITULO III

#### DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES

**ARTICULO 4º**— Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

**ARTICULO 5º**— Todo chileno tiene el deber fundamental de honrar a su Patria, de defender su soberanía y su integridad territorial, y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

**ARTICULO 6º**— El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley, son obligatorios en los términos y forma que ésta determine.

Todos los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares, si no están especialmente exceptuados por la ley.

**ARTICULO 7º**— El deber de acatar las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes, obliga a toda persona, institución o grupo, a obedecer las órdenes que, dentro de sus atribuciones, impartan las autoridades constituidas.

**ARTICULO 8º**— Toda persona tiene el deber de contribuir a los gastos públicos en la forma y casos que la ley señale.

**ARTICULO 9º**— Toda persona tiene el deber de alimentar, educar y amparar a sus hijos conforme a la ley. Los hi-

jos deben honrar a sus padres, socorrerlos en caso de necesidad y, mientras sean menores, respetar su legítima autoridad.

**ARTICULO 10º**— Lo dispuesto en este Capítulo es sin perjuicio de los demás deberes que impongan las leyes.

### CAPITULO IV

#### DISPOSICIONES GENERALES

**ARTICULO 11º**— Nadie puede invocar precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos y libertades que esta Acta Constitucional reconoce, ni para atentar contra la integridad o el funcionamiento del Estado de Derecho o del régimen constituido.

Todo acto de personas o grupos destinado a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido o a la integridad o funcionamiento del Estado de Derecho, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.

**ARTICULO 12º**— Deróganse los artículos 10º al 20º, inclusive, de la Constitución Política de la República, con excepción de los incisos segundo y tercero del Nº 2 del citado artículo 10º, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4º y 5º transitorios de esta Acta Constitucional.

#### ARTICULOS TRANSITORIOS

**ARTICULO 1º**— Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del Nº 2 del artículo 1º de esta Acta continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.

**ARTICULO 2º**— Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación en el Diario Oficial de la presente Acta Constitucional, deberá dictarse la ley relativa a la composición y funcionamiento del organismo contemplado en el inciso sexto del Nº 12 del artículo 1º, y entretanto continuarán rigiendo las disposiciones legales actualmente en vigor que regulan dicha materia.

**ARTICULO 3º**— Dentro del plazo de ciento ochenta días, contados desde que entre en vigencia la presente Acta Constitucional, se dictará la ley orgánica de expropiaciones que se conforme a los preceptos constitucionales promulgados.

Las expropiaciones acordadas antes de entrar en vigor la presente Acta, continuarán rigiéndose hasta su total perfeccionamiento y pago de las indemnizaciones correspondientes, por las disposiciones vigentes a la fecha de promulgación de esta Acta Constitucional.

Las expropiaciones que se acuerden o decreten durante el plazo de seis meses referidos en el inciso primero, se regirán por las leyes pertinentes en lo que no fueren contrarias a la presente Acta Constitucional. En tal caso, se considerará como valor provisional de la indemnización el que se determine conforme a esas leyes.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la ley podrá establecer normas especiales en lo relativo a la toma de posesión material, si se tratare de la expropiación de terrenos destinados a viviendas que aquélla califique como sociales.

**ARTICULO 4º**— Mientras no se dicte el Estatuto especial a que se refiere el inciso 7º del Nº 16 del Art. 1º de esta Acta, mantendrán su vigencia las disposiciones de los incisos 4º, 5º, 6º y 10º de la Constitución Política de la República.

La Gran Minería del Cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17º transitoria de la Constitución Política, continua-

rá rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de la presente Acta Constitucional.

**ARTICULO 5º**— Mientras no se dicte el Estatuto especial a que se refiere el inciso segundo del Nº 14 del artículo 1º de esta Acta, quedarán vigentes las disposiciones del artículo 10º Nº 7 de la Constitución Política de la República, en cuanto sean compatibles con las Actas Constitucionales, el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y toda norma dictada conforme a ésta, la Declaración de Principios de aquélla, de 11 de marzo de 1974, y el documento denominado Objetivo Nacional de Chile, de 23 de diciembre de 1975.

**ARTICULO 6º**— No obstante lo prescrito en el inciso sexto del Nº 20 del artículo 1º de esta Acta, mantendrán su vigencia las leyes que hayan establecido la colegiación de actividades o profesiones no universitarias con anterioridad a la vigencia del presente cuerpo constitucional, mientras ellas no sean modificadas.

**ARTICULO 7º**— Mantiénese en conformidad a la ley la suspensión de la vigencia del artículo 9º de la Constitución Política de la República.

**ARTICULO 8º**— La presente Acta Constitucional entrará en vigencia el 18 de Septiembre de 1976.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.



Anexo 7

Acta Constitucional No. 4, de fecha 11 de septiembre de 1976:  
"Regímenes de Emergencia"

Santiago, 11 de septiembre de 1976.

Considerando:

1º— Que es deber natural y constitucional del Estado promover el bien común, cuya consecución sólo es posible mediante la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de la comunidad, al que es consustancial la seguridad nacional considerada como la aptitud del Estado para garantizar ese desarrollo, precaviendo y superando las situaciones de emergencia que pongan en peligro el logro de los objetivos nacionales.

2º— Que esas situaciones de emergencia, constituidas esencialmente por la guerra, la conmoción interior, la subversión latente y la calamidad pública, reclaman los correspondientes estados jurídicos de excepción con facultades que permitan conjurarlas, en su amenaza o realización.

3º— Que el reconocimiento de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y, en consecuencia, merecen pleno respeto en su seguridad, libertad y demás derechos inherentes a la persona humana que el Acta Constitucional N° 3 les asegura, está ligado al deber que esa misma Acta les impone, como miembros de la comunidad, de contribuir a preservar la seguridad nacional.

4º— Que, de este modo, y como lo establece la generalidad de las legislaciones, es natural que en las situaciones de anormalidad señaladas, algunos de los derechos fundamentales, que los preceptos constitucionales garantizan, se vean suspendidos en su vigencia o limitados o restringidos en su ejercicio, en aras de los superiores intereses de la Patria

5º— Que, sin embargo, tal suspensión o restricción de los referidos derechos debe guardar proporción con la gravedad de la emergencia de que se trata, para no imponerlas, sino en la medida en que resulten estrictamente necesarias para la supervivencia de la soberanía, la integridad territorial, el ordenamiento institucional y la normalidad de la vida nacional.

6º— Que el rango y jerarquía de los derechos que es preciso suspender o restringir exigen rodearlos de especiales garantías en resguardo de la seguridad Jurídica, debiendo señalarse las condiciones que hacen procedente en cada circunstancia su limitación.

7º— Que si bien existen diversas normas, tanto en la Constitución Política de la República cuanto en las leyes vigentes tales como las Nos 6 415, de 1939; 12.927, de 1958, y 16 282, de 1965, modificadas por el DFL. N° 1, de Interior, de 1971, entre otras que permiten la adopción de medidas de excepción en resguardo de la Seguridad Nacional, es conveniente reunir las reordenarlas y sistematizarlas para contar con un cuerpo coherente y armónico, en beneficio de la propia comunidad nacional, y

VISTO: lo dispuesto en los decretos-leyes números 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno, en ejercicio del Poder Constituyente, dicta el siguiente Decreto-Ley con el carácter de Acta Constitucional N° 4

Decreto ley.

ARTICULO 1º— Los derechos y garantías que el Acta Constitucional N° 3 asegura a todas las personas, sólo pueden ser afectados en los casos de emergencia que contemplan los artículos siguientes.

ARTICULO 2º— Son casos de emergencia la situación de guerra externa o interna, la conmoción interior, la subversión latente y la calamidad pública.

ARTICULO 3º— En situación de guerra externa podrá declararse el estado de asamblea; en caso de guerra interna o de conmoción interior, el Estado de Sitio; en el de subversión latente, el estado de defensa contra la subversión, y en el evento de calamidad pública, el estado de catástrofe.

La declaración de los estados de emergencia a que se refiere el inciso anterior, procederá respecto de todo o parte del territorio nacional, y deberá ser decretada por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, salvo en la que se refiere a los estados de asamblea y de catástrofe, para los que no se requerirá dicho acuerdo.

La duración de los mencionados estados, exceptuado el de asamblea, no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de su prórroga sucesiva por períodos no superiores a dicho lapso, si a la expiración del plazo por el cual fueron decretados, se mantuvieren las condiciones que lo hagan procedente.

La facultad de prorrogar los estados de emergencia en conformidad al inciso precedente, como asimismo la de ponerles término, en cualquier tiempo, corresponderá al Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, salvo

en lo que se refiere a los estados de asamblea y de catástrofe para los que no se requerirá dicho acuerdo.

**ARTICULO 4º—** Por la declaración de estado de asamblea, el Presidente de la República queda facultado para privar a un chileno de su nacionalidad, en conformidad al número 4, del artículo 6º de la Constitución Política de la República y para suspender o restringir todos o algunos de los derechos y garantías establecidos en el Acta Constitucional Nº 3 y que resulten estrictamente necesarios para conjurar en su amenaza o realización, la emergencia que la origina, salvo los derechos contemplados en los números 1 y 10 inciso primero, del artículo 1º de esa misma Acta.

**ARTICULO 5º—** Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá privar a un chileno de su nacionalidad, de acuerdo con el número 4 del artículo 6º de la Constitución Política de la República; suspender o restringir la libertad personal y el derecho de reunión.

Si lo estimare imperioso para la conservación de la paz interior, podrá suspender o restringir la libertad de opinión y la de informar y restringir el derecho de asociación.

Si existieren o se organizaren fuerzas rebeldes que pusieran en peligro la conservación del régimen institucional, podrá además restringir la libertad de trabajo, imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones, y disponer requisiciones de bienes u otras limitaciones al derecho de propiedad, con el fin de prevenir o asegurar el éxito de las acciones u operaciones que deban realizarse para actuar en contra de dichas fuerzas rebeldes.

**ARTICULO 6º—** Por la declaración de estado de defensa contra la subversión, el Presidente de la República sólo podrá restringir la libertad personal, la de informar y el derecho de reunión. Si lo estimare indispensable para impedir la materialización de la subversión, podrá también suspender la li-

bertad personal y el derecho de reunión; restringir la libertad de opinión y el derecho de asociación.

Con todo, durante la vigencia del estado de excepción a que se refiere este artículo, la persona que se viere afectada por una medida de arresto o traslación a un lugar del país por un término que sobrepasare los seis meses, continuo o discontinuo, tendrá derecho a optar por el abandono del territorio nacional, salvo que, por razones de especial gravedad, así calificadas por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, el ejercicio de dicha opción por parte de aquélla, resulte peligroso para la seguridad nacional.

El derecho de opción a que se refiere el inciso precedente, será sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, que pudieren obstar a su ejercicio.

**ARTICULO 7º—** Por la declaración de estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir la circulación de personas y el transporte de mercaderías.

Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al derecho de propiedad, con el fin de proveer de elementos indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población.

Si estimare que la gravedad de la catástrofe lo requiere, podrá, además, restringir las libertades de trabajo, de opinión y de informar.

**ARTICULO 8º—** Las medidas que se adopten durante los estados de excepción referidos en el artículo 3º no podrán tener más duración que la que corresponda a la vigencia de dichos estados, salvo lo dispuesto en el número 4 del artículo 6º de la Constitución Política de la República.

Los arrestos que se dispusieren en virtud de los artículos 4º, 5º y 6º de esta Acta Constitucional sólo podrán practicarse en la residencia del afectado o en lugares que no sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes.

La medida de traslado de una persona a un lugar determinado del país, que se dispusiere en virtud de los artículos 4º, 5º y 6º de esta Acta Constitucional, deberá cumplirse en localidades urbanas.

**ARTICULO 9º**— Las requisiciones que sea necesario practicar, de acuerdo con los artículos 4º, 5º y 7º, darán lugar a indemnización en conformidad a la ley.

Igual norma se aplicará a las limitaciones o restricciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación del dominio o de alguno de sus atributos o facultades esenciales.

**ARTICULO 10º**— El Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando corresponda, podrá hacer extensiva la suspensión o restricción de las garantías constitucionales referidas en los artículos anteriores, a regiones o zonas no comprendidas en los respectivos estados de asamblea, sitio, defensa contra la subversión o catástrofe.

**ARTICULO 11º**— La ley que complemente la presente Acta Constitucional podrá contemplar diferentes grados en los estados de sitio, de defensa contra la subversión y de catástrofe, y determinará las garantías señaladas en los artículos 5º, 6º y 7º que podrán suspenderse o restringirse en cada uno de aquéllos.

**ARTICULO 12º**— El Presidente de la República podrá ejercer las facultades que le confieren los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de esta Acta Constitucional, ya sea por sí o por medio de las autoridades que señale la ley a que se refiere el artículo anterior.

**ARTICULO 13º**— Durante los regímenes de emergencia y tratándose de hechos que afectan a la seguridad del Estado, el plazo de cuarenta y ocho horas a que se refiere el inciso segundo de la letra b) del Nº 6 del artículo 1º del Acta Constitucional Nº 3, será hasta de diez días.

**ARTICULO 14º**— Los recursos de protección y de amparo establecidos en los artículos 2º y 3º del Acta Constitucional Nº 3, sólo serán procedentes en la medida que sean integralmente compatibles con las disposiciones legales que rijan las referidas situaciones de emergencia.

**ARTICULO 15º**— Deróganse los números 12, del artículo 44º, y 17, del artículo 72º, de la Constitución Política de la República, y el Nº 14 del artículo 10º del Decreto Ley Nº 527, de 1974.

La referencia que el Nº 4 del artículo 6º de la Constitución hace al artículo 72º, Nº 17, del mismo cuerpo, debe entenderse hecha a los artículos 4º y 5º de la presente Acta.

**ARTICULO TRANSITORIO.**— La presente Acta Constitucional comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo prescrito en el artículo 13º, que entrará en vigencia desde la fecha de dicha publicación y de lo dispuesto en el artículo 14º, que empezará a regir conjuntamente con el Acta Constitucional Nº 3, el 18 de septiembre de 1976.

Dentro del plazo de ciento ochenta días referido en el inciso anterior, deberá dictarse la ley complementaria de la presente Acta Constitucional.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.

Anexo 8

Carta de Respuesta del señor Ministro del Interior, de fecha 28 de mayo de 1976, al señor Obispo de Talca, Monseñor Carlos GONZALEZ Cruchaga, en relación con 23 personas detenidas en su diócesis

C O P I A

---

"Santiago, 28 de mayo de 1976

"Monseñor  
"Carlos González C.,  
"Obispo de Talca,  
"Talca.

"En respuesta a su petición verbal formulada ante el  
"Ministro infrascrito en el sentido de que se estudie la  
"posibilidad de que se apliquen medidas moderadas por ra-  
"zones humanitarias a Orlando Felidor Mardones Badilla y  
"otros, en total 23 personas arrestadas por las faculta-  
"des constitucionales del Estado de Sitio, y todos aque-  
"llos feligreses de su Diócesis, cúpleme expresarle que  
"las siguientes personas han sido liberadas en virtud del  
"Decreto exento que se señala en cada caso:

"D.E. 2069 de 19-5-76 Régulo del Carmen Bravo Soriano  
"D.E. 2077 de 24-5-76 Sergio Antonio González Castillo,  
"Manuel Barrios Vera, Gregorio Lartiga Calderón, Ma-  
"ría Eugenia González Saavedra.  
"D.E. 2078 de 24-5-76 César Montiel Barría, Gerardo Iván  
"Sánchez Bustos, Bernardo Valenzuela Arce, Alberto  
"Rivera Díaz, Miguel Retamal Sepúlveda y Luis Benito  
"Marchant Verdugo.

"Del resto de las personas señaladas en su lista, le  
"hago presente a Monseñor que se espera el informe y pro-  
"posición de la Dirección de Inteligencia Nacional, res-  
"pecto a la conveniencia de acoger o rechazar la petición  
"planteada, según lo expresado en mi oficio (R) Nro. 2212,  
"de fecha 20 de mayo de 1976".

Saluda a Ud. muy atentamente,

Fdo. Raúl BENAVIDES Escobar  
General de División  
Ministro del Interior

Anexo 9

Declaración manuscrita del señor Julio Hernán MAIGRET Leyton, morador  
de la propiedad ubicada en calle Alejandro Fierro No. 5513,  
desmintiendo la afirmación hecha en el Informe

Yo Julio Hernán Maigret Legón 6.11

Carnet # 3.745 846 S. Exp. Carretero mecánico

Casado con Ana María Becerra Barrera

dos hijos, 12 - y 16 años domiciliado en

Rio Snake 2263 trabajo en El Ejemplo

Fierro 5113 donde tengo mi taller de

carrojería. donde permanezco de 8.30 a 12.30

Yago presenta una vez y una de la semana.

María Mercedes Barrera madre de Germán

Becerra.

Recuerdo que el 30 de abril alrededor de las 11.00

concurrió a este domicilio, bajando Fierro

5113, personal de Rincón, el que permaneció

por algunos días, siendo su conducta

correcta, caballerosa, respetuosa, no existió

en ningún momento problema alguno.

No se detuvo a nadie más allá de lo que a ninguna

persona.

Por encargo de mi esposa concurrió al domicilio

ya indicado el sacerdote de nombre

don Enrique Álvarez. Tratándose un asunto por lo

los oídos, yo personalmente le abrí la puerta

y lo hice pasar, al me preguntó si yo era

Hernán le dije que sí a lo cual el me preguntó

cómo estaban todos en casa, contestándole

que estábamos todos bien.




6.a.

Posteriormente al personal de línea con-  
so en forma privada con el señor L. Lirio  
Enrique Alvarado. Posteriormente se retiro de este  
domicilio el señor L. Lirio sin haber problema  
alguno.

Blago esta declaración en forma libre sin  
ningún apremio de ninguna especie y apartada  
estrictamente a la verdad vale decir como  
católicos y cumplente en ellos.

En virtud que mi suegra doña Maria Me-  
cedes Barrera viuda de Becerra, no sabe escribir  
ni leer ratifica en todas sus partes lo expuesto  
por mi en esta declaración para constancia  
firmo y ella pone su impresión digital.

Santiago, 30 de Sept. 1976.

 Miguel

Anexo 10

Declaración manuscrita del señor Luis LACOSTE Ossa, morador de la  
propiedad ubicada en calle Conferencia 1587, desmintiendo la  
afirmación hecha en el Informe

Luis Alberto Mesa

ANEXO F.O

Comet 2898007 Ltj

Donciliado en conformidad 1587 Ltj  
Certifico que durante mi permanencia  
en esta casa no ha sido allanada  
ni detenida ninguna persona por  
fuerzas policiales ni militares e  
Investigaciones.

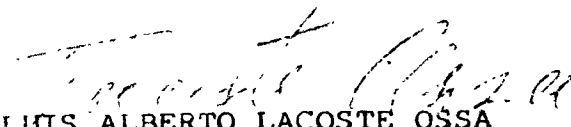
~~Luis Alberto Mesa~~

Luis Alberto Mesa  
Comet 2898007 Ltj

LUIS LACOSTE OSSA, carnet de identidad N° 2898007,  
de Santiago, domiciliado en calle Conferencia N°  
1587, de la Comuna de Santiago;

Certifico que durante mi permanencia en esta casa  
no ha sido allanada ni detenida ninguna persona  
por fuerzas policiales ni militares e investigacio-  
nes .-

Santiago, Septiembre de 1976.

  
(Firmado) LUIS ALBERTO LACOSTE OSSA  
C/I. N° 2898007 Santiago

Anexo 11

Copias del Decreto de detención, Comunicación de Detención, Acta de Allanamiento del domicilio y Acta de Allanamiento de la Oficina del señor Hernán MONTEALEGRE que comprueban el estricto cumplimiento de todas las normas legales vigentes

REPÚBLICA DE CHILE  
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL

ANEXO S. a.

REF. Ley de Estado de Sitio

OBJ. Detención

SANTIAGO, 12 Mayo 1976

*Purén*

ORDEN DE DETENCIÓN

1.- Montealegre Kleuner Heras  
Apellidos y Nombres del Detenido

2.- Claudio Torres  
Apellidos y Nombres del Aprehensor

3.- 4 Alamos  
Lugar de Detención ( Recinto )

4.- 12 Mayo 1976 0515 hrs  
Fecha de la Detención Hora

5.- ~~Provincia de Valparaíso~~ Providencia 2433 Depto 303  
Lugar de la Detención

6.- Dir DINA  
Nombre y Cargo de la Autoridad que dispuso la Detención.

REPUBLICA DE CHILE  
DIRECCION DE INTELIGENCIA NACIONAL

COMUNICA DETENCION DE CIUDADANO

SE COMUNICA A (AL) SR. (A) Maria Luz Novoa Aldunate  
(esposa del detenido)

CEDULA DE IDENTIDAD Nº 4.536.600 GABINETE DE Santiago

QUE DON (A) Herman Montalvo Novoa

DOMICILIADO EN ~~Estadística~~ Depto 303 de  
Provincias 2433

Se comunico detencion a su persona

SANTIAGO, 14 de Mayo 1976

Claudio Torres

NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE COMUNICA.-

Fdo Luis V de Intezalgre

FIRMA DE LA PERSONA INFORMADA  
C/I. 4.536.600-0

DE. Santiago

P. C.

REPUBLICA DE CHILE  
Dirección de Inteligencia Nacional

ACTA DE ALLANAMIENTO

En Santiago, a 12 de Mayo de 1976, se procedió a allanar el inmueble ubicado en ~~Ped. Valdivia 400~~  
Depto 303 de Providencia 2133  
siendo su propietario la señora Maria Luz Novoa Aldunate

El allanamiento se llevó a cabo a las 05:15 hrs.  
y bajo firma Doña Maria Luz Novoa Aldunate  
Certifica que no se produjeron daños físicos a la propiedad ni lesiones a los moradores de ninguna índole.

a SANTIAGO, 12 de Mayo 1976

M. Luz N. de Montcallegre

Nombre y firma del dueño del inmueble

Maria Luz Novoa Aldunate

C. I. 4.436.680-0 de S. P.

Chad. Torres

Nombre y firma del encargado del  
allanamiento.



REPUBLICA DE CHILE  
Dirección de Inteligencia Nacional

ACTA DE ALLANAMIENTO

En Santiago, a doce de Mayo - 1976, se procedió a allanar el inmueble ubicado en Haciendas N° 1189 - 7° piso - Oficina N° 2 siendo su propietario el señor Hernán Montenegro Klepper

El allanamiento se llevó a cabo a las 09<sup>00</sup> hrs. y bajo firma del MARTIN ARCEVALO CONTRERA

Certifica que no se produjeron daños físicos a la propiedad ni lesiones a los moradores de ninguna índole.

a SANTIAGO, 12 de Mayo 1976

MARTIN ARCEVALO CONTRERA

Nombre y firma del dueño del inmueble

sección de la oficina

ALBERTO REYES

Nombre y firma del encargado del allanamiento.

Anexo 12

Declaración Jurada de Sr. y Sra. ... contenida como prueba en el Informe del Grupo de Trabajo

Documento que por su naturaleza anónima y su contenido no puede constituir prueba en ningún procedimiento serio

De acuerdo con la legislación chilena los Registros de los Notarios son públicos y en ellos se anotan los actos de comparecencias, con la ritualidad señalada en la ley. El día 30 de junio, fecha de la declaración citada por el Grupo, no se encuentra ninguna comparecencia encabezada en la forma señalada por el Grupo.

d) Detención del Sr. y la Sra.

187. El Grupo recibió la siguiente declaración jurada de fuentes fidedignas. Se han omitido los nombres y las direcciones conforme al compromiso asumido por el Grupo de respetar el carácter confidencial de las informaciones.

"En Santiago, a treinta de junio de mil novecientos setenta y seis, comparece ante mí, Notario Público de este Departamento, don \_\_\_\_\_ chileno, domiciliado en Conchalí, cédula de identidad N° \_\_\_\_\_, del Gabinete de Santiago, quien debidamente juramentado expone:

Que el día sábado 22 de mayo del presente año fui informado por vecinos míos de que personas de civil, que se identificaron como pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), habían preguntado por mí en el barrio, interesándose especialmente en mis actividades y lugar de trabajo; que al día siguiente, estas mismas personas volvieron al barrio, y esta vez comenzaron a inquirir entre los vecinos datos acerca de mi cuñado, don Antonio\_\_\_\_, casado con mi hermana doña Elizabeth \_\_\_\_\_; que el día lunes 24 de mayo al salir de compras en el sector de mi casa, pude notar que era vigilado por personas de civil, a quienes yo no conocía; posteriormente ese mismo día lunes, en horas de la tarde me dirigí al centro de la ciudad a fin de hacer unas diligencias, y siendo aproximadamente las 15 horas, al bajarme de la micro en calle Alameda esquina de Amunátegui, fui detenido por personas de civil, que abruptamente me subieron a un automóvil, marca Fiat 125, color plomo; esta detención se efectuó sin que en ningún momento se me intimara la respectiva orden de detención; que una vez me introdujeron al vehículo, me vendaron los ojos y me condujeron a un lugar ubicado en el sector Peñalolén, lo que me consta por cuanto el scotch puesto con la venda, no quedó bien ubicado en uno de los ojos, por lo que pude observar la trayectoria; llegamos a una casa, que pude identificar como el lugar denominado "Villa Grimaldi", lugar de

reclusión utilizado por la DINA; que poco rato después de haberme ingresado a "Villa Grimaldi", me llevaron a una sala distinta, en la que procedieron a interrogarme; este interrogatorio se centró en preguntas respecto de mi hermana, Elizabeth, y de mi cuñado, Antonio, inquiriéndome insistentemente acerca de sus actividades, y pude percatarme que estaban bastante informados acerca de las actividades que desarrollaban tanto mi hermana como mi cuñado, como también, en qué se habían desempeñado con anterioridad al 11 de septiembre de 1973; durante este interrogatorio me afirmaron que me dejarían en libertad sólo cuando detuvieran a mi hermana y a mi cuñado, a quienes lógicamente estaban buscando precisamente para detenerlos; durante este interrogatorio me preguntaron por una persona a la cual me describieron como rubio, medio gordito, que andaba con un chaletín, y que iba con frecuencia a la casa, como también, a qué iba esta persona a nuestra casa; la persona a la cual hacían referencia es don Juan -, a quien yo conozco desde hace varios años, ya que era compañero de curso, en la Universidad, de mi cuñado Antonio, y en el último tiempo estaban haciendo juntos su trabajo de memoria para la Universidad Técnica del Estado, razón por la cual, incluso Juan - se quedaba a veces a dormir en el departamento de mi hermana y mi cuñado; una vez finalizó el interrogatorio, fui sacado de "Villa Grimaldi", en el mismo vehículo que se me detuvo, y me expresaron que me llevaban "a ver si es tu hermana la persona que buscamos"; al llegar al centro de la ciudad me sacaron la venda, y estacionaron el vehículo en la calle Lord Cochrane, frente al lugar donde trabaja mi hermana, a esperar que ésta saliera, para realizar el reconocimiento; aproximadamente a las dieciocho treinta horas, llegó hasta el lugar mi cuñado Antonio, en la citroneta en que se movilizaba, perteneciente a la firma en que trabaja, salió mi hermana, se subió a la citroneta y partieron; al momento de llegar mi cuñado y ser visto por los agentes de DINA que estaban en el vehículo junto a mí, éstos exclamaron: "éste es el        16/ que andamos buscando hace tiempo", comparándolo con la fotografía de tamaño carnet que de él tenían en sus manos, y que me habían mostrado anteriormente durante el interrogatorio; al ver a mi hermana estas personas de DINA expresaron en voz alta igualmente: "ahí viene la        16/ que buscamos"; una vez que partió la citroneta de mi cuñado Antonio, partió el vehículo Fiat 125, en que me tenían, detrás de ella, con la intención de detener a sus ocupantes; sin embargo, varias cuadras más allá, la citroneta se perdió de vista, ante lo cual los agentes de DINA expresaron a viva voz su malestar por el hecho de que se les habían escapado, ya que lo que pretendían ellos era detenerlos; luego de esto fui nuevamente llevado a "Villa Grimaldi"; allí permanecí hasta que el día miércoles 26 de mayo, aproximadamente a las 19.00 horas, sentí el ruido del motor de una citroneta que llegaba al patio de la "Villa Grimaldi", la que pude individualizar claramente como la citroneta que usaba mi cuñado Antonio para movilizarse, ya que tenía un ruido característico en el motor al detenerlo, pues seguía emitiendo un ruido la correa del ventilador; en ese momento escuché un grito, de una voz de mujer, la que reconocí indiscutiblemente como la de mi hermana Elizabeth, lo que significa que ella llegaba en ese momento a "Villa Grimaldi" finalmente detenida por quienes la habían seguido durante días en procura de detenerla; un rato después sentí nuevamente el ruido del motor de la citroneta, que me permitió ratificar la impresión anterior, en el sentido

---

16/ Aparece en blanco en el original.

do que se trataba de la citroneta que usaba mi cuñado Antonio, y que pertenecía a la empresa en la cual trabajaba; algo así como un par de horas más tarde, llegó hasta la celda en que se me mantenía un guardia, el que me dijo que me podía ir, pero que no hablara nada de lo ocurrido, ya que de hacerlo no serían tres días los que estaría allí, sino mucho más; verificado una vez más, fui conducido a una camioneta, cuyos ocupantes me reiteraron las amenazas del guardia ya aludidas, y me botaron finalmente cerca del Cerro San Cristóbal, desde donde regresé a mi casa; debo recordar aquí lo expresado al momento que me interrogaron en el sentido de que sólo sería dejado en libertad una vez que detuviesen a mi hermana y mi cuñado, lo que coincide plenamente con el hecho de haber oído la citroneta como la voz de mi hermana en el interior de "Villa Grimaldi"; al día subsiguiente, fui al departamento donde vivía mi hermana con su esposo, pudiendo constatar que ellos no se encontraban en él, y mirando por la ventana observé que en el interior había un gran desorden, con cosas en el suelo y todo revuelto, signos evidentes de haber sido allanado el departamento; el mismo día viernes, fui también a los respectivos lugares de trabajo de mi cuñado y de mi hermana, donde constaté que ellos no habían ido a trabajar desde el día jueves, siendo el miércoles 26 el último que concurrieron a su trabajo; en la empresa constructora, donde trabajaba mi cuñado y a la cual pertenecía la citroneta en que se movilizaba y que yo oí en "Villa Grimaldi", me confirmaron que no tenían noticia acerca de este vehículo."

Anexo 13

Copia de la comunicación de fecha 24 de marzo de 1976, por medio de la cual la Prefectura Santiago Oriente, 13a. Comisaría, Nuñoa, del Cuerpo de Carabineros de Chile, da cuenta al Segundo Juzgado Militar de Santiago del fallecimiento de don Patricio Amador ALVAREZ en un enfrentamiento con las fuerzas del orden

C O P I A

CARABINEROS DE CHILE  
REFECTURA SANTIAGO ORIENTE  
13a. COMISARIA ÑUÑO A  
GUARDIA

(Da cuenta de maltrato de obra a Carabinero de servicio.-)

Nr. 5.- /

ÑUÑO A, 24 de marzo de 1976.-

AL SEGUNDO JUZGADO MILITAR DE SANTIAGO

CIUDAD

Doy cuenta a US., que hoy a las 00:40 horas, en circunstancias que el Cabo 1º Luis Fernández Cárdenas y el Carabinero ALEXIS MELLA SALINAS, de dotación del Grupo de Aspirantes a Oficiales de la Escuela de Carabineros "General Carlos Ibáñez del Campo", se encontraban de servicio en el Instituto Superior de Carabineros, ubicado en Irarrázaval esquina de Montenegro, interceptaron a un individuo de aproximadamente 23 años de edad, que corría por la vereda sur de Avda. Irarrázaval en dirección al Oriente.

Al ser interrogado, manifestó no tener cédula de identidad, por cuya razón el Cabo FERNANDEZ, después de allanarlo superficialmente, se dirigió al interior del Instituto Superior de Carabineros, con el objeto de solicitar cooperación a la Central de Comunicaciones, para enviarlo en calidad de detenido por sospecha a la 13a. Comisaría Ñuñoa, instante que el individuo aprovechó para golpear con los puños al Carabinero MELLA, dándose a la fuga por Irarrázaval y a la calle Los Cerezos en dirección al Sur, razón por la cual el Carabinero MELLA, le dió la voz de "ALTO" y al ver que éste no obedecía, hizo uso de la Carl-Gustaf N° 100, disparando 7 tiros, los 4 primeros al aire y con uno de los 3 restantes impactó al individuo en la región dorsal lado derecho, con salida de proyectil, el que cayó en la vereda Oriente de la calle los Cerezos, frente al N° 46, falleciendo instantáneamente.

El Sargento 2do. LUIS RODRIGUEZ BRIONES, de servicio de 3er. turno a cargo del Furgón Z-353 de R.P. a las 00:30 horas le había encargado a la pareja de servicio un individuo de similares características a las que presentaba el occiso, ya que momentos antes en Irarrázaval esquina Brown Norte, un grupo de personas que esperaba locomoción colectiva, le hicieron presente al Suboficial en mención, que un individuo que vestía pantalón oscuro, camisa a cuadrillé, se había lanzado en más de una oportunidad contra de los vehículos que transitaban por ese lugar.

El Carabinero Alexis MELLA Salinas, resultó con una lesión en el labio superior de carácter leve, según pronóstico del médico de turno del Hospital de Carabineros.

Al lugar del sitio del suceso concurrieron la Brigada de Homicidio a cargo del Inspector Domingo Pinto Arrieta.

Prevía autorización telefónica del Fiscal de turno, Mayor Sr. Rolando Melo S. de Ejército, el cadáver fue levantado y remitido al Instituto Médico Legal, con oficio Nro. 100 de esta fecha.

El occiso portaba la suma de \$ 5,65 y un frasco de plástico que contenía agua oxigenada en su interior, de 55 cm, lo que se remite con el presente parte a ese Tribunal.

El Cabo y el Carabinero en mención quedan en espera por parte de ese Tribunal. FDO. AMADOR ARROYO FAUNDEZ

Sgto. 2do. de Carabineros, SUBOFICIAL DE GUARDIA. V°B°. FELIX MIGUEL OPAZO FARIAS, Capitán de Carabineros. SUBCOMISARIO DE LOS SERVICIOS. COMISARIO SUBROGANTE.-

CERTIFICADO

Es copia fiel a su original.

ÑUÑO A      Junio de 1976.      Una firma ilegible. Un timbre del Cuerpo de Carabineros de Chile.



Anexo 14

Notas de fecha 1<sup>o</sup> y 21 de septiembre pasado, respectivamente, de las Misiones Permanentes de Chile ante Naciones Unidas con sede en Ginebra y Nueva York, dirigidas una al señor Ghulam Alí ALLANA, y la otra al señor Secretario General de las Naciones Unidas, en relación con el fallecimiento del ciudadano chileno don Carmelo SORIA

Nº 1132.-

La Delegación Permanente de Chile ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, saluda muy atentamente al señor Ghulam Ali Allana, Presidente del Grupo de Trabajo Ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y tiene el honor de acompañarle diversos antecedentes que dicen relación con el fallecimiento del señor Carmelo Soria Espinoza.

Dicha información está compuesta por oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago al señor Ministro de Justicia; informe del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago al Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; e, informe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros al Ministerio del Interior.

Cabe agregar a esos antecedentes que, según estadística detallada llevada a cabo por Carabineros desde comienzo de 1975 a la fecha, se han desbarrancado 18 vehículos desde el Camino del Alba hacia el Canal El Carmen.

La Delegación Permanente de Chile se vale de esta oportunidad para reiterar al señor Ghulam Ali Allana, Presidente del Grupo de Trabajo Ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Ginebra, 1º de septiembre de 1976.

N° 1015/109

Nueva York, 21 de septiembre de 1976

Señor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con la consulta que tuviera a bien formularme el día 2 del mes en curso y que dice relación con el fallecimiento del funcionario chileno del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) don Carmelo SORIA Espinoza.

Sobre este particular y como es de conocimiento de Vuestra Excelencia, los Tribunales de Justicia de Chile, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, de conformidad con el procedimiento habitual para estos casos y a través del órgano jurisdiccional competente -- el Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago -- tomaron conocimiento de los hechos relacionados con el sensible fallecimiento del señor SORIA. En efecto, mediante el parte de rigor, la Tenencia del Cuerpo de Carabineros de "El Salto" comunicó el día 16 de julio del año en curso, que a las 11:40 horas fue encontrado el cadáver del señor Carmelo SORIA Espinoza, en el interior del canal de regadío "El Carmen" y que a unos 800 metros aguas arriba se encontraba un automóvil, marca Volkswagen, color blanco invierno, patente O.N.U. 164, de 1976. La citada documentación indica que

al parecer el automóvil señalado volcó desde el camino "La Pirámide", rodando aproximadamente unos 200 metros por la pendiente del cerro, quedando en el interior del canal totalmente dañado. Metros antes del borde del canal se encontraron un librito de cheques del Banco Sudamericano, un Pasaporte de Naciones Unidas N° 63431 y una cédula de identidad N° 2.898.403, del Gabinete de Santiago, documentos todos a nombre de Carmelo SORIA Espinoza.

La inspección ocular practicada por el Tribunal que conoce de la causa el día 22 de julio pasado, deja constancia del lugar en que fue encontrado el cadáver de la víctima, a unos 200 metros del camino principal, agregando que, según Carabineros, el cuerpo del señor SORIA se encontraba en el interior del Canal y sujeto por una rama de eucaliptus. Cabe añadir que para encontrar el cadáver del señor SORIA en el interior del canal fue necesario interrumpir el curso de agua y rastrearlo.

El mismo documento del Tribunal deja constancia que a unos 1.000 metros al Oriente del lugar en que fue encontrado el cuerpo de la víctima y en subida por la ladera Poniente del cerro -- es decir aguas arriba -- se encontraba el automóvil Volkswagen, ya individualizado, también en el interior del canal y el cual había tenido un desplazamiento por la ladera del cerro desde el camino "La Pirámide", observándose aún en esa fecha las marcas sobre la vegetación en un movimiento en zig-zag.

La distancia que existe entre el lugar en que fue encontrado el vehículo y aquél en que lo fue el cuerpo del malogrado señor SORIA se habría debido al arrastre producido por el caudal de las aguas del canal "El Carmen", como se desprende de la documentación en poder del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía.

El protocolo de autopsia de la víctima concluye que la causa de la muerte es un traumatismo c<sup>o</sup>rvico-to-ráxico y cráneo-encefálico. Además, indica que ésta presentaba un índice de alcoholemia de 1.49 grs. por mil, lo que significa estado de intemperancia. Con todo, el Tribunal ha decretado una pericia mecánica para determinar las condiciones técnicas del vehículo, en especial su sistema de seguridad, y si los daños presentados por éste son imputables a volcamiento, choque o arrastre. Al mismo tiempo, ha solicitado un dictámen sobre la base de una relación causal entre las lesiones presentadas por la víctima, según la autopsia, y los cuerpos duros del interior del automóvil. Además, se ha requerido al médico legista que amplíe las citadas conclusiones del protocolo de autopsia.

En relación con la petición de Vuestra Excelencia de que las autoridades chilenas designen un Ministro en Visita para el conocimiento de este caso, puedo informarle que el Ministerio de Justicia, pese a no considerarlo conveniente para la investigación por ahora, hará las gestiones del caso ante los Tribunales de Justicia para que éstos, únicos competentes para resolver la cuestión, decidan si procede o no tal designación.

Debo reiterar a Vuestra Excelencia que todos los hechos vinculados a este penoso episodio están sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia de Chile, los cuales, fuera de ser los únicos competentes para intervenir en este delicado asunto, son independientes de cualquier otro Poder del Estado en el ejercicio de sus funciones. Ellos están aplicando al caso las disposiciones pertinentes de la legislación chilena de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley para esta clase de investigaciones y diligencias.

Puedo asegurar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de Chile comparte su vivo interés por aclarar en definitiva los hechos y que los Tribunales Ordinarios de Justicia están trabajando para ello con su habitual independencia, diligencia y seriedad. Cualquier otra información que es tá Misión Permanente reciba en relación con esta materia, me haré un deber ponerla en conocimiento de Vuestra Excelencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.



ISMAEL HUERTA DIAZ  
Vicealmirante  
Embajador Representante Permanente

Anexo 15

Lista de dependencias del sótano del edificio del Congreso  
Nacional de Chile, ubicado en Santiago

Ropería y Servicios higiénicos para personal de auxiliares.

Talleres de cerrajería, mecánica y electricidad.

Instalación de aire acondicionado para el hemicycleo.

Calderas para la calefacción del edificio.

Instalación del sistema de circuito cerrado de televisión.

Motobombas para circulación del agua.

Montacargas.

Bodegas.

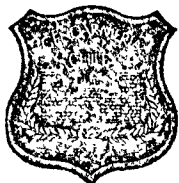
Salida para extracción basuras.

Anexo 16

Certificado del Director General del Servicio de Gendarmería de Chile  
desmintiendo que personal de la Dirección de Inteligencia Nacional  
"tenga libre acceso a los establecimientos que se encuentran bajo su  
dependencia"



REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE JUSTICIA



SECRETARIA PRIVADA  
AYUDANTIA GENERAL

ANEXO H.Q.

C E R T I F I C A D O

*MM*

Certifico que el Servicio de Gendarmería de Chile , como Organismo de Defensa Social, encargado de la Atención, Custodia y readaptación de los presos obedece ordenes emanadas del Ministerio de Justicia y Tribunales Ordinarios y Especiales de Justicia y desconoce actuaciones emanadas de otros Organismos del Estado que no se encuentren vinculados al Ministerio y Poder Judicial mencionados.

En consecuencia, es falso de falsedad absoluta que personal dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tenga libre acceso a los establecimientos de reclusos con fines ajenos al quehacer penitenciario.

Asimismo, certifico que en los establecimientos solo se encuentran reos comunes en calidad de detenidos, procesados y condenados de los Tribunales del país y que jamás se ha usado violencia física ni moral en el trato cotidiano existente entre el Personal y los reos, hecho que implícitamente se encuentra confirmado con las Visitas Ordinarias y Extraordinarias de Cárceles efectuadas por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministros de las Cortes de Apelaciones del país y Jueces del Crimen , al no haberse recibido en aquellas oportunidades quejas por maltrato de hecho ni de palabra por parte del Personal de Gendarmería a los reos.

Cabe hacer notar que en estas visitas ha tenido acceso directo la prensa escrita, radial y televisiva.

Santiago, 30 de Septiembre de 1973.

Anexo 17

Certificado del Subsecretario del Ministerio de Justicia en relación  
con los exámenes médicos practicados a los señores Patricio BUSTOS y  
José MOYA durante la visita realizada por el Ministro de la Cartera al  
campamento de detenidos de "Cuatro Alamos"

C E R T I F I C A C I O N

El Subsecretario del Ministerio de Justicia de la República de Chile, que suscribe certifica, a petición del delegado chileno ante la Organización de las Naciones Unidas don Miguel Alex Schweitzer Walter, los siguientes hechos:

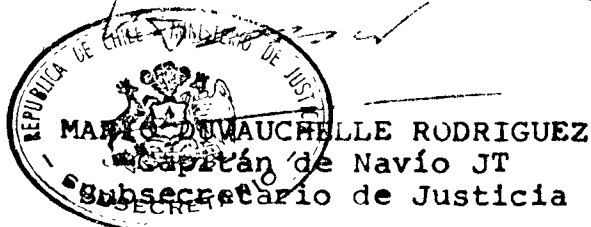
1. <sup>9</sup> Que el Sr. Ministro de Justicia, don Miguel Schweitzer Speisky, se constituyó de conformidad con lo prevenido en el D.S. 187, de Justicia, del 30 de Enero de 1976 y 146, del Interior, del 25 de Febrero de 1976, en forma intespestiva la noche del 3 al 4 de Marzo entre las 24 y las 02:45 hrs., en el Campamento de Detenidos conocido con el nombre de "Cuatro Alamos", acompañado del suscrito, en su calidad de Subsecretario de la Cartera de Justicia, del Director del Servicio Nacional de Salud Dr. René Merino Gutiérrez y del Director del Servicio Médico Legal Dr. Alfredo Vargas Baeza.

2. <sup>2</sup> Que en la oportunidad antes señalada, entre otras actuaciones y diligencias practicadas destinadas a verificar si se cumplían en dicho Campamento las normas dispuestas en el D.S. 187 antes mencionado, se practicaron las siguientes:

a) Se examinó por los médicos integrantes de la visita Drs. Merino y Vargas al detenido Sr. Erwin Patricio Bustos Strecker, advirtiéndose que tenía una inflamación en un testículo (hidrocele) y al detenido Sr. José Moya Raurich, diagnosticándose que padecía de micosis.

b) En atención a lo señalado en la letra a) precedente, se dispuso de inmediato que los detenidos antes mencionados fueran objeto de atención médica.

3. <sup>2</sup> En visita posterior, también intespestiva, practicada por el Sr. Ministro de Justicia y de los médicos mencionados en el párrafo 1) precedente el día 20 de Mayo de 1976 entre las 09:00 y las 14:00 hrs. en el Campamento de Detenidos "Cuatro Alamos", pudo constatarse que tanto el detenido Sr. Bustos como el detenido Sr. Moya habían sido debidamente atendidos profesionalmente y se encontraban totalmente restablecidos.



Santiago, 8 de Octubre de 1976.-

Anexo 18

Declaración del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en  
relación con los casos de Manuel GUERRERO, José Miguel MOYA, Claudio  
Eugenio BLANCO, Francisco Javier REYES Ortiz e Iván PARVEX Alfaro

C O P I A

---

DECLARACION DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

"En cuanto a detenidos gravemente heridos, sólo ha tomado  
"conocimiento del caso de Manuel Leonidas Guerrero Ceballos,  
"hecho que denunció al tribunal correspondiente y que ha da-  
"do origen a la instrucción del proceso número 1516-76 por  
la Primera Fiscalía Militar.

"Respecto de José Miguel Moya Raurich y Claudio Eugenio Blan-  
"co Toledo, es ilustrativo reproducir lo que en el informe  
"de una de esas visitas se consignó:

"José Miguel Moya Raurich, Claudio Blanco Toledo, Eugenio  
"Francisco Reyes Ortiz e Iván Parvex Alfaro, personas de la  
"familia de ellos y también de Raúl González Anjari, me ha-  
"bían expresado que se hallaban en mal estado de salud y  
"que no recibían atención médica. Ellos manifestaron estar  
"bien de salud y que habían sido examinados por los médicos.  
"El detenido Oscar de la Fuente Muñoz, se quejó de dolores  
"reumáticos, pero dijo que, en general, se hallaba bien".

Anexo 19

Certificados de la Sección Internacional de Fronteras relacionados con  
Mario Jaime ZAMORANO, Onofre Jorge MUÑOZ, Bernardo ARAYA Zuleta y  
María Olga FLORES Barraza, acreditando su salidad del territorio  
nacional

ANEXO 12 U.

CONTROL INTERNACIONAL  
FRONTERAS

Stgo, AGOSTO 20 DE 1976.

MINUTA S/N

Revisados los Archivos de la Sección Control Internacional de Fronteras, registran anotaciones de viajes las siguientes personas: a contar de la fecha que se indica:

MARIO JAIME ZAMCRANO IONOSO, a contar del 19-05-76.

SALIDA : 13-05-1976 PUDAHUEL ARGENTINA  
ENTRADA : NO CONSTA

ONOFRE JORGE MUÑOZ BOUTAYS, a contar del 13-05-76

SALIDA : 13-05-1976 PUDAHUEL ARGENTINA

Cédula de Identidad Nº 2595417-7 Stgo, nacido el 16-12-1933, casado, empleado particular, chileno.

BERNARDO APAYA ZULATA y MARIA ILORES BARRAZA, no registran anotaciones de viajes, a contar de Marzo de 1976.

Se hace presente que del 1º de Abril al 31 de Julio de 1976. solo se revisó Pudahuel, no así el resto de las fronteras por encontrarse su información en procesamiento I.B.M.

Saluda a Ud.

MANUEL CORNEJO GYARZUN  
SUBCOMISARIO JEFE  
SECC. CONTROL INTERNACIONAL DE FRONTERAS

SECCION CONTROL INTERNACIONAL DE FRONTERAS

ANEXO 20. a

MINUTA SIN

Consultados los archivos de la Sección Control Internacional de Fronteras a contar de ABRIL de 1976, las personas consultadas: BERNARDO ARAYA ZULETA y LUIS OLGA FLORES BARRAZA registran salida del país el día 7 de Abril de 1976 por la Avanzada de Caracoles con destino a ARGENTINA en vehículo particular no identificado.-

No consta ingreso posterior.-

MANUEL CORNEJO OYARZUN  
SUBCOMISARIO JEFE



Anexo 20

Relación de hechos con respecto a ocho detenidos en Valparaíso

1. Se tuvo conocimiento en enero de 1975 de la existencia de un Grupo terrorista perteneciente al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que estaba llevando a efecto diversas actividades en Valparaíso.

2. Al proceder a allanar la casa que ocupaba como sede de operaciones dicho Grupo, se produjo un violento enfrentamiento armado, falleciendo el Segundo Jefe del Regional Valparaíso del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Alejandro VILLALOBOS Díaz, quien era conocido entre los terroristas como MICKEY.

3. A raíz de esta acción, se detuvo al Jefe del Regional Valparaíso del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Eric ZOTT Chuecas, su colaborador directo Neftalí CARAVANTES Olivera y la amiga de este último, Liliana CASTILLO Rojas, que se encontraba con ellos.

4. Posteriormente, se detuvo al resto de los integrantes de ese grupo terrorista, siendo ellos trasladados a Santiago. La lista de los detenidos es la siguiente:

- ZOTT Chuecas, Eric Reinaldo, en la cárcel de Valparaíso en sustanciación de la causa Rol N° A-637.
- JORQUERA Iturriaga, Reina, en Campamento de Tres Alamos, por Decreto N° 1585, de fecha 30 de septiembre de 1975.
- VESELY Fernández, Sergio Alejandro, Cárcel de Valparaíso, por sustanciación de la causa Rol N° A-637.
- COSTA del Pozo, Luis, abandonó el país por decreto N° 693 de fecha 28 de mayo de 1975, con destino a Ecuador.
- DIAZ Cáceres, Carlos, Cárcel de Valparaíso en sustanciación de la causa Rol N° A-637.
- VASQUEZ Malebran, Sergio, en Puchuncaví por decreto N° 1224, de fecha 18 de junio de 1975.
- ZURITA Campos, Jorge Jaime, en Campamento de Tres Alamos por Decreto N° 1911 de fecha 13 de febrero de 1976.
- MEDINA Bravo, Mónica, Carcel de Valparaíso en sustanciación de la causa Rol N° A-637.
- BRIEN Pizarro, Hernán Horacio, en Puchuncaví por decreto N°993 de fecha 18 de abril de 1975.
- DONOSO Astudillo, Jorge, Libre por decreto N° 2115, de 16 de junio de 1976.
- TORRES Villegas, Julio, Libre por decreto N° 1587, de fecha 30 de septiembre de 1975.

- MONTECINOS Jeffs, Miguel, en Puchuncaví, por decreto N° 993 de 18 de abril de 1975.

- PLAZA Tapia, Francisco, en Puchuncaví, por decreto N° 1224 de fecha 18 de junio de 1975.

- MARTINEZ Jiménez, Jorge, en Campamento Tres Alamos por decreto N° 2068 de fecha 18 de mayo de 1976.

- KRIMPEL Ternecier, Frida, expulsada del país por decreto N°502 de fecha 14 de abril de 1975.

5. Durante su detención dio a luz doña Liliana Castillo, siendo atendida de emergencia.

6. Tomadas las primeras declaraciones, fueron dejadas en libertad las siguientes personas por no tener relación directa con los hechos investigados:

María Isabel GUTIERREZ Martínez  
Elías Eduardo VILLA Quijón  
Abel Alfredo VILCHES Figueroa  
Carlos Ramón RIOSECO Espinoza  
Alfredo Gabriel GARCIA Vega  
Fabián IBARRA Córdova  
Sonia RIOS Pacheco.

7. Con fecha 25 de enero de 1975, Liliana CASTILLO fue dejada en libertad y conducida a casa de familiares en Valparaíso.

8. Con fecha 18 de enero de 1975 don Neftalí CARAVANTES fue trasladado a Santiago, lugar donde fue dejado en libertad. El traslado a Santiago se debió al hecho que CARAVANTES recibió, en reiteradas oportunidades, amenazas de muerte por parte de otros miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Anexo 21

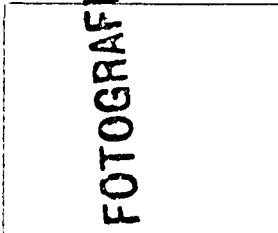
Extracto de Filiación y Antecedentes de Jorge Hernán MULLER Silva,  
Ruperto ARANEDA Torres, Sergio Miguel MAUREIRA Muñoz, Sergio Daniel  
TORMEN Méndez y Ramón CARREÑO Silva

VICIO DE  
EJECUT

EXTRACTO DE FILIACION Y ANTECEDENTES

NUMERO CIVIL 5.527.349 ..... NUMERO PENAL .....  
NOMBRE JORGE HERNAN MULLER SILVA .....  
NOMBRES SUPUESTOS .....  
APODOS .....  
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA



SIN FOTOGRAFIA

DATOS CIVILES  
HIJO DE Rodolfo ..... Y DE Irma .....  
NACIO EL 10-1-1947 ..... PAIS Chile .....  
PROVINCIA Santiago ..... PUEBLO Santiago .....  
ESTADO CIVIL Soltero ..... PROFESION Estudiante .....  
LFEY ..... ESCRIBE .....  
DOMICILIO Alvarez Real 1184 .....

OBSERVACIONES .....  
(Imp. Registro Civil y Identificación) (ANTECEDENTES A LA VULTA)

ANTECEDENTES PENALES  
NO REGISTRA  
SANTIAGO, 8-10-76-  
V. Latraco B.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Santiago, Chile, 8-10-76

## EXTRACTO DE FILIACION Y ANTECEDENTES

FOTOGRAFIA

**SIN FOTOGRAFIA**

DATOS CIVILES

OBSERVACIONES . . . . .

(Imp. Registro Civil e Identificacion)

(ANTECEDENTES A LA VUELTA

ANTECEDENTES PENALES

[illegible]

*Doningo Villalobos Cerda*

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL  
E IDENTIFICACION  
CHILE

EXTRACTO DE FILIACION Y ANTECEDENTES

NUMERO CIVIL 5.203.175.- ..... NUMERO PENAL .....  
NOMBRE SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ .....  
NOMBRES SUPUESTOS .....  
APELLIDOS .....

FOTOGRAFIA

SIN FOTOGRAFIA

DATOS CIVILES

HIJO DE Pedro ..... Y DE Lucía Victoria .....  
NACIO EL 27-4-1949 ..... PAIS Chile .....  
PROVINCIA Santiago ..... PUEBLO Santiago .....  
ESTADO CIVIL Soltero ..... PROFESION Estudiante .....  
LEE y ESCRIBE .....  
DOMICILIO Guillermo Mann # 2211.- .....

OBSERVACIONES.....

(Imp. Registro Civil e Identificación)

(ANTECEDENTES A LA VUELTA)

ANTECEDENTES PENALES.-

NO REGISTRA.-

Santiago, 8 de octubre 1976.-

SPH/

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Santiago, 8 de octubre 1976

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL  
E IDENTIFICACION  
CHILE

EXTRACTO DE FILIACION Y ANTECEDENTES

NUMERO CIVIL 5.213.511 ..... NUMERO PENAL -----  
NOMBRE SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ .....  
NOMBRES SUPUESTOS .....  
.....  
APELLIDOS .....

FOTOGRAFIA

SIN FOTOGRAFIA

DATOS CIVILES

HIJO DE Sergio ..... Y DE Purísima .....  
NACIO EL 30-10-1945 ..... PAIS Chile .....  
PROVINCIA Santiago ..... PUEBLO Buin .....  
ESTADO CIVIL soltero ..... PROFESION estudiante .....  
LEE Y ESCRIBE .....  
DOMICILIO Viña Nahuellan Isla de Maipo.- .....

OBSERVACIONES.....  
.....  
(Imp. Registro Civil e Identificación) (ANTECEDENTES A LA VUELTA)

ANTECEDENTES PENALES.-

No registra.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  
Santiago, 8 de Octubre de 1976  
sag./

REVEADO POR

*[Signature]*



*[Signature]*  
Dominga Villalobos



SERVICIO DE REGISTRO CIVIL  
E IDENTIFICACION  
CHILE

EXTRACTO DE FILIACION Y ANTECEDENTES

816.031.- 445.179.-  
NUMERO CIVIL ..... NUMERO PENAL .....  
NOMBRE .. RAYON CAROLIC SILVA  
NOMBRES SUPUESTOS .....  
AFIDOS .....

FOTOGRAFIA

SIN FOTOGRAFIA

DATOS CIVILES

HIJO DE .. Pedro .. Y DE .. Ana ..  
NACIO EL .. 8-12-1912 .. PAIS .. Chile ..  
PROVINCIA .. Santiago .. PUEBLO .. Santiago ..  
ESTADO CIVIL .. Soltero .. PROFESION .. Jornalero ..  
LEE .. y .. ESCRIBE ..  
DOMICILIO .. Roble # 707.- ..

OBSERVACIONES.....

(Imp. Registro Civil e Identificación)

(ANTECEDENTES A LA VUELTA)

ANTECEDENTES PENALES.-

5-6-1943.-ESTADA.-29000.Santiago.-  
Causa Nº 19-904.-Cond. a 41 ds. no  
indica fecha.-xvxxvxxvxxvxxvxxvxxv  
Santiago, 8 de Octubre 1970.-  
SMF/

REVISADO POR

*[Signature]*



*[Signature]*  
Domingo Villalobos Cerda

Anexo 22

Relación de hechos con respecto a la familia VARGAS

RELACION DE HECHOS CON RESPECTO A LA FAMILIA  
PEREZ VARGAS

---

1. En septiembre de 1973 se dio orden de detención en contra de Dagoberto PEREZ Vargas conocido como uno de los más altos dirigentes del grupo terrorista Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Debe hacerse presente que, a Octubre de 1975, Dagoberto PEREZ era miembro de la Comisión Política del MIR y Encargado, específicamente, del Aparato Militar a nivel nacional de ese Movimiento; del Aparato Nacional de Organizaciones y del Aparato Internacional, el cual manejaba los contactos de este Movimiento terrorista con el exterior (Argentina, Cuba, Europa).

Dentro del MIR fue conocido con los nombres políticos de: OMAR, DIEGO, AMERICO, y QUINTULLANCA. Estos dos últimos usados ya como miembro de la Comisión Política de ese movimiento terrorista.

2. En las investigaciones tendientes a ubicar y descubrir a los miembros de la Comisión Política del MIR y poder, a la vez, incautar el material explosivo y armamento, es detenido el enlace personal de la Comisión Política, el día 15 de octubre de 1975, a las 19 horas aproximadamente, en el centro de Santiago.

Este enlace personal portaba abundante documentación sobre acciones terroristas y armamento personal.

Al ser detenido manifestó que cumplía funciones de enlace, y que sus jefes se encontraban en la Parcela Santa Eugenia de Padre Hurtado, cuya propiedad estaba a nombre de su padre. No obstante agregó que, en realidad, tanto el dinero como todos los elementos existentes en esa parcela pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), lugar donde sesionaba la Comisión Política de ese Movimiento.

Además, este enlace personal manifestó que no estaba totalmente seguro de la cantidad exacta de miembros del MIR ubicados en la parcela, pero, estimaba que aparte de Nelson GUTIERREZ Yáñez, segundo hombre del MIR y su Jefe directo, "estimaba que habría dos o tres más".

3. Ante esta declaración, siete funcionarios de seguridad junto a tres carabineros de la Comisaría de Padre Hurtado, se dirigieron al lugar mencionado y, aproximadamente a las 20,30 horas, comenzaron a efectuar el reconocimiento de las dos casas y demás construcciones ubicadas en esa propiedad.

4. Al llegar a dicho lugar, se alcanzó a observar que un individuo corría desde la puerta principal hacia la casa central, y mientras se pretendía entrar a la propiedad, tanto por la entrada principal como por la lateral que daba directamente a la segunda casa, se abrió desde el interior de la parcela un fuerte tiroteo que destrozó parte de la carrocería y vidrios del furgón de Carabineros, hiriendo a dos de ellos que viajaban en la cabina del vehículo.

5. Frente a este hecho se procedió a rodear la propiedad, mientras se recibía un fuego continuado de armas automáticas desde el frente de la casa principal, como desde el costado nor-poniente y sur-oriente de la segunda casa que se encontraba en el interior y protegida por un silo.

6. Mientras se cumplía el cerco, estalló en llamas la segunda casa y, desde el frontis de la casa principal, se hacían más continuas las ráfagas de armas automáticas, aumentadas con lanzamientos de granadas, lo que obligó a detener parcialmente el cerco y concentrar la atención en el sector desde el cual se recibía este fuego, evidenciándose, a la vez, que se trataba de abrirse paso por esa vía para escapar.

7. Se procedió a neutralizar esa vía de escape resultando ser que esa posición era mantenida por un sujeto, al parecer Nelson GUTIERREZ Yáñez, y por Dagoberto PEREZ Vargas, el cual cayó muerto en el preciso instante en que trataba de lanzar una granada, cayendo éste y quedando la granada en su mano derecha, manteniendo aún dos más en los bolsillos de sus pantalones. El otro individuo logró huir hacia el interior.

8. Después de este hecho, el resto de la Comisión Política del MIR inició su huida hacia los cerros del Norte de la Parcela, coincidiendo con el momento de una violentísima explosión que hizo volar por los aires la segunda casa, producto de la munición y elementos explosivos que allí se guardaban, calculados, aproximadamente en cien cuantos kilos de TNT, sin considerar la munición.

9. Posteriormente, se pudo constatar que en esa propiedad se encontraban:

Andrés PASCAL Allende, Secretario General del MIR  
Mary Ann BEAUSIRE Alonso, ayudante personal del anterior  
Nelson GUTIERREZ Yáñez, Segundo hombre del MIR  
María Elena BACHMANN, Ayudante personal de GUTIERREZ  
Dagoberto PEREZ Vargas, miembro de la Comisión Política del  
MIR, Encargado del Aparato Militar, Organización  
Nacional y Aparato Internacional  
Martín HERNANDEZ, Primer hombre del Comité Central del MIR  
y encargado del Sector Estudiantil

También se constató posteriormente que el incendio de la casa y el ataque recibido formaban parte de la planificación de fuga que tenía la Comisión Política del MIR en caso de ser ubicada.

10. Además, se descubrió en esa propiedad el siguiente armamento material de construcción de armas:

6 fusiles AK  
3 pistolas  
numerosas granadas de mano, y  
un RPG 7, soviético.

11. Con motivo de la detección y ubicación de los encargados del Secretariado Regional Este del MIR, se incautó numerosa documentación entre la cual puede señalarse el funcionamiento de una estructura electrónica, comandada por un sujeto cuyo nombre político era "VICTOR", miembro del Comité Central de este movimiento terrorista.

12. Con posterioridad, en enero de 1976, se supo que un sujeto de nombre político "ESTEBAN" y una mujer de nombre político "ERIKA", ambos del Comité Central del MIR, llegaron a vivir a la casa donde moraba "VICTOR", Jefe de la estructura electrónica.

13. Investigaciones posteriores, enfocadas a los puntos de contacto realizados por una estructura del MIR, paralela a la electrónica, se determina que el tal "VICTOR" era Amador DEL FIERRO Santibáñez, antiguo militante del MIR y que ya en el año 1974 se había enfrentado con personal de seguridad, dejando abandonados a su mujer y un vehículo arrendado. Este último hecho permitió confirmar la identidad de "VICTOR", "GERMAN" o "PETE EL NEGRO".

14. El 23 de febrero de 1976, se logró descubrir el domicilio de Amador DEL FIERRO Santibáñez y se planificó una acción para detenerlo con el antecedente, además, de que en esa propiedad se encontraban dos sujetos más del MIR (un hombre y una mujer) no identificados, aparte de armamento y documentación sobre actos terroristas.

15. El 24 de febrero de 1976, a las 11,30 horas, seis funcionarios de seguridad procedieron a allanar la propiedad ubicada en Pasaje Juan Ramón Jiménez N° 7476 de la Comuna de La Florida.

16. Antes de llegar a esa residencia se ubicó a la mujer de Amador DEL FIERRO que venía llegando al lugar. Esta mujer manifestó que efectivamente los sujetos que se buscaban estaban en dicha casa, pero que desconocía absolutamente la identidad de las demás personas. Agregó que habían llegado hacía muy poco y eran de carácter reservado. Por último, dijo, que su marido tenía dos pistolas y una metralleta en su poder.

17. Confirmado lo anterior, se procedió a conminar a los moradores de la aludida casa a entregarse. En los momentos en que esto último se hacía, los moradores de la casa abrieron fuego.

18. Esta situación fue coincidente con la llegada a la casa de una niñita de 4 a seis años que iba a jugar.

19. Al ver esta situación, uno de los funcionarios de seguridad abandonó su refugio y se abalanzó sobre la niñita para quitarla de la línea de fuego, momento que fue aprovechado por DEL FIERRO para abrir la puerta y disparar contra el funcionario, quien falleció instantáneamente.

20. Después de dar muerte a dos personas, DEL FIERRO trató de escapar por la parte trasera de la casa, siendo alcanzado por el fuego de los funcionarios que la cercaban.

21. Momentos después, salía un sujeto disparando con una pistola, siendo alcanzado también por las balas.

22. Continuando con el fuego desde el interior de la casa, también fue muerta una mujer que, posteriormente, se identificó como hermana de Dagoberto PEREZ.

23. Todos los fallecidos fueron llevados al Instituto Médico Legal de Santiago.

Anexo 23

Decreto No. 2.077, de fecha 24 de mayo de 1975, que dispone la libertad de Doña María Antonieta CASTRO Ramírez

Decreto No. 1.584, de fecha 30 de septiembre de 1975, que dispone el traslado a Puchuncaví de Oscar CASTRO Ramírez, desaparecido, según el Informe, lugar donde se encuentra en la actualidad

ANEXO 22  
 de la libertad de personas  
 y de indicen.-

W. H. WILCOX,

**CIBIDO**

C E P C I O N

V I S T O S :

La facultad conferida por el Artículo 72 No. 1º inciso tercero de la Constitución Política del Estado; lo dispuesto por los Decretos Lerma No. 1, 3 y 228 de fecha 11 de Septiembre de 1973 los días 14 y 24 de Diciembre de 1973 el último y lo que me corresponde.

1) 6. 11. 2013 :

ARTÍCULO UNICO: Oñese sin efecto los D/E. que a continuación se indican, en lo que dice relación con los Detenidos que se mencionan y, así, se use su libertad:

-ABURTO AVILES BERNARDO SORITO D/E.	1693	de	07-XI	-1975
-ACEITUNO HERRERA HECTOR IVAN	"	1906	"	10-II -1976
-ACUÑA REYES JORGE	"	2017	"	30-IV- 1976
-AGUILAR TAMBLAY ROLANDO CARLOS	"	1906	"	10-II- 1976
-AGUIRRE SALINAS ENRIQUE LUIS R."	"	1584	"	30-IX- 1975
-ALCAYAGA ARACENA WALDO S.	"	2001	"	15-IV- 1976
-ALFARO ALFARO JUAN GALVARRINO	"	1906	"	10-II- 1976
-ALFARO ARACENA WALDO GERARDO	"	1906	"	10-II- 1976
-ALLENDE MARTIN JOSE LUIS	"	2040	"	07-V- 1976
-AMENGUAL MUÑOZ PATRICIA V.	"	1625	"	16-X- 1973
-ANTIÑIR PINDAL EDUARDO	"	1021	"	23-IV- 1975
-ANTIÑIR PINDAL JOSE PLACIDO	"	1021	"	23-IV- 1975
-ARANDA ASTORGA ANDRES AUGUSTO	"	2001	"	15-IV- 1976
-ARANDA RODRIGUEZ ADRIANA	"	1776	"	03-XII-1975
-ARAYA ESCOBAR JORGE WALTER	"	750	"	10-I- 1975
-ARAYA ESPINOZA JAIME ELISEO	"	1711	"	11-XI- 1975
-ARRIAGADA MALDINI RICARDO F.	"	2061	"	14-V- 1976
-ASPILLAGA ERICES JOSE LUIS	"	1508	"	05-IX- 1975
-AVENDAÑO BUSTOS LUIS ALBERTO	"	1545	"	17-IX- 1975
-AYRESS SOTO CARLOS ORLANDO	"	517	"	22-X- 1974
-AYRESS MORENO CARLOS ORLANDO	"	517	"	22-X- 1974
-BAEZ MONDACA NITZA ESTRELLA	"	1812	"	18-XII-1975
-BARLUPO ROCATAGLIATA GILDA T.	"	1565	"	30-IX- 1975
-BARRALES GONZALEZ JUAN RICARDO	"	851	"	25-II- 1975
-BATASZEW CONTRERAS BEATRIZ C.	"	1585	"	30-IX- 1975
-BERRIOS VERA MANUEL HUGO	"	1584	"	30-IX- 1975
-BISAMA TAPIA JOSE JORGE	"	1584	"	30-IX- 1975
-BRAVO RIFFO GILDA DE LAS M.	"	1625	"	16-X- 1975
-BRIÑO BUSTOS MANUEL	"	1623	"	14-X- 1975
-BRUNEL HIDALGO FERNANDO E.	"	1906	"	10-II- 1976
-LUGUEÑO ROBERTO	"	1727	"	17-XI- 1975
-BUSTAMANTE MORENO LUIS ALBERTO	"	1906	"	10-II- 1976
-CABELLO VARGAS TITO CARLOS	"	1951	"	15-III-1976
-CABRERA HERNANDEZ EDISON S.	"	1906	"	10-II- 1976
-CABREROS OPAZO ANGLI RODOLFO	"	1584	"	30-IX- 1975
-CACERES LARA JUAN ENRIQUE	"	1584	"	30-IX- 1975
-CAMPILLAY NEIRA SERGIO	"	1906	"	10-II- 1976
-CARDENAS ASTORGA OCTAVIO A.	"	1693	"	07-XI- 1975
-CARDENAS LARRONDO JUAN ALFONSO	"	1021	"	23-IV- 1975
-CARCAMO ALVAREZ HECTOR ADRIAN	"	1021	"	23-IV- 1975

11.



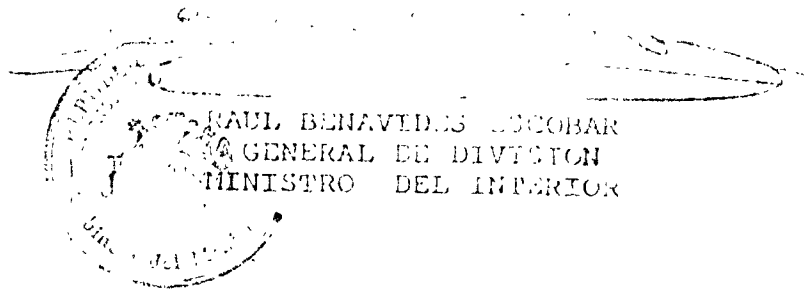
- CARRILLO HERRERA GASTON EGARDO D/E.	1806	de	10-II-	1976
- CASTILLO SALAS LUIS BENITO	"	1508	"	05-IX-
- CASTILLO SIBILLA GUIDO ENRIQUE	"	1571	"	02-XI-
- <u>CASTRO RAMIREZ MARIETA</u>	"	1535	"	30-IX-
- CEPEDA HERNANDEZ HUMBERTO H.	"	1727	"	17-XI-
- CERDA LOPEZ CARLOS ALEJANDRO	"	1623	"	14-X-
- CHAU MACHUCA BENJAMIN ANTONIO	"	1021	"	23-IV-
- CIUDAD SALAZAR MALAQUIAS E.	"	2029	"	05-V-
- COMPAGNET GODOY ALEX MANUEL	"	1117	"	19-V-
- CONCHA GALVEZ SEGUNDO FERNANDO	"	1776	"	03-XII-
- CORDOVA MARQUEZ JORGE ALFONSO	"	866	"	04-III-
- CORTES GUERRA FERNANDO ALBERTO	"	1634	"	20-X-
- CORTES ROJAS JUVENAL ENRIQUE	"	851	"	25-II-
- CRUZ CORVALAN MARCO ANTONIO	"	851	"	25-II-
- DE GUZMAN DUEÑAS JAIME VOLTAIRE	"	1744	"	20-XI-
- DIAZ LEAL JULIA VALENTINA	"	1585	"	30-IX-
- DONOSO ASTUDILLO JORGE BERNARDO	"	993	"	16-IV-
- DONOSO GARAY RAFAEL FRANCISCO	"	1584	"	30-IX-
- DUARTE VALLES ELBA	"	1585	"	30-IX-
- DURAN ELICER PATRICIO ROBERTO	"	1776	"	03-XII-
- ELGUETA PLANA LUIS ARMANDO	"	1966	"	24-III-
- ESCOBAR ROCCO JULIA MIRIAM	"	1585	"	30-IX-
- ESPERGUE CORDOVA HIGINIO A.	"	1117	"	19-V-
- ESPINOZA GONZALEZ ROQUELIN A.	"	1822	"	23-XII-
- FERNANDEZ SANCHEZ FROILAN A.	"	1906	"	10-II-
- FLORES CASSAS ARMANDO NICOLAS	"	1986	"	03-IV-
- FLORES FLORES ARMIN	"	1021	"	23-IV-
- FLORES PAILLIPAN ARNOLDO	"	1021	"	23-IV-
- FOLATRE VILLAR ALEJANDRA S.	"	1585	"	30-IX-
- FONSECA PAVEZ MANUEL	"	1761	"	28-XI-
- FUENTES ARENDS JULIO ABEL	"	1634	"	20-X-
- FUENZALIDA AMARO JIMMY LUIS	"	1693	"	07-XI-
- FUENTES DIAZ LUIS ALEJANDRO	"	1117	"	19-V-
- GAETE MATTEY MIRIAM DEL C.	"	1535	"	30-IX-
- GAJARDO MOYA JOSE ADAN	"	1906	"	10-II-
- GALAZ ROMERO MAURICIO EDUARDO	"	1625	"	16-X-
- GALAZ SEGURA MANUEL ANTONIO	"	1508	"	05-IX-
- GALVEZ MONDACA CELSO	"	1693	"	07-XI-
- GALLARDO GOMEZ CARLOS GUSTAVO	"	1358	"	28-VII-
- GALLEGOS DIAZ CARLOS NELSON	"	1117	"	19-V-
- GARAY FLORES ARNOLDO MIGUEL	"	1906	"	10-II-
- GARCES LUENGO EDUARDO	"	993	"	16-IV-
- GARCIA CANALES LUIS GERARDO	"	1711	"	11-XI-
- GARCIA-HUIDOBRO SEVERIN GERARDO	"	993	"	16-IV-
- GENOVESE FOUSSE CARLOS LUIS	"	1117	"	19-V-
- GODOY DIAZ MARIO SEGUNDO	"	1812	"	18-XII-
- GODOY NEGRON PABLO	"	1021	"	23-IV-
- GOMEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	"	2061	"	15-IV-
- GOMEZ SANTA MARIA HERMANN	"	1906	"	10-II-
- GONZALEZ CASTILLO SERGIO A.	"	2021	"	30-IV-
- GONZALEZ SAAVEDRA MARIA E.	"	1711	"	11-XI-
- GONZALEZ SEPULVEDA JOSE IVAN	"	1570	"	25-IX-
- GUERRA AHUMADA MANUEL RICARDO	"	1761	"	28-XI-
- GUZMAN PEREZ ERNESTO ROBINSON	"	1761	"	28-XI-
- HELGUERO FALCON MAGDALENA DEL C.	"	1661	"	29-X-
- HENRIQUEZ CAMUS JOSE HERNAN	"	1906	"	10-II-
- HERDING KOTT ENRIQUE	"	1906	"	10-II-
- HERNANDEZ DE SANTIS MARIA T.	"	1761	"	28-XI-
- HERNANDEZ VICENTELLO JAIME E.	"	1995	"	12-IV-
- HIDALGO FUENTES SELVA IVONNE	"	1634	"	20-X-
- ILABACA ANDUREAU RUPERTO EMILIO	"	1693	"	07-XI-
- IBARRA DONOSO GUILLERMINA ESTER	"	1836	"	30-XII-

*ANEXO 22*

- JIMENEZ SANHUEZA LEONA EL	D/E.	1711	GC	11-XI-	1975
- LAMBERT PEREZ EXCEQUIEL P.	"	1951	"	15-III-	1976
- LARA ASTORGA ALICIA VIOLETA	"	1625	"	16-X-	1975
- LARA CORTES ADOLFO TOMAS	"	1906	"	10-II-	1976
- LARRAGUIBEL PEÑA ROBERTO	"	1661	"	29-X-	1975
- LARTIGA CALDERON GREGORIO	"	1164	"	02-VI-	1975

Anótese y comuníquese.

FOR ORDEN DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

  
PAUL BENAVIDES ESCOBAR  
GENERAL EN DIVISION  
MINISTRO DEL INTERIOR

Lo que se transcribe para conocimiento de US.

Saluda a US.

ENRIQUE MONTERO MARX  
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE COMERCIO  
INTERIO DEL FUNDADOR  
ANEXO CONTABILISTAL

ANEXO 22. G.

Dispone traslado de detenidos que indica.-

DECRETO EXENTO Nº 1584

SANTIAGO, 30 SET. 1975

S.E. el señor Presidente de la República,  
decretó hoy lo que sigue:

VISTOS: La facultad conferida por el artículo 72 Nº 17 inciso tercero de la Constitución Política del Estado; lo dispuesto por los Decretos Leyes Nºs. 1,3 y 228 de fecha 11 de Septiembre de 1973 los dos primeros y 24 de Diciembre de 1973 el último y lo propuesto por Sende en Oficio (R) Nº 3550/5644 de 30 de Septiembre de 1975,

DECRETO:

ARTICULO 1º.- Trasládese dentro del Departamento de Quillota, desde el Campo Militar de RITOQUE al Campamento de PUCHINCAVI, manteniendo su calidad de arrestados a los siguientes detenidos:

- AGUIRRE SALINAS ENRIQUE ✓
- ALARCÓN RAMÍREZ JORGE DOMINGO ✓
- ASCILERA CORTÉS RUBÉN ✓
- AREAS ROSAS VITAL RENATO ✓
- ASTUDILLO MENDEL MANUEL ✓
- ASTORGA GALAZ SILVERIO ANTONIO ✓
- FERRIOS VERA MANUEL HUGO ✓
- BILANA TAPIA JOSÉ JORGE ✓
- BRAVO SORTANO REGULO DEL C. ✓
- BURGOS IBÁÑEZ PEDRO ✓
- CÁDIZ OPAZO ÁNGEL RODOLFO ✓
- CÁCERES LARA JUAN ENRIQUE ✓
- CARRILLO CARDENAS PEDRO RENÉ ✓
- CASTILLO GUERRERO ERNESTO ✓
- CASTILLO JARA ROBERTO NICOLÁS ✓
- CASTRO RAMÍREZ OSCAR ✓
- DIAZ ARIAS JOSÉ ROBERTO ✓
- DOMOSO GARAY RAFAEL ✓
- ESPINOZA LOYOLA VÍCTOR ✓
- ESPINOZA PEREZ JORGE ADOLFO ✓
- ESPINOZA PEREZ RENÉ ✓
- FERNÁNDEZ ACUNA VLADIMIR ✓
- FERNÁNDEZ ACUNA WASHINGTON ✓
- FERNÁNDEZ ARANCIBIA OSVALDO ✓
- FRODDEN ARMSTRONG RICARDO ✓
- FLORES CASTILLO RAUL ✓
- GALLARDO LAPATA CARLOS ALBERTO ✓
- GAVILAN CASTILLO ALBERTO ANDRÉS ✓
- GIACAMAN DIAZ JORGE ✓
- GONZÁLEZ CASTILLO RAMÓN F. ✓

...

RIO DE HACIENDA	
INA DE PARTES	
CIBIDO	
RATORIA GENERAL	
OMA DE RAZON	
ECEPCION	
F. O.	
R. PRO.	
IT. MIL.	
PTO. RAL.	
P. PAS.	
P. Y. NAC.	
IT. CIA.	
T. Y. T.	
CP. CP.	
FRENDACION	
OR Eº	
C.	
FOR Eº	
AC.	
DTO.	

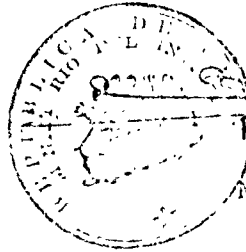
- GUTIERREZ ORTIZ LUIS IVAN ✓
- HERRANDEZ MANDIOLA DELETRIO ✓
- HERRERA NAVARRETE DANIEL ✓
- HERRERA CASTRO MANUEL ✓
- HIDALGO TRONCOSO VICTOR MANUEL ✓
- HONNABAL SANCHEZ SERGIO ANTONIO ✓
- JELIC AYO RAFAEL JOSE ✓
- LAJAS SALINAS JORGE ✓
- LARIGAS CALDERON PATRICIO GREGORIO ✓
- LOAYZA RIQUELME MARCOS ANTONIO ✓
- MADARIAGA JERIA LUIS E. ✓
- MARCHANT VERDUGO LUIS ✓
- MATTA LEMOINE PEDRO ALEJANDRO ✓
- MATUS VIRGINE MAULIO ERNESTO ✓
- MEDINA ARRIAGA MARIO ✓
- MENA BUSTOS CESAR AUGUSTO ✓
- MENA PASTIÑO REINALDO ✓
- MOENA AGUILERA ERNESTO DEL C. ✓
- MOENA AGUILERA LUIS SEGUNDO ✓
- MORENO GODOY GUILLERMO ELISMO ✓
- MUÑOZ VILLALOBOS CARLOS O. ✓
- NAVARRO CASTRO MARIO ✓
- OPAZO VILLALOBOS EDUARDO ENRIQUE ✓
- PARDO VALLADARES ARMANDO ✓
- PITHALOZA ALVEAR ALBERTO ✓
- PEREZ PENA DANTON ✓
- RETAMAL SEPULVEDA MIGUEL ✓
- RIVEROS CALDERON JOSE MARCISO ✓
- RODRIGUEZ ESPINOZA LUIS ALEJANDRO ✓
- ROJAS LARA PATRICIO IVAN ✓
- ROJAS MARTINEZ JUAN A. ✓
- ROMO AGUILERA SERGIO ✓
- RUBILAR MEDINA EDUARDO AUGUSTO ✓
- RUIZ ARANZABE CARLOS ✓
- SAavedra CANTILLANA WALTER ✓
- SAIGEDO ROJAS ANTONIO ✓
- SANCHEZ CORTES MANUEL ANTONIO ✓
- SEPULVEDA VARGAS FORTUNATO E. ✓
- SEPULVEDA VARGAS JULIO E. ✓
- SOLAR MIRANDA CARLOS I. ✓
- TABILO VEGA JUAN ✓
- TABILO VEGA JOSE JORGE ✓
- TELLER DEL VALLE GUILLERMO ✓
- TORO FERNANDEZ BONIFAZ E. ✓
- TORO MELO MIGUEL ENRIQUE ✓
- URTIBE AGUILERA REINALDO E. ✓
- VALDES VALDES JOSE ANTONIO ✓
- VAN YURICK ALTAMIRANO CRISTIAN ✓
- VARGAS ALVARADO PEDRO ✓
- VALDELLA GARCIA EDUARDO SEGUNDO ✓
- VARGAS OYARCE JORGE ✓
- VEGA ANDRADES JOSE DIONISIO ✓
- VARGAS MUÑOZ HUMBERTO ✓
- VIVEROS LAGOS NELSON RICARDO ✓
- YOVANOLO RUIZ ROLANDO ✓
- ZAPATA FLORES JORGE ✓
- ZAROR ZAROR CLAUDIO ALFREDO ✓
- ZURIGA SERRANO GUIDO SEGUNDO ✓
- ZURIGA ARELLANO VICTOR MANUEL ✓

ARTICULO 29.- Las mencionadas personas quedaran sujetas a la vigilancia y control de la Guarnición Militar de Quillota; o de la autoridad de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en que éstos deleguen dichas facultades.

ANEXO RR. Q.

Anótase y comuníquese

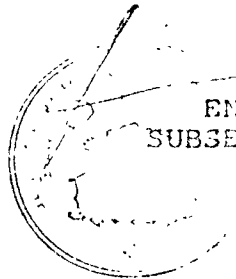
POR ORDEN del SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



RAUL BENAVIDES ESCOBAR  
GENERAL DE DIVISION  
MINISTRO DEL INTERIOR

Lo que transcribo para su conocimiento.

Saluda a US.



ENRIQUE MONTERO MARX  
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEF. NACIONAL	
SEC. EJEC. HAC. DE PET.	
No.	3550564411
Entrada:	6 OCT. 1975
Salida:	06 OCT. 1975
Trámite:	1975

*Hecho*

Anexo 24

Decreto No. 1.911, de fecha 13 de febrero de 1976, que dispone el arresto de don Jaime Manuel ZURITA Campos

Declaración manuscrita del señor Jaime Manuel ZURITA Campos expresando estar detenido en el campamento "Tres Alamos"

Lo anterior desmiente el supuesto desaparecimiento del señor ZURITA

DE CHILE

LA REPUBLICA  
EL INTERIOR  
CONFIDENCIAL

Dispone arresto de personas que se indican.

SANTIAGO, 13 Febrero 1975.-

DECRETO EXENTO Nº 11.711

S.E. el Sr. Presidente de la República, decretó hoy lo que sigue :

V I S T O S :

La facultad conferida por el Artículo 72, Nº 17, inciso tercero de la Constitución Política del Estado; lo dispuesto por los Decretos Leyes Nºs 1, 3 y 228 de fecha 11 de Septiembre de 1973 los dos primeros y 24 de Diciembre de 1973 el último y lo propuesto por DINA.

D E C R E T O :

ARTICULO 1º.- Arréstese y manténgase en tal calidad en el Departamento Presidente Aguirre Cerda, Campamento TRES ALAMOS, SENDET, a la siguiente persona :

✓ ZURITA CAMPOS JAIME MANUEL

ARTICULO 2º.- La mencionada persona quedará sujeta a la vigilancia y control de la Guarnición Militar de Santiago; o de la Autoridad de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en que éstos deleguen dichas facultades.

Anótese y comuníquese.

POR ORDEN DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ENRIQUE MONTERO MARX  
MINISTRO DEL INTERIOR SUBROGANTE

Lo que se transcribe para conocimiento de US.,  
Saluda a US.,

JAIME GARCIA CASTAÑEDA  
JEFE DEPARTAMENTO CONFIDENCIAL SUBROGANTE

HACIENDA  
PARTES

DO

VERAL DE  
ONIZACION  
NACIONALES

GENERAL  
AZON

ION

ACION

En SANTIAGO, en el Campamento de Detenidos de TRES ALAMOS, siendo 30-SEPTIEMBRE DE 1976, yo JAIME MANUEL ZURITA CAMPOS, declaro lo siguiente:

1. QUE nunca estuve detenido en domicilio, y QUE SOLAMENTE he permanecido detenido en el Campamento de TRES ALAMOS.
  2. - Durante mi estadía en el mencionado Campamento he sido atendido correctamente sin median presión psíquica y física. Además, cuando me he encontrado enfermo, he tenido toda la atención médica disponible y humanitaria de lo cual estoy muy agradecido. Por ejemplo, estoy siendo tratado de mis enfermedades, en los Hospitales de Carabineros y el Barros Luco de SANTIAGO.
  3. - Durante mi estadía en el Campamento, he desarrollado todo tipo de clases: como por ejemplo. Alemán, Inglés, Planificación Económica, Evolución de Juveniles, etc.
- También puedo asegurar que cuando el Campamento ha sido visitado por personas extranjeras, "TAMAS" he avanzado nada al respecto. — Por razones fundamentales, he de no tener ningún interés personal. — ni Reclamos que formular.

JM- Zurita

Nº de CARRET: 32.54015-J de Stgo  
30.9.76.



Anexo 25

Decreto No. 2.244, de fecha 11 de septiembre de 1976, por el cual se dispone la libertad de 190 detenidos, entre ellos los supuestos desaparecidos señora Haydée OBERREUTER Umazábal y Eloy Segundo RAMIREZ Valenzuela

Declaración manuscrita de la señora OBERREUTER expresando encontrarse en libertad y residiendo en Valparaíso

REPUBLICA DE CHILE  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
SECRETARÍA DE ESTADO  
CONFIDENCIAL

UNCLAS 16.0  
Dispone libertad de personas  
que se indican.-

DECRETO EXENTO Nº. 2274

SANTIAGO, 11 SET 1973

SECRETARÍA DE ESTADO  
SECRETARÍA DE PARTES

S. E. El Sr. Presidente de la República, decretó hoy lo que sigue:

VISTOS :

La facultad conferida por el Artículo 72 Nº. 17, inciso tercero de la Constitución Política del Estado; lo dispuesto por los Decretos Leyes Nºs. 1, 3 y 228 de fecha 11 de Septiembre de 1973 los dos primeros y 24 de Diciembre de 1973 el último y lo propuesto por DINA.

DECRETO :

ARTICULO UNICO.- Déjese sin efecto los D/E. que a continuación se indican, en lo que dice relación con los detenidos que se mencionan, actualmente reclusos en los Campamentos que se detallan y, dispóngase su libertad:

CAMPAMENTO TRES ALAMOS SENDET

1.- ACOSTA MARIN CARLOS ALFREDO	D/E.2076 de 24-V	-1976
2.- AHUMADA BRAZO OSCAR CLAUDIO	" 2168 "	26-VII -1976
3.- AHUMADA NUÑEZ VICTOR IVAN	" 2076 "	24-V -1976
4.- ALBARRACIN PIZARRO BRAULIO A.	" 2105 "	04-VI -1976
5.- ALTAMIRANO FUENTES VIVIANA A.	" 1869 "	20-I- -1976
6.- ALVARADO VISTOSO ALICIA DEL C.	" 1585 "	30-IX -1975
7.- ANACONA PALADINO SERGIO ROBERTO	" 1761 "	28-XI -1975
8.- ANDRADE HERNANDEZ PEDRO FERMIN	" 2230 "	28-VIII-1976
9.- ANGULO CLARCK LUIS CESAR	" 2128 "	24-VI -1976
10.- ARAYA BORI RAUL FERNANDO	" 1904 "	10-II -1976
11.- ARAYA BOLTON GLORIA ANGELICA	" 1535 "	30-IX -1975
12.- ARAYA MIRANDA NELSON HUGO	" 2186 "	06-VIII-1976
13.- ASTUDILLO MENDEZ MANUEL HERNAN	" 2152 "	15-VII -1976
14.- ATENCIO CORTES PEDRO SEGUNDO	" 2230 "	28-VIII-1976
15.- BARRAZA MONARES LUIS GUILLERMO	" 2230 "	28-VIII-1976
16.- BARRAZA RAMIREZ ELIAS FRANCISCO	" 2076 "	24-V -1976
17.- BARRERA SANCHEZ CARLOS PATRICIO	" 1711 "	11-XI -1975
18.- BARRERA SOTO GRACIELA DEL C.	" 2076 "	24-V -1976
19.- BARRIENTOS ORTUBIA JESUS DALTON	" 1851 "	12-I -1976
20.- BASCUÑAN BELZA HERNAN BERNABE	" 2131 "	29-VI -1976
21.- BERNAL MATUS FRANCISCO AGUSTIN	" 2076 "	24-V -1976
22.- BLANCO TOLEDO CLAUDIO EUSENIO	" 2006 "	22-IV -1976
23.- BOTTAY MONREAL MARIA CECILIA	" 1644 "	23-X -1975
24.- BRAVO DIAZ BENITO ENRIQUE	" 2076 "	24-V -1976
25.- BRAVO SALGADO MANUEL SEGUNDO	" 2076 "	24-V -1976
26.- BUSTOS DIAZ LUIS ANDRES	" 1727 "	17-XI -1975
27.- BUSTOS ORTELLANA MANUEL NIBALDO	" 2076 "	24-V -1976
28.- CAMPILAY CAMPILAY GUIDO A.	" 2230 "	28-VIII-1976
29.- CANALES PEREZ BERNARDINO	" 2230 "	28-VIII-1976
30.- CARDENAS NUÑEZ JUAN CARLOS	" 2230 "	28-VIII-1976
31.- CARVAJAL LOYOLA JOSE DEL C.	" 2181 "	02-VIII-1976
32.- CARRASCO MOYA SERGIO	" 2230 "	28-VIII-1976

33.-	CASTILLO GOMEZ SOLEDAD DE LAS H.	D/E.	2076	de	24-V	-1976
34.-	CERECEDA MARTINEZ OSCAR HERNAN	"	2169	"	27-VII	-1976
35.-	CLEARY ACEITUNO SYBIL MARJORIE	"	1585	"	30-IX	-1975
36.-	COLLAO ARAOS REGINALDO ERNESTO	"	2076	"	24-V	-1976
37.-	COMPAGNET GODOY HIRTA MARIA S.	"	1585	"	30-IX	-1975
38.-	CONCHA VALLEJOS RICARDO F.	"	2230	"	28-VIII-1976	
39.-	CONEJEROS RIVERA JORGE RAMON	"	2230	"	28-VIII-1976	
40.-	CORDERO DONOSO EUGENIO RAFAEL	"	2169	"	27-VII	-1976
41.-	CORTES FLORES JUAN LORENZO	"	2076	"	24-V	-1976
42.-	CORREA CORREA JUAN	"	2076	"	24-V	-1976
43.-	CRUZ ARRIADA OSCAR LENIN	"	1475	"	12-IX	-1975
44.-	CHACALTANA PIZARRO MARIA CRISTINA	"	1585	"	30-IX	-1975
45.-	DELGADO DELGADO EXEQUIEL DEL T.	"	2199	"	10-VIII-1976	
46.-	DE LA FUENTE MUÑOZ OSCAR DEL T.	"	2006	"	22-IV	-1976
47.-	DE RAMON AVILES ROBERTO AUGUSTO	"	2191	"	06-VIII-1976	
48.-	DIAZ ARANDA EDMUNDO AUGUSTO	"	2169	"	27-VII	-1976
49.-	DINAMARCA FIGUEROA MANUEL SERGIO	"	1812	"	18-XII	-1975
50.-	EATON SUAREZ VICTOR GUILLERMO	"	2076	"	24-V	-1976
51.-	ESCUADERO TORRES JORGE ALBERTO	"	2169	"	27-VII	-1976
52.-	FUENTES ARENDS CARMEN GRACIELA	"	1634	"	20-X	-1975
53.-	FUENZALIDA RUIZ LUIS EDUARDO	"	2076	"	24-V	-1976
54.-	GAHONA JULIO PEDRO PABLO	"	2076	"	24-V	-1976
55.-	GARCES BATZ HECTOR CARLOS	"	2076	"	24-V	-1976
56.-	GARCES DURAN HILDA AMALIA	"	1585	"	30-IX	-1975
57.-	GARCIA GARCIA GABRIEL DEL C.	"	1584	"	22-III	-1976
58.-	GARIN ROJO NESTOR HUGO	"	2169	"	27-VII	-1976
59.-	GAVILAN MENCILLA ELVIRA OLIMPIA	"	1505	"	30-IX	-1975
60.-	GIL TAVANTEIS PATRICIA DEL C.	"	1936	"	08-IV	-1976
61.-	GIL DUBREIL SERAFIN ORLANDO	"	1986	"	08-IV	-1976
62.-	GOMEZ DONOSO ROBERTO ESTEBAN	"	2134	"	12-VII	-1976
63.-	GOMEZ ITURRA JUAN ROBERTO	"	1528	"	12-IX	-1975
64.-	GOMEZ LARA EDUARDO ROLANDO	"	2076	"	24-V	-1976
65.-	GOMEZ MARTINEZ OSVALDO RICARDO	"	2093	"	12-VI	-1976
66.-	GONZALEZ ARIAGADA ALEJANDRO	"	2040	"	07-V	-1976
67.-	GONZALEZ ESPINOZA ALEJANDRO RUBEN	"	2199	"	10-VIII-1976	
68.-	GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO DE J.	"	1652	"	27-X	-1975
69.-	GONZALEZ SALINAS JOSE BERNARDO	"	1274	"	03-VII	-1975
70.-	GONZALEZ VILLANUEVA CARLOS SERGIO	"	2076	"	24-V	-1976
71.-	GODOY GONZALEZ LUIS JOSE	"	2230	"	28-VIII-1976	
72.-	GODICH CASTILLO VICENTE FERNANDO	"	2076	"	24-V	-1976
73.-	HERNANDEZ HILDA OLGA BERTHA	"	1751	"	28-XI	-1975
74.-	HORNABAL SALO SERGIO ANTONIO	"	2076	"	24-V	-1976
75.-	JANETT MUÑOZ TERESA BERTHA	"	1604	"	20-X	-1975
76.-	JANIA ROJAS JORGE EDUARDO	"	2040	"	07-V	-1976
77.-	JORQUERA ITURRIETA KEITH M.	"	1585	"	30-IX	-1975
78.-	JORQUERA MUÑOZ MARIO ALEJANDRO	"	2183	"	03-VIII-1976	
79.-	KURT FONSECA LUIS ALFREDO	"	2114	"	16-VI	-1976
80.-	LAGOS VIVANCO MARG RITA	"	2220	"	23-VIII-1976	
81.-	LAVANDEROS DE LA PAZ MARIA D.	"	2230	"	28-VIII-1976	
82.-	LEAL LEAL NESTOR EMILIO	"	2169	"	28-VII	-1976
83.-	LEDESMA MATURANA GLADYS ANGELICA	"	1634	"	20-X	-1975
84.-	LEIGHTON FERNANDEZ BERTA	"	1625	"	16-X	-1975
85.-	LIBERONA MARDONES ENRIQUE	"	2076	"	24-V	-1976
86.-	LILLO NOVOA LAZARO	"	2076	"	24-V	-1976
87.-	LOBOS MARIN PATRICIO MIGUEL	"	2196	"	06-VIII-1976	
88.-	LOPEZ SEGURA SEVERINO	"	2076	"	24-V	-1976
89.-	LOZANO MOLINA IRMA MARINO	"	2186	"	06-VIII-1976	
90.-	MAIRA ORREGO JORGE PATRICIO	"	2018	"	30-IV	-1976
91.-	MACAYA MOLINA HENRI	"	2169	"	27-VII	-1976
92.-	MALDONADO FARIAS ALEJANDRO R.	"	2076	"	24-V	-1976
93.-	MANCILLA CASTILLO OSCAR PEDUNDO	"	2169	"	27-VII	-1976
94.-	MARQUEZ MUÑOZ JORGE SERGIO	"	2076	"	24-V	-1976
95.-	MARTINEZ JIMENEZ CARLOS FERNANDO	"	2063	"	13-V	-1975
96.-	MATHELA VIVALDI MARIA ISABEL	"	1585	"	30-IX	-1975
97.-	MATELLA MUÑOZ SYBILA WILSON	"	1751	"	10-XII	-1975
98.-	MEYER LOPEZ RUTH MATHIL	"	1906	"	08-IV	-1976
99.-	MIRANDA MUÑOZ VICTOR HUGO	"	2017	"	03-V	-1976
100.-	MOLINET CONTRERAS ALONSO DON TO	"	1585	"	08-IV	-1976

101.-	MONZON VERA TITO SEGUNDO	D/E. 1904 de 10-II	-1976
102.-	MORYUOVSKI COROTIN BENJAMIN E.	" 1475 " 19-IX	-1975
103.-	MUÑOZ GUERRA JOSE SANTOS	" 2076 " 24-V	-1976
104.-	MUÑOZ LEIVA MARCELO OMAR	" 1623 " 14-X	-1975
105.-	MUÑOZ SOLIS JUAN LISANDRO	" 1671 " 02-XI	-1975
106.-	NAVARRO VILLANUEVA RUBEN E.	" 1869 " 20-I	-1976
107.-	NUÑEZ PALMA EMERITO JAVIER	" 1869 " 20-I	-1976
108.-	NUÑEZ ZAMORA JOSE LUIS	" 1836 " 30-XII	-1975
109.-	<u>OBERREUTER UNZABAL HAYDEE</u>	" 1904 " 10-II	-1976
110.-	OLGUIN CASTRO ALFREDO MARIO	" 2006 " 22-IV	-1976
111.-	ORELLANA FIGUEROA OSCAR P.	" 1995 " 12-IV	-1976
112.-	ORELLANA MORENO CEFERINO R.	" 1623 " 14-X	-1975
113.-	ORRERO FERNANDEZ HERNAN S.	" 2183 " 03-VIII	-1976
114.-	ORTIZ ASTUDILLO CECILIA M.	" 1822 " 23-XII	-1975
115.-	OSORIO NUÑEZ VICTOR MANUEL	" 1623 " 14-X	-1975
116.-	OYARZO ESPINOZA JAIME	" 2128 " 24-VI	-1976
117.-	PARRA SANHUEZA PEDRO DANIEL	" 2076 " 24-V	-1976
118.-	PAMPILIONI ACEVEDO RODOLFO M.	" 1623 " 14-X	-1975
119.-	PALMA CONTRERAS PATRICIA K.	" 1585 " 30-IX	-1975
120.-	PALMA MUÑOZ JOSE RUPERTO	" 2076 " 24-V	-1976
121.-	PARRA GUERRA ALEJANDRO A.	" 1644 " 23-X	-1975
122.-	PENDOLA LARALCEA MIGUEL A.	" 1952 " 15-III	-1976
123.-	PEREZ SANCOS ROSA DEL CARLOS	" 1585 " 30-IX	-1975
124.-	PEREZ CARRASCO LUIS MANUEL	" 2076 " 24-V	-1976
125.-	PEREZ PERA DANTON AMARO	" 2108 " 26-VII	-1976
126.-	PEREZ VALDES LILIA MARILDE	" 1776 " 03-XII	-1975
127.-	PIEROLA SEPULVEDA LUIS ERNESTO	" 1851 " 12-I	-1976
128.-	PINOCHET LAGOS EDUARDO ANTONIO	" 2205 " 11-VIII	-1976
129.-	PINTO CONTRERAS NELLY BERNARDA	" 1585 " 30-IX	-1975
130.-	PINTO YARIEZ HUGO ORLANDO	" 1836 " 30-XII	-1975
131.-	POBLETE FUJOL MARTIN ORLANDO	" 1414 " 14-VIII	-1975
132.-	POVEDA PACEI HERALDO SEGUNDO	" 1528 " 12-IX	-1975
133.-	PUEBLA MATURANA CARLOS SEGUNDO	" 1224 " 18-VI	-1975
134.-	PUEBLA MATURANA FREDDY ADELMAR	" 1298 " 10-VII	-1975
135.-	QUEVEDA ARQUELOS LAUTARO N.	" 2076 " 24-V	-1976
136.-	QUEVEDA EVANS ALVARO FELIPE	" 2175 " 31-VII	-1976
137.-	QUINTEANILLA GUERRA JORGE C.	" 1761 " 28-XI	-1975
138.-	QUINTEROS ALVAREZ LUIS HERIBERTO	" 2057 " 13-V	-1976
139.-	RAMIREZ VALDEHUELA ELOY SEGUNDO	" 2076 " 24-V	-1976
140.-	RAMOS ROJAS LUIS HERNAN	" 2168 " 26-VII	-1976
141.-	RIVERA CALZ MOISES	" 1625 " 16-X	-1975
142.-	RODRIGUEZ CORDERO CARLOS BLANCA	" 1812 " 18-XII	-1975
143.-	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO J.	" 2006 " 22-IV	-1976
144.-	ROJAS TRAYA JULIO EMILIO	" 2076 " 24-V	-1976
145.-	ROJAS MARTIN DARIO HERNAN	" 1776 " 03-XII	-1975
146.-	ROJAS ROJAS LUIS ALBERTO	" 2230 " 28-VIII	-1976
147.-	ROMAN DASSON MARGARITA JULIETA	" 1932 " 02-III	-1976
148.-	ROMERO MENDEZ MARIA ISABEL	" 1592 " 30-IX	-1975
149.-	ROJAS PIZARRO HECTOR HERNAN	" 1851 " 12-I	-1976
150.-	RUIZ VERA JAVIER	" 1625 " 16-X	-1975
151.-	SANVEDRA QUIROZ ROBERTO	" 2169 " 27-VII	-1976
152.-	SALAS VASQUEZ LUIS ARMANDO	" 1822 " 23-XII	-1975
153.-	SALAZAR VARGAS GABRIEL SEGUNDO	" 1776 " 03-XII	-1975
154.-	SALGADO BARRIGA JOSE RINALDO	" 1661 " 29-X	-1975
155.-	SALINAS PARRAN MARIA ALICIA	" 1585 " 30-IX	-1975
156.-	SANCHEZ LEIVA MANUEL JESUS	" 2068 " 18-V	-1976
157.-	SANTOS FERNANDEZ ALEJANDRO	" 2169 " 27-VII	-1976
158.-	SAPUNER MUÑOZ SERGIO FELIX	" 1851 " 12-I	-1976
159.-	SARTORI TREVIÑO MARIA FLORIAN	" 1634 " 20-X	-1975
160.-	SHARTAU LUTIS ROOLFO GUILLERMO	" 1776 " 03-XII	-1975
161.-	SILVA CORREA LUIS	" 2169 " 27-VII	-1976
162.-	SOLARI SANVEDRA JIMENEZ ANTONIO	" 2181 " 02-VIII	-1976
163.-	SOTTOLICHIO URQUI ARMANDO L.	" 2006 " 22-IV	-1976
164.-	TANBLAY FLORES S. LUIS ALBA	" 1585 " 30-IX	-1975
165.-	TAVANTIS HACH DAS A. MARILDE	" 1966 " 03-IV	-1976
166.-	TEJO TEGO LUIS ALBERTO	" 1776 " 03-XII	-1975
167.-	TELLES GONZALEZ PAUL DDDY	" 1869 " 20-I	-1976
168.-	TORO VARGAS GABRIEL	" 2076 " 24-V	-1976
169.-	URRUTIA GONZALEZ S. ROLANDINO	" 1623 " 14-X	-1975
170.-	VALDEBENTON FLORES S. LUIS ALBA	" 2230 " 28-VIII	-1976

16.0

171.-	VALDES VALENZUELA SOPANOR DEL T. D/E.	2076	24-V	-1976
172.-	VALENZUELA ARMIJO RENE OMAR	" 2230	28-VIII	-1976
173.-	VALENZUELA JORQUERA SONIA DEL C.	" 1585	30-IX	-1975
174.-	VARELA ALARCON JOSE ARTURO	" 2076	24-V	-1976
175.-	VARGAS RIQUELME ELIAS	" 2076	24-V	-1976
176.-	VASQUEZ GARAY OMAR	" 2230	28-VIII	-1976
177.-	VELIZ ROJAS HECTOR MARIO	" 2076	24-V	-1976
178.-	VERA LINTO LUIS HUMBERTO	" 1475	19-IX	-1975
179.-	VERAGUA SEGURA DELIA SUSANA	" 1634	20-X	-1975
180.-	VERGARA PABLO MODESTO	" 2169	27-VII	-1976
181.-	VERGARA CONTRERAS RENATO	" 1711	11-XI	-1975
182.-	VERGARA MORALES CARMEN LUCIA	" 1634	20-X	-1975
183.-	VIDAL SANDOVAL BERNARDO JOSE	" 2230	28-VIII	-1976
184.-	VIELMA BERTHELOT FRANCISCO H.	" 2232	28-VIII	-1976
185.-	VILUGRON ROJAS JOSE ROLANDO	" 2076	24-V	-1976
186.-	VILLAGRAN ARAVENA VICTORIA J.	" 1890	29-I	-1976
187.-	VILLEGAS ARTILAGA MARITZA DE LA R.	" 1585	30-IX	-1975
188.-	ZAMORA EGUILLUZ MARIA CRISTINA	" 1585	30-IX	-1975
189.-	ASPILLAGA BRICES JOSE LUIS	"	07-IX	-1976
190.-	VILLABOLOS DIAZ MARIA TERESA	" 1585	30-IX	-1975

LORIA GENERAL  
A DE RAZON

A RECEPCION

5 100.

ANEXO 01 GENERALIZADO.

POR ORDEN DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RAUL S. NAVIDES DE LA ROSA  
GENERAL DE DIVISION  
MINISTRO DEL INTERIOR

Lo que se transcribe para conocimiento de US.

Saluda a US.,

ENRIQUE MONTERO HARR  
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

ENDACION

E9

E9

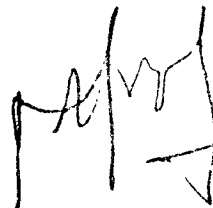
FO.

ANEXO 19. A

HAYDÉE OBERREUTER UMAZABAL. CARNET DE VALPSO  
Nº 6.267.097-5 DOMICILIADA EN MÉTICO 365, DEPTO A  
4º DISO POBL. MARINA MIERCANTE, PUNTA ANCHA  
VALPARAISO. DECLARA QUE FUE PUESTA EN  
LIBERTAD IN CONDICIONAL EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE  
DE 1976, APROXIMADAMENTE A LAS 20 HRS.,  
DESDE EL CAMPAMENTO DE DETENIDOS TRES  
AUSIOS.

DESDE EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 76. RESIDE  
EN EL DOMICILIO CITADO ANTERIORMENTE.  
DESDE SU PUESTA EN LIBERTAD NO HA RECIBIDO  
PRESIONES DE NINGÚN TIPO Y HA DESARROLLAR  
SU VIDA EN FORMA NORMAL.

30 / SEPTIEMBRE / 76.

 HAYDÉE OBERREUTER.

Anexo 26

Lista de algunas personas desaparecidas

LISTA DE ALGUNAS PERSONAS DESAPARECIDAS

---

1. Las siguientes personas de dicha lista han sido citadas en el texto mismo del informe y respondidas las consultas respectivas por escrito por el Gobierno de Chile, de manera que su inclusión es sólo una repetición de nombres:

ARAYA Zuleta, Bernardo  
DIAZ López, Víctor Manuel  
DONAIRE Cortés, Uldarico  
ESCOBAR Cerda, Elisa del Carmen  
FLORES Barraza, María Olga  
GODOY Lagarrigue, Carlos Enrique  
INZUNZA Bascuñán, Iván Sergio  
LARA Rojas, Fernando Antonio  
MUÑOZ Poutays, Jorge Onofre  
RECABARREN Rojas, Segundo  
RECABARREN González, Manuel Guillermo  
RECABARREN González, Luis Emilio  
WEIBEL Navarrete, José Arturo  
ZAMORANO Donoso, Mario  
MENA Alvarado, Nalvia Rosa

De la lista se encuentran detenidas las siguientes personas en los lugares que se indica:

SANTIS Camus, Patricio, en Puchuncaví  
NUÑEZ Ferrada, Héctor Mario, en Tres Alamos  
ROSALES Chávez, Omar Rigoberto, en Puchuncaví.

2. Personas que estuvieron detenidas y que se encuentran en libertad, con indicación de la fecha en que quedaron en libertad y del decreto que lo dispuso:

CORNEJO Campos, Raúl Guillermo	junio 16 de 1976	Decr. 2115
DIAZ Aranda, Augusto	septiembre 11, 1976	" 2244
HARPER I., María Cecilia	agosto 18, 1976	" 2179
MACAYA Molina, Héctor	septiembre 11, 1976	" 2244
SAAVEDRA Quiroz, Roberto	septiembre 11, 1976	" 2244
ATENCIO Cortés, Pedro	septiembre 11, 1976	" 2244
(el nombre anterior se repite dos veces en lista del anexo del Informe)		
TURIEL Palomera, Mariano León	diciembre 18, 1975	Decr. 1807
CASTRO Saravia, Julio E.	agosto 8, 1976	" 2193
DELGADO Delgado, Exequiel del T.	septiembre 11, 1976	" 2244
MAUREIRA Vásquez, Mario	junio 15 de 1976	" 2115
LOZANO Molina, Irma Marina	septiembre 11, 1976	" 2244
ROJAS Páez, Rolando Aliro	septiembre 11, 1976	" 2243
ALLENDE Marambio, Emilio	julio 27 de 1976	" 2170



3. Otras personas que se encuentran en libertad:

BUTNICK Schwartzman, Eduardo  
BUTNICK Schwartzman, Julio

4. Personas cuya identificación aún no ha sido encontrada en el Gabinete de Identificación:

HERNANDEZ Zazpe, Juan Humberto  
DIAZ Silva, Lenin Adán  
GARATEGUA Quintero, Orlando  
GIANELLI Company, Juan Antonio  
RAMOS Vivanco, Oscar Eduardo  
SILVA Bustos, Pedro Eduardo  
GONZALEZ Muñoz, Jorge Luis  
HERNANDEZ Concha, Eduardo Enrique  
FUENZALIDA Loyola, Sergio Manuel

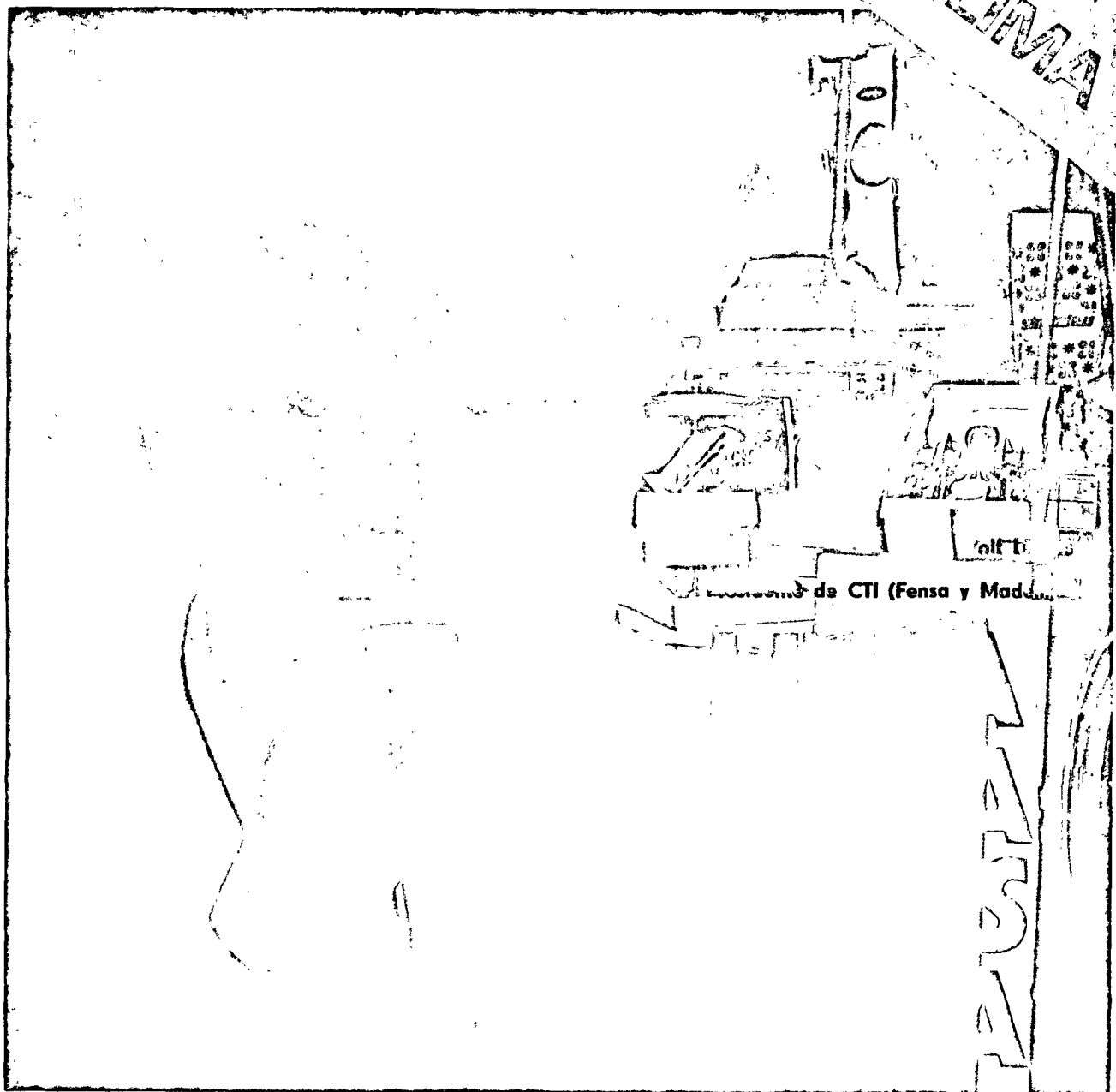
5. Sobre el resto de las personas contenidas en la lista agregada como anexo en el Informe se continúan realizando investigaciones aunque no se encuentran en listado de detenidos.

Anexo 27

Declaración de la Presidente del Colegio de Psicólogos de Chile en  
relación a lo aparecido en la prensa extranjera sobre la participación  
de una supuesta psicóloga chilena exiliada, doña Ana VASQUEZ, en un  
Congreso de Psicología en París

# que p...

CRISIS EN LIMA



... de CTI (Fensa y Mad...

"qué' pasa"

7 October 1976

Number 285

---

## LOS PSICOLOGOS Y LA CAMPAÑA EXTERIOR

---

Señor Director:

En información aparecida en los diarios "Le Monde", de fecha 25/7/76, y "Nouvel Observateur", de 2/8/76, de París, Francia, se dice que en el XXI Congreso Internacional de Psicología realizado en esa ciudad en julio pasado, la señora Ana Vásquez, "profesora chilena de Psicología, en exilio", presentó un informe a ese Congreso en que se señalaba que el 80% de los Psicólogos chilenos están: "sea muertos, sea desaparecidos, sea en prisión, sea en exilio y que los otros colaboran con el aparato represivo, con la Junta de Gobierno".

En relación con las afirmaciones de la Sra. Ana Vásquez según la versión de los diarios arriba indicados, nos permitimos manifestar a Ud. lo siguiente:

1.— Los Psicólogos en Chile tienen absoluta libertad para el ejercicio de su profesión. Según estadísticas del Colegio existen 568 Psicólogos Colegiados; de éstos, 128 radicados o becados en el extranjero, y uno fallecido en el año 1965.

2.— El Colegio de Psicólogos puede garantizar que ejerce un control ético absoluto sobre los colegiados y que ninguno de ellos ha participado en ninguna actividad contraria a la ética de la profesión. Tampoco se ha recibido queja de ninguna especie.

3.— En Chile, la profesión de Psicólogo se encuentra plenamente reconocida y en auge. Los Psicólogos desempeñan sus funciones en las más diversas tareas, tanto a nivel universitario, organismos estatales y privados de la salud, educación e industrias.

4.— Lo anterior puede ser corroborado por el hecho de que una delegación de Psicólogos chilenos asistió al Congreso de París y que ninguno de los participantes chilenos fue objeto de alguna contramanifestación o consulta.

5.— Por último cabe señalar que la Sra. Ana Vásquez no es Psicóloga con estudios en Chile y nunca ha estado colegiada en nuestra institución que agrupa a todos los Psicólogos de Chile.

En la actualidad el Colegio está realizando una labor que estimamos muy importante y fecunda como nunca lo había sido, gracias a la absoluta libertad y tranquilidad que garantizan actualmente el funcionamiento de las instituciones en nuestro país.

**LIANA ORTIZ WOLF,**  
Presidenta

Anexo 28

Declaraciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos publicadas por el periódico chileno "El Cronista", en relación con el estado de los detenidos

Nombre de la publicación: *El Correo*  
" " "  
Ciudad **SANTIAGO**  
Fecha: Año *76* Mes *Septo* Día *7*  
Página *4* Columna *5*  
Tipo de recorte *11321*  
Institución del Congreso *General* *Ames*

### **Justino Orfila al llegar a México**

## **"En Chile no se Tortura a los Detenidos Políticos"**

Ciudad de México  
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Orfila declaró ayer al llegar a México para sostener una entrevista con el Presidente mexicano Luis Echeverría, que "En Chile no se aplican torturas a los presos políticos".

Dijo que conversó con algunos de los detenidos, y que le preguntaron cuándo saldrán en libertad.

Al abordar este tema con el Presidente chileno, General Augusto Pinochet, éste le contestó que "el problema de los presos políticos es solamente chileno, y que aún esa nación permanece en estado de sitio".

El máximo funcionario de OEA dijo también que tiene observadores en el conflicto entre Honduras y El Salvador y que más tarde tendría un panorama real de lo que acontece en esos lugares.

Además dijo que en un futuro no muy lejano habrá unidad entre todas las naciones de Latinoamérica, pese a las diferencias políticas e ideologías, y que Estados Unidos no tiene autoridad sobre la OEA a pesar de que aporta el 66 por ciento para su sostenimiento.

● El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

(OEA). Alejandro Orfila dijo que el órgano hemisférico seguirá siendo el "gran foro del diálogo latinoamericano".

Orfila llegó el jueves y manifestó que discutirá la reorganización de la OEA con el Presidente Luis Echeverría, uno de sus críticos. Pero dijo que la crítica sirvió para "mejorar su estructura y corregir errores".

"A pesar de sus defectos" -añadió, la organización continuará siendo un "gran foro del diálogo latinoamericano". Seguidamente expresó a los periodistas que no cree que México se retirará de la OEA.

Poco después de su arribo Orfila almorzó con Echeverría en la residencia presidencial de Los Pinos. Posteriormente se entrevistó con el Presidente electo José López Portillo, quien iniciará su periodo de seis años el primero de diciembre.

Al preguntársele en el aeropuerto si la OEA seguirá aceptando como miembros a gobiernos impuestos por la fuerza, Orfila respondió que la OEA "es muy respetuosa de la no intervención y autodeterminación de los pueblos". Para añadir que en la América Latina reina la unidad, a pesar de que existen "diferencias políticas e ideológicas".

(DPA-UP)

DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LA O.E.A.

"EL CRONISTA"

Santiago, Chile

20 Junio 1976

En conferencia de prensa

## Doctor Orfila Comprobó Buenas Condiciones de los Detenidos

En Tres Alamos conversó con ex Ministros del régimen anterior y con varios otros personeros, sin recibir quejas de malos tratos.

Sin encontrar el menor indicio de malos tratos de los detenidos y con la posibilidad de conversar privadamente con cualquiera de ellos, el Secretario General de la OEA, el argentino Alejandro Orfila, se refirió ayer, en conferencia de prensa ofrecida en el edificio Diego Portales, a su visita al campo de Tres Alamos. La misma se realizó la semana pasada. Asimismo, y en otro terreno, destacó los puntos positivos logrados en la 6ª Asamblea de la organización diciendo que se "han tomado pasos que no permiten volver atrás".

El máximo ejecutivo de la OEA comenzó su exposición, antes que le formularan preguntas, relatando su recorrido por los campamentos de Tres y Cuatro Alamos "Pocas semanas antes de iniciarse esta Asamblea —dijo— recibí gran cantidad de cables, cartas y aun visitas personales, solicitando mi intervención personal en función del paradero y de

garon varios cables de alcaldes de ciudades de Italia.

"Una vez en Chile —prosiguió el doctor Orfila— le exprese al Coordinador de la 6ª Asamblea de la OEA, Embajador Ricardo Claro, mi deseo de informarme lo más posible sobre la situación de algunos detenidos, en forma personal y directa. El Embajador Claro, con toda cordialidad, a las pocas horas me consiguió una entrevista personal con el Presidente Augusto Pinochet. Le manifesté mis razones para obtener de manera directa informes sobre los detenidos y el señor Presidente accedió de inmediato, facilitando mi acceso a esos campos de detención.

"Le expresé también mi intención de ir acompañado del presidente de la Corte Suprema, doctor José María Eyzaguirre (con quien había conversado al respecto durante mi anterior visita a Chile en marzo), del Ministro de Justicia, Miguel Schweit-

pabellones. Muchos detenidos estaban ya descansando, entre a las habitaciones, cambié opiniones con ellos, estuve en tres pabellones de hombres y en uno de mujeres.

"Mi impresión fue constatar que todos los detenidos gozan de libre plática entre ellos. Los locales son aceptables, no se puede decir extremadamente confortables, pero sí aceptables, para ese tipo de construcción no se puede pedir más. Dentro de lo mínimo, estaban en buenas condiciones.

"Les pregunté sobre su estado de salud, sobre las comidas y el trato recibido, sin obtener respuestas negativas.

"Posteriormente visité el campo de Cuatro Alamos, donde no encontré ningún detenido, aunque lo revise completo.

"Las autoridades me preguntaron si quería conversar con los detenidos en forma particular. Pedí hablar entonces con algunos, cuyos nombres

particularmente sobre su estado, las condiciones en que vivían, y lo hicimos con gran franqueza.

"En conclusión, compruebo que son bien tratados, no hay coerción física. El doctor Cadenmatori me expresó que, como hombre de estudio, no tenía suficiente acceso a libros, mientras que Flores me manifestó sus deseos de contar con más material de cibernética, que es su especialidad.

"Luego de hablar con ellos, solicité al Comandante del campo hablar con otras personas, con los abogados Hernán Montealegre y Fernando Estornol, por quienes se habían preocupado algunos Gobiernos europeos. Me reiteraron que actualmente el trato era bueno, no tenían quejas, y recibían buena información del exterior, a través de radios, revistas, diarios y un aparato de TV.

"Me llamó la atención que la mayoría de ellos me reconocían, especialmente

pos, algunos detenidos podrían haber sido torturados. Aunque reitero que lo dijeron en forma condicional, en tiempo pasado y referido a otras personas.

"Al visitar posteriormente el pabellón de mujeres, se me presentó un grupo de ellas que formaban un Comité Especial, integrado por Sara Wech, Cristina Zamora, Alicia Alvarado e Hilda Garcés. Con estas cuatro señoras mantuvimos un diálogo bastante intenso. En líneas generales me repitieron lo mismo que los demás, no habían sido sometidos a ninguna clase de torturas directas.

"Pero un tema común que apareció en todas estas conversaciones fue la falta de proceso y el no saber hasta cuándo estarían detenidos. Esto lo menciono en forma objetiva, sin abrir juicios sobre nada, porque no me corresponde hacerlo. Pedí al Ministerio de Justicia y al presidente de la Corte Suprema me aclararan esto



"Los debates sobre derechos humanos son una reafirmación de la importancia y del interés que suscita el tema", señaló ayer el doctor Orfila relatando su visita a Tres Alamos.



la situación de diversas personas. Muchas de esas comunicaciones sólo estaban firmadas, sin mayores detalles del remitente, pero otras estaban firmadas y me pedían que les contestase acerca del resultado de mis gestiones. Entre ellas, había algunas personalidades, de importancia, profesores de la Universidad de Harvard, de Stanford, personalidades de EE. UU. y de Europa, incluso me lle-

zaron; del Subsecretario de Relaciones Exteriores y del de Justicia.

"Llegamos al campo de concentración —añadió— donde fuimos recibidos por su Comandante, quien me manifestó tener ordenes expresas de facilitarme el acceso completo al recinto y a la persona de los detenidos, pudiendo asimismo hacerles todas las preguntas que quisiera.

Primero visite todos los

habían sido los más mencionados en las cartas y cables recibidos, entre ellas, una firmada por tres Premios Nobel de la U. de Noruega, un "área preferencial" donde estaban siete detenidos debido a su jerarquía dentro del Gobierno anterior.

"Conversé allí con José Cademartori y Fernando Flores, fueron llamados a mi presencia y mantuve una conversación prolongada. Me interesé

por haberme visto en programas de televisión. Intercambiamos impresiones sobre el informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), ellos lo conocían por las publicaciones hechas en la prensa y tenían una idea clara de su contenido.

"Me afirmaron que no tenían ningún tipo de presión, pero me dieron a entender, sin decirlo en forma directa, que en años anteriores, en otros cam-

de la falta de proceso y de la permanencia en esos recintos. La respuesta que me dieron es que las razones de la detención están basadas en el Poder Ejecutivo en función de la Constitución de 1833, que establece el Estado de Sitio. Según eso, el Estado tiene derecho a detener a personas por motivos de seguridad nacional y ponerlas a disposición del Ejecutivo hasta que hayan pasado las causas de su detención o caducado el estado de sitio.

■ Llevé la impresión —continúa su relato el doctor Orfila— que toda esa

gente, obviamente descartando su situación espiritual muy particular, por las razones expuestas sobre proceso e incertidumbre del periodo de detención, estaban aceptablemente atendidos, sin maltrato físico. Al contrario, Cademartori y Flores se refirieron al Comandante del campo con cierta tolerancia, porque los trataba bien. Además, noté cierta cordialidad profesional entre los abogados Montalegre (de la Vicaría de la Solidaridad) y Estornol (comunista) con sus colegas, los doctores Eyzaguirre y Schweitzer, con quienes se conocían con anterioridad.

"Debo agregarles que todos los telegramas y comunicaciones recibidos los he pasado al CIDH para que allí prosigan con los tramites aplicables en estos casos.

"Con honestidad —agregó el personero de la OEA— esperaba que los detenidos que entrasen hubiesen mirado con antipatía a las personas del Ministerio de Justicia y al presidente de la Corte Suprema, quienes me estaban acompañando. Por el contrario, todos se dieron la mano, sobre todo el abogado Fernando Estornol hablaba con ellos usando la costumbre de mencionarlos por su

visitas a algún organismo de la OEA.

"No está previsto —continúa— por lo que respecta a los miembros del Consejo Permanente. Además voy a contestar todas y cada una de las cartas recibidas, describiendo en particular la situación de las personas con quienes conversé en Tres Alamos.

— Expreso luego el doctor Orfila, ante otra consulta, que estaba seguro sobre lo expresado por el Gobierno de Chile en el sentido de cooperar y facilitar el trabajo de la CIDH.

Otra pregunta estuvo relacionada con el supuesto cable que envió un "ex vicepresidente chileno" para que se preocupara sobre el estado de Luis Corvalán, ex Secretario General del proscripto partido comunista.

"No recibí ese cable, aunque lo busqué —repuso Alejandro Orfila—. De todos modos le pregunté por Corvalán al doctor Cademartori, que estaba allí también detenido y su respuesta es aplicable a todos, es decir, esta bien atendido y no ha sido sometido a creaciones.

"Con honestidad —agregó el personero de la OEA— esperaba que los detenidos que entrasen hubiesen mirado con antipatía a las personas del Ministerio de Justicia y al presidente de la Corte Suprema, quienes me estaban acompañando. Por el contrario, todos se dieron la mano, sobre todo el abogado Fernando Estornol hablaba con ellos usando la costumbre de mencionarlos por su

primer nombre. Eso, sinceramente, me llamo la atención.

Respondiendo a otra pregunta sobre si aceptaba las explicaciones del Estado de Sitio, el doctor Orfila manifestó: "Soy funcionario internacional y extranjero, no puedo emitir opinión".

Añadió luego: "Con el doctor Cademartori discutimos la definición de la palabra tortura. Para el estar detenido y a es una tortura, como el no poder leer ciertos libros, pero la aceptación normal de la palabra se refiere al castigo físico".

● Refiriéndose a los resultados de la 6ª Asamblea, el Secretario General mencionó como muy positivo el asunto de los derechos humanos, la resolución sobre el Canal de Panamá "apoyada por EE. UU. la cooperación para el desarrollo (no vamos a tener calidad humana de vida ni tranquilidad social si no ofrecemos mayores oportunidades a los que viven en este continente)", la transferencia de tecnología (para evitar los excesos cometidos antes de la Ley de Comercio Exterior de EE. UU., cuyo Gobierno quiere enmendarla, pero el Congreso no lo considera oportuno) y el decreto expresado por la ex colonia de Surinam para regresar a la OEA.

Se han tomado pasos que no permiten volver hacia atrás —enfático el doctor Orfila— y existe la tendencia de utilizar más y mejor a la OEA haciendo con franqueza y sin antagonismos.



Un dialogo franco con los periodistas sostuvo ayer el Secretario General de la OEA, Alejandro Orfila, acompañado del Subsecretario adjunto doctor Zelaya Coronado (a la izquierda).

● A continuación le preguntaron al Secretario General si pensaba rendir algún informe sobre estas

C O P I A  
=====

"EL CRONISTA", 20 de junio de 1976

En Conferencia de prensa

DOCTOR ORFILA COMPROBO BUENAS CONDICIONES DE LOS DETENIDOS

En Tres Alamos conversó con ex Ministros del régimen anterior y con varios otros personeros, sin recibir quejas de malos tratos.

Sin encontrar el menos indicio de malos tratos de los detenidos y con la posibilidad de conversar privadamente con cualquiera de ellos, el Secretario General de la OEA, el argentino Alejandro Orfila, se refirió ayer, en conferencia de prensa ofrecida en el edificio Diego Portales, a su visita al campo de Tres Alamos. La misma se realizó la semana pasada. Asimismo, y en otro terreno, destacó los puntos positivos logrados en la 6a. Asamblea de la organización, diciendo que se "han tomado pasos que no permiten volver atrás".

El máximo ejecutivo de la OEA comenzó su exposición, antes que le formularan preguntas, relatando su recorrido por los campamentos de Tres y Cuatro Alamos. "Pocas semanas antes de iniciarse esta Asamblea -- dijo -- recibí gran cantidad de cables, cartas y aún visitas personales, solicitando mi intervención personal en función del paradero y de la situación de diversas personas. Muchas de esas comunicaciones sólo estaban firmadas, sin mayores detalles del remitente, pero otras estaban definitivamente identificadas y me pedían que les contestase acerca del resultado de mis gestiones. Entre ellas, había algunas personalidades, de importancia, profesores de la Universidad de Harvard, de Stanford, personalidades de EE. UU. y de Europa, incluso me llegaron varios cables de alcaldes de ciudades de Italia.

"Una vez en Chile -- prosiguió el doctor Orfila -- le expresé al Coordinador de la 6a. Asamblea de la OEA, Embajador Ricardo Claro, mi deseo de informarme lo más posible sobre la situación de algunos detenidos, en forma personal y directa. El Embajador Claro, con toda cordialidad, a las pocas horas, me consiguió una entrevista personal con el Presidente Augusto Pinochet. Le manifesté mis razones para obtener de manera directa informes sobre los detenidos y el señor Presidente accedió de inmediato, facilitando mi acceso a esos campos de detención.

"Le expresé también mi intención de ir acompañado del presidente de la Corte Suprema, doctor José María Eyzaguirre (con quien había conversado al respecto durante mi anterior visita a Chile en marzo), del Ministro de Justicia, Miguel Schweitzer; del Subsecretario de Relaciones Exteriores y del de Justicia.

"Llegamos al campo de Tres Alamos a las 9 de la noche -- agregó -- donde fuimos recibidos por su Comandante, quien me manifestó tener órdenes expresas de facilitarme el acceso completo al recinto y a la persona de los detenidos, pudiendo asimismo hacerles todas las preguntas que quisiera.

"Primero visité todos los pabellones. Muchos detenidos estaban ya descansando, entré a las habitaciones, cambié opiniones con ellos, estuve, estuve en tres pabellones de hombres y en uno de mujeres.

"Mi impresión fue constatar que todos los detenidos gozan de libre plática entre ellos. Los locales son aceptables, no se puede decir extremadamente confortables, pero sí aceptables, para ese tipo de construcción no se puede pedir más. Dentro de lo mínimo, estaban en buenas condiciones.

"Les pregunté sobre su estado de salud, sobre las comidas y el trato recibido, sin obtener respuestas negativas.

"Posteriormente visité el campo de Cuatro Alamos, donde no encontré ningún detenido, aunque lo revisé completo.

"Las autoridades me preguntaron si quería conversar con los detenidos en forma particular. Pedí hablar entonces con algunos, cuyos nombres habían sido los más mencionados en las cartas y cables recibidos, entre ellas una firmada por tres Premios Nobel de la Universidad de Harvard. Me llevaron a un recinto especial, un "área preferencial" donde estaban siete detenidos debido a su jerarquía dentro del Gobierno Anterior.

"Conversé allí con José Cademártori y Fernando Flores, fueron llamados a mi presencia y mantuvimos una conversación prolongada. Me interesé particularmente sobre su estado, las condiciones en que vivían, y lo hicimos con gran franqueza.

"En conclusión, comprobé que son bien tratados, no hay coerción física. El doctor Cademártori me expresó que, como hombre de estudio, no tenía suficiente acceso a libros, mientras que Flores me manifestó sus deseos de contar con más material de cibernética, que es su especialidad.

"Luego de hablar con ellos, solicité al Comandante del campo hablar con otras personas, con los abogados Hernán Montealegre y Fernando Ostornol, por quienes se habían preocupado algunos Gobiernos europeos. Me reiteraron que actualmente el trato era bueno, no tenían quejas, y recibían buena información del exterior, a través de radios, revistas, diarios y un aparato de TV.

"Me llamó la atención que la mayoría de ellos me reconocía, especialmente por haberme visto en programas de televisión. Intercambiamos impresiones sobre el informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), ellos lo conocían por las publicaciones hechas en la prensa y tenían una idea clara de su contenido.

"Me afirmaron que no tenían ningún tipo de presión, pero me dieron a entender, sin decirlo en forma directa, que en años anteriores, en otros campos, algunos detenidos podrían haber sido torturados. Aunque reitero que lo dijeron en forma condicional, en tiempo pasado y referido a otras personas.

"Al visitar posteriormente el pabellón de mujeres, se me presentó un grupo de ellas que formaban un Comité Especial, integrado por Sara Wech, Cristina Zamora, Alicia Alvarado e Hilda Garcés. Con estas cuatro señoras mantuvimos un diálogo bastante intenso. En líneas generales me repitieron lo mismo que los demás, no habían sido sometidas a ninguna clase de torturas directas.

"Pero un tema común que apareció en todas estas conversaciones fue la falta de proceso y el no saber hasta cuando estarían detenidos. Esto lo menciono en forma objetiva, sin abrir juicios sobre nada, porque no me corresponde hacerlo. Pedí al Ministerio de Justicia y al Presidente de la Corte Suprema me aclararan esto de la falta de proceso y de la permanencia en esos recintos. La respuesta que me dieron es que las razones de la detención están basadas en el Poder Ejecutivo en función de la Constitución de 1833, que establece el Estado de Sitio. Según eso, el Estado tiene derecho a detener a personas por motivos de seguridad nacional y ponerlas a disposición del Ejecutivo hasta que hayan pasado las causas de su detención o caducado el Estado de Sitio.

\* Llevé la impresión -- continúa su relato el doctor Orfila -- que toda esa gente, obviamente descartando su situación espiritual muy particular, por las razones expuestas sobre proceso e incertidumbre del período de detención, estaban aceptablemente atendidas, sin mal trato físico. Al contrario, Cademártori y Flores se refirieron al Comandante del campo con cierta tolerancia, porque los trataba bien. Además, noté cierta cordialidad profesional entre los abogados Montealegre (de la Vicaría de la Solidaridad) y Ostornol (comunista), con sus colegas los doctores Eyzaguirre y Schweitzer, con quienes se conocían con anterioridad.

"Debo agregarles que todos los telegramas y comunicaciones recibidas los he pasado al CIDH para que allí prosigan con los trámites aplicables en estos casos".

\* A continuación le preguntaron al Secretario General su pensaba tender algún informe sobre estas visitas a algún organismo de la OEA.

"No está previsto -- contestó -- pero conversaré al respecto con los miembros del Consejo Permanente. Además, voy a contestar todas y cada una de las cartas recibidas, describiendo en particular la situación de las personas con quienes conversé en Tres Alamos.

Expresó luego el doctor Orfila ante otra consulta, que estaba seguro sobre lo expresado por el Gobierno de Chile en el sentido de cooperar y facilitar el trabajo de la CIDH.

Otra pregunta estuvo relacionada con el supuesto cable que envió un "ex vicepresidente chileno" para que se preocupara sobre el estado de Luis Corvalán, ex Secretario General del proscrito Partido Comunista.

"No recibí ese cable, aunque lo busqué -- repuso Alejandro Orfila -- De todos modos, le pregunté por Corvalán al doctor Cademartori, que estaba allí también detenido, y su respuesta es aplicable a todos, es decir, está bien atendido y no ha sido sometido a coerciones.

"Con honestidad -- agregó el personero de la OEA -- esperaba que los detenidos que entrasen hubiesen mirado con antipatía a las personas del Ministro de Justicia y al Presidente de la Corte Suprema, quienes me estaban acompañando. Por el contrario, todos se dieron la mano, sobre todo el abogado Fernando Ostomol hablaba con ellos usando la costumbre de mencionarlos por su primer nombre. Eso, sinceramente, me llamó la atención.

Respondiendo a otra pregunta sobre si aceptaba las explicaciones sobre el Estado de Sitio, el doctor Orfila manifestó: "Soy funcionario internacional y extranjero, no puedo emitir opinión".

Añadió luego: "Con el doctor Cademartori discutimos la definición de la palabra tortura. Para él estar detenido ya es una tortura, como el no poder leer ciertos libros, pero la acepción normal de la palabra se refiere al castigo físico".

\* Refiriéndose a los resultados de la 6a. Asamblea, el Secretario General mencionó como más positivo el asunto de los derechos humanos; la resolución sobre el Canal de Panamá, "apoyada por EE.UU."; la cooperación para el desarrollo ("no vamos a tener calidad humana de vida ni tranquilidad social si no ofrecemos mayores oportunidades a los que viven en este continente"); la transferencia de tecnología ("para evitar los excesos cometidos antes"); la ley de comercio exterior de EE. UU., "cuyo Gobierno quiere enmendarla, pero el Congreso no lo considera oportuno", y el deseo expresado por la ex colonia de Surinam para ingresar a la OEA.

"Se han tomado pasos que no permiten volver hacia atrás -- enfatizó el doctor Orfila -- y existe la tendencia de utilizar más y mejor a la OEA haciéndolo con franqueza y sin antagonismo".

Anexo 29

Declaraciones manuscritas de los señores Iván Adolfo PARVEX, Carlos Raúl GONZALEZ, León Renato HUERTA, Eduardo Francisco REYES, Juan Ernesto SEGURA y José Miguel MOYA negando haber firmado contrato alguno con la Dirección de Inteligencia Nacional

DECLARACIÓN

ANEXO 21. a.

Yo, Iván Adolfo Párriz Alfaro, declaro que en el período que he estado detenido nunca se me ha obligado a firmar un documento en el cual yo pasé a ser agente auxiliar de inteligencia, ni menos algún documento que me comprometa con el gobierno o con algún agente de seguridad.

Atyp, Septiembre 1976.

I. Párriz

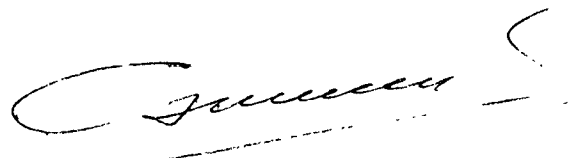
de Atyp.

21. a.

DECLARACION

Yo, Carlos Raúl González Angarín declaro  
de que durante el período que he permanecido  
detenido nunca se me ha obligado a firmar  
según documento en el cual yo pase a ser  
agente auxiliar de inteligencia ni menos  
algún documento que me comprometa con el  
Gobierno o con algún aparato de Seguridad

Stgo, Septiembre de 1976.



C. de I. 32946 Lebú.-

Declaración

Yo, don Renato Huerta Mondaca, declaro que durante el periodo de mi detención jamás se me obligó a firmar un documento en el cual yo pase a ser agente auxiliar de inteligencia, ni menos a algún documento que me comprometiera con el gobierno o con algún aparato de seguridad.

Renato Huerta M.  
Don R. Huerta M.

CI 4 222 546-0 Stgo.

Santiago, Septiembre de 1976.

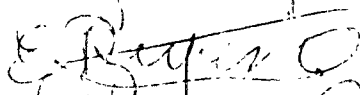


21. a.

## Declaración

Yo, Eduardo Francisco Reyes  
Ortiz, cedula de identidad N° 6.865.905

del Gabinete de Santiago,  
Declaro que: En el Periodo que  
he estado detenido, nunca se me ha  
obligado a firmar un documento en el  
cual yo pase a ser Agente Auxiliar  
de Inteligencia, ni menor algún  
documento que me comprometa con  
el Gobierno o con algún Aparato  
de Seguridad.

  
Eduardo Reyes Ortiz  
Firma y nombre.

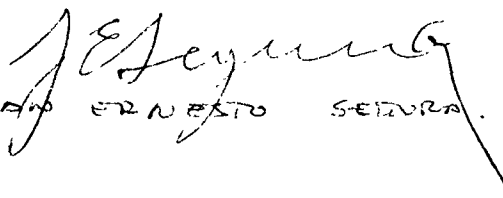
Santiago, Septiembre 1976.

21. a.

DECLARACIÓN

YO, JUAN ERNESTO SEIZURA AGUILAR,  
CARNET 5744809, STRO, QUE EN EL  
PERIODO QUE HE ESTADO DETENIDO NUNCA  
HE FIRMADO UN DOCUMENTO EN EL QUE  
YO SEA NOMBRADO AGENTE AUXILIAR DE  
INTELIGENCIA NI MENOS UN DOCUMENTO  
QUE ME COMPROMETA CON EL GOBIERNO, O CON  
EL TRABAJO O COLABORACION CON ALGUN  
APARATO DE SEGURIDAD.

FECHA: 5 SEPTIEMBRE 1976

  
JUAN ERNESTO SEIZURA AGUILAR

21.a.

## Declaración

Yo, José Miguel Moya Raurich, carnet de identidad 6611061 de Stgo, declaro que: nunca se me ha obligado a firmar documento alguno, en el cual yo pase a ser agente de un servicio de inteligencia (SIMA), ni me nos algún documento que me comprometa con el gobierno o con algún aparato de seguridad.

Dando esta declaración en forma libre, sin que se me haya ejercido premio alguno.

  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

José Moya Raurich

Santiago, Septiembre 1976

Anexo 30

Copia del artículo aparecido, con fecha 17 de septiembre de 1976, en el periódico "Voix Ouvriere" de Ginebra, dando cuenta de una conversación telefónica entre el Alcalde de Nápoles y el detenido Luis CORVALAN

"Luis Corvalán cumple sesenta años"

"En esta oportunidad el Presidente del Partido Suizo del Trabajo señor Vincent le dirigió, a nombre del Partido, un telegrama con amistosas y calurosas felicitaciones, rogándole que hiciera cuanto estuviera en su mano por su liberación y la de sus camaradas chilenos encarcelados.

"Luis CORVALAN, Secretario del Partido Comunista de Chile, fue arrestado inmediatamente después del golpe de Estado de la Junta Militar de Pinochet, y se encuentra en la actualidad detenido en la prisión de "Tres Alamos".

"Hay un hecho interesante y significativo: el Alcalde de Nápoles, el síndico Maurizio Valensi, los guardias urbanos, los periodistas ... Kermesse del Partido y la "VO" de Ginebra) logró, tras grandes esfuerzos, el éxito y pudo conversar con Luis Corvalán por TELEFONO. La conversación tuvo lugar en presencia de los asesores del Alcalde Valensi, los guardias urbanos, periodistas, técnicos de radio y televisión, quienes, vivamente emocionado por estas primeras noticias directas, oyeron la voz de Corvalán.

"Entre otras cosas, este último, respondiendo a los votos de felicidad expresados calurosamente por Valensi de parte propia y en nombre de los comunistas italianos y de su hija Viviane, asistente al Festival de la Unidad, en Nápoles:

"Estoy bien, cuidándome los males propios de la edad. No pretendo dejar mis huesos aquí. Te ruego dar saludos a Enrico, Luigi y Giancarlo, como también al señor Zaccagnini (secretario general de la democracia cristiana) y agradecer a todos los amigos lo que hacen por nosotros.

"Como Valensi le insistiera: Haremos cuanto podamos por tu libertad y la de los demás camaradas, Corvalán le respondió: Mis mejores deseos para el futuro y un fuerte abrazo, a lo que Valensi respondió: Queremos verte cuanto antes aquí, abrazos, Corvalán. Mantente fuerte.

"La conversación tuvo lugar el 14 de septiembre, tuvo una duración de seis minutos y fue muy emotiva.

"Es la primera vez que un destacado dirigente del PC chileno, muy popular y muy querido por su pueblo, ha podido ser escuchado directamente por teléfono. El hecho reviste importancia y anima a todos aquellos, innumerables, que luchan por la liberación de millares de prisioneros políticos desaparecidos en las mazmorras chilenas"

Voix Ouvriere, Viernes 17 de septiembre de 1976, N° 214.

Pré-Prime 6      Tél. 20 63 35  
Case postale 228  
1211 GENEVE 4  
-----  
Chauderon 5      Tél. 22 06 54  
1003 LAUSANNE  
-----  
Versoix 7      Tél. 23 14 66  
Case postale 271  
2301 LA CHAUX DE FONDS  
-----  
CCP Genève 12 - 932<sup>h</sup>

GENEVE I A - N° 214

VENREDI 17 SEPTEMBRE 1973

32e année - 70 ct.

# VOIX OUVRIÈRE

QUOTIDIEN POLITIQUE ET D'INFORMATION

ORGANE DU PARTI SUISSE DU TRAVAIL

**eu**

Lien batterie  
«Uranus» assure  
un démarrage  
immédiat

**ESCHLER-  
URANIA**

1, rue de St Julien  
1201 CAROUGE  
Tél. 43 64 05

Surmursale 31 33, rue des Deux-Fontes  
Tél. 34 52 42 - La Jonction - Genève

## Luis Corvalan a eu soixante ans

A cette occasion le nom du Parti suisse du Travail, le président Valensi lui a adressé par télégramme ses félicitations amicales et chaleureuses et plus l'engagement de tout faire pour sa libération et celle des camarades chiliens emprisonnés.

Luis CORVALAN, secrétaire du Parti communiste chilien a été arrêté aussitôt après le coup d'Etat de la junte militaire de Pinochet et il est actuellement détenu dans la prison de « Los Alamos ».

Fort fort intéressant et significatif le maire de Naples, le syndic Maurizio Valensi, le « vuplo » urbain des journalistes, les techniciens radio et TV, tous vivement intéressés ces premières nouvelles directes et à l'écoute de la voix de Corvalan.

Celui-ci a déclaré entre autres répondant aux vœux chaleureux que Valensi lui transmettait en son nom, au nom des communistes italiens et au nom de sa fille Viviana présente au Festival de l'« Unità » à Naples :

« Je suis bien, je cherche à enseigner les milieux du Parti. Je n'entends pas laisser mes amis et je le prie de saluer Enrico, Luigi, Giancarlo et aussi M. Zaccagnini (secrétaire général de la Démocratie chrétienne) et de remercier tous les amis pour ce qu'ils font pour nous ».

Comme Valensi lui répondait : « Nous ferons tout pour la liberté et pour celle de tous les autres camarades » Corvalan a répondu : « Des vœux à tous pour l'avenir. A tous grand merci et une accolade ». A quoi, Valensi a répondu en terminant : « Nous tous qui voulons le voir rapidement et l'embrassons, merci Corvalan ! Reste fort ».

La conversation qui a eu lieu le 14 septembre a duré six minutes dans une atmosphère d'optimisme et de confiance.

C'est la première fois qu'un dirigeant du PC chilien très populaire et très aimé par son peuple a pu se faire entendre directement par téléphone. Le fait est d'importance et de nature à encourager tous ceux, innombrables, qui luttent pour la libération des milliers de prisonniers politiques enfoncés dans les geôles chiliennes.

REA

Anexo 31

Copias de los Fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la  
Corte Suprema de Justicia de Chile con respecto a los Recursos de  
Amparo presentados en favor de los señores Eugenio VELASCO y  
Jaime CASTILLO

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

Santiago, diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y seis.

VISTOS:

Los abogados señores Héctor Valenzuela Valderrama, Adolfo Zaldívar Larraín, Narciso Irureta Abarro y Guillermo Videla Vial han recurrido de amparo, a fs. 1, en favor de don Jaime Castillo Velasco por haber sido éste detenido el 5 de agosto en curso alrededor de las 17,15 horas en su oficina. A fs. 3 los señores Valenzuela y Videla recurren también de amparo en favor del abogado señor Eugenio Velasco Letelier, quien habría sido detenido el mismo día y hora, al entrar al edificio en que tiene su oficina frente a los Tribunales de Justicia, por personas vestidas de civil que no se identificaron, no mostraron orden y lo obligaron a subir a un automóvil. A fs. 8 y 9 se solicitó -- por uno de los recurrentes -- que la prosecución de los recursos se entendiere referida a la orden de expulsión del territorio nacional de los amparados, pidiéndose "la declaración de ilegalidad del decreto que la dispuso y dar orden al Gobierno para que los haga retornar al país o subsidiariamente, se ordene remover todo impedimento que dificulte su ingreso a Chile". A fs. 29 rola copia del decreto exento N° 2188 del Ministro del Interior que dispone el arresto de los señores Velasco y Castillo y ordena mantenerlos detenidos en el Campamento Tres Alamos; a fs. 24 y 26 acompañan copias de los decretos Nos. 826 y 827 de los Ministros del Interior y Defensa Nacional que ordenan que la Dirección General de Investigaciones procederá a expulsar del territorio nacional a ambos y otorgarles pasaporte por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

El Ministro del Interior informa,



a fs. 23 y 25, que ambos fueron arrestados en virtud del decreto exento N° 2188 de 6 de agosto y que por decreto exento N° 2189, de la misma fecha se dispuso su libertad. Agrega que fueron expulsados en virtud de lo ordenado en los decretos 826 y 827 de 5 del presente, por así requerirlo los altos intereses de la seguridad del Estado.

A fs. 12 y 13 rolan los informes del Prefecto Jefe del Area Metropolitana de Investigaciones en el sentido de que ambos fueron detenidos y expulsados del territorio nacional en virtud de lo dispuesto en los decretos ya señalados. Agrega que la orden de expulsión se cumplió en el vuelo N° 125 de LAN Chile, que salió del Aeropuerto de Pudahuel a las 18.10 horas del viernes 6 del mes en curso con destino a Buenos Aires.

Oídos los alegatos de los abogados de las partes, se han traído los autos para resolver.

Y, teniendo presente:

1.- Que los recursos de amparo, en cuanto apuntan a la orden de arresto de los señores Jaime Castillo Velasco y Eugenio Velasco Letelier, materia a la cual se limitaron primitivamente, carecen de importancia en este momento porque el decreto exento que así lo dispuso fue dejado sin efecto por otro emitido el mismo día, y el cumplimiento de la medida de expulsión dispuesta en contra de ambos profesionales, lleva implícita la facultad conferida a la policía para detener a los afectados, de ahí que sólo interesa analizar si los decretos de expulsión contienen las exigencias legales del caso, como lo entendió la defensa de los amparados al manifestar que los recursos se proseguían para lograr la revisión de dichos actos administrativos;

2°.- Que en virtud del decreto ley 1369 de 11 de marzo de este año el territorio de Chile se encuentra sometido al Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior, el cual procede -- según lo previsto en el art. 6° del D.L. 640 de 1974 -- cuando la conmosión interna es provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que no se encuentran organizadas.

3°.- Que el art. 2° del D.L. 81, modificado por el D.L. 684, establece que "en los casos de declaración de estado de sitio previsto en el art. 6° del D.L. 640 de 1974, y cuando así lo requieren los altos intereses de la Seguridad del Estado, el Gobierno podrá disponer la expulsión o abandono del país de ~~determinadas~~ personas, extranjeras o nacionales, por decreto fundado que llevará la firma de los Ministro del Interior y Defensa Nacional.- Los que sean objeto de la medida de expulsión o abandono del país podrán elegir libremente el país de su destino";

4°.- Que los arts. 72 N° 17 de la Constitución Política del Estado y 10 N° 14 del D.L. 527 de 1974 establecen que por la declaración del Estado de Sitio só lo se conceden al Presidente de la República las facultades de trasladar las personas de un departamento a otro y las de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes;

5°.- Que, de consiguiente, el D.L. N° 81 confiere al Gobierno, durante el Estado de Sitio, una facultad diversa de las señaladas en la disposición constitucional y legal transcrita en el considerando precedente.

El D.L. 527 de 1974, en su art. 4°,

establece que la Junta de Gobierno ejerce, mediante decretos leyes, el Poder Constituyente; y el decreto ley 788, de 4 de diciembre de 1974, declaró en su art. 1° que los D.L. dictados hasta la fecha por la Junta de Gobierno, en cuanto sean contrarios o se opongan o sean distintos a algún precepto de la Constitución Política del Estado, han tenido y tienen la calidad de normas modificatorias, ya sea de carácter expreso o tácito, parcial o total, del correspondiente precepto de la Constitución.

Se ha alegado en estrados que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, al establecer que la expulsión del país no puede verificarse respecto de nacionales, constituye un tratado que por haber sido ratificado por nuestro Gobierno en febrero de 1972 y es tar vigente desde el 22 de marzo de este año, debe aplicarse preferentemente a la legislación nacional y ha tenido, por tanto, efecto derogatorio del art. 2° del D.L. 81. Como pue de advertirse, esta es una materia que, por estar referida a un precepto con rango constitucional no tiene la prevalencia que se le atribuye.

6°.- Que, en cuanto concierne a la facultad de esta Corte para conocer de recursos de amparo dirigidos contra las decisiones del Gobierno que ordenen la expulsión del país, cabe decir lo que sigue.

La Constitución asegura a todos los habitantes de la República "según lo expresa su art. 10 N° 15, la libertad de permanecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, a condición de que se guarden los reglamentos de policía y salvo siempre el perjuicio de tercero; sin que nadie pueda ser de-

tenido, procesado, preso o desterrado sino en la forma determinada por las leyes.

Por su parte, el art. 16 de la Carta Fundamental establece que todo individuo que se halla detenido, procesado o preso con infracción a lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señala la ley en demanda que se guarden las formalidades legales.

En el primero de los indicados preceptos, la idea de detención está contrapuesta a la de la libertad que en el mismo se asegura, es decir, la de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio. El término "detención" debe, pues, entenderse en su sentido amplio; así lo ha comprendido nuestro más alto tribunal en diversos fallos (Gac. 1932, T.1, pág. 222, Rev.T.50, pág. 271, etc.); así lo estableció también el Auto acordado sobre tramitación y fallo de los recursos de amparo, de 1932.

A este respecto, cabe señalar que la expulsión del país comienza con la privación de libertad dentro de él y se ejecuta impidiendo el reingreso al territorio, lo que equivale a mantener la situación prohibitiva del derecho constitucional de permanecer y deambular en el espacio geográfico de la nación.

Tal concepción amplia está, además, en completo acuerdo con la finalidad del recurso de "habeas corpus", como acción de garantía de la libertad personal frente al Poder Público.

La circunstancia de que el Código de Procedimiento Penal regule este recurso en relación con la

detención o la prisión en su sentido procesal estricto no se contrapone a lo expuesto, porque tratándose de las privaciones restrictivas de la libertad emanadas de la autoridad que no sean detenciones ni prisiones, el amparo tiene origen constitucional.

7°.- Que no se opone lo dicho a lo dispuesto en los arts. 4° de la Constitución Política y 4° y 5° del Código Orgánico de Tribunales. El primero establece que ninguna magistratura puede atribuirse otra autoridad o de recho que los que expresamente se les haya conferido por la autoridad o las leyes, y es la propia Constitución, en su artículo 16, la que otorga especialmente la facultad judicial de conocer y fallar recursos de amparo.

Si bien el art. 4° del Código Orgá nico de Tribunales prohíbe al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer o tras funciones que las determinadas en los artículos anteriores, es lo cierto que precisamente en el art. 3° del mismo Có digo se dice que los Tribunales tienen, además, las facultades conservadoras que a cada uno se asignan en sus respectivos títulos, y en su art. 63 N° 4° confiere a esta Corte Competencia para conocer en primera instancia de los recursos de amparo, la cual -- como lo enseña la doctrina y fue reconocido por el constituyente de 1925 -- es una facultad conservado ra de las libertades públicas.

La acción de amparo es, pues, un a sunto judicial que se promueve en el orden temporal dentro del territorio de la República; por eso, el conocimiento por los Tribunales de Justicia está legitimado en virtud del art. 5° del mismo Código Orgánico.

8°.- Que los Decretos de Expulsión 826 y 827 se encuentran fundados en una circunstancia que los hace procedentes, fueron firmados por los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, y de ellos tomó razón la Contraloría General de la República. Así, han sido dictados en un caso previsto por la ley y de acuerdo con las formalidades le gales determinadas en el mencionado D.L. 81.

9°.- Que se cuestionó en estrados la circunstancia de no contener los referidos decretos de expulsión los hechos y las consideraciones que habían servido para estimar que los amparados constituyen un peligro para la seguridad nacional, pero es lo cierto que no existe precepto que imponga al respecto ese tipo de ponderación, bastando que contengan un fundamento, y el rol semántico de tal vocablo en la expresión que fue usado, se satisface dando la razón principal con que se pretende afianzar lo resuelto, que en el caso de autos se cumplió en plenitud, al señalarse los le gales que contemplan la facultad y la situación que autoriza la medida, de suerte que es un exceso imponer otra motivación y menos aún en el ámbito que se quiere referente a la justifi cación del cargo que se les atribuye.

10°.- Que establecido como se ha consignado, que los decretos en cuestión reúnen los requisitos legales, no corresponde a esta Corte examinar la legitimi dad de las órdenes de expulsión en cuanto a las razones que ha tenido en cuenta el Ejecutivo para concluir que la permanen cia en Chile de los amparados constituye un peligro para la se guridad del Estado, en atención a que esta calificación está sometida al Gobierno para que use de sus facultades privativas durante la situación de emergencia llamada Estado de Sitio.

11°.- Que la afirmación de no haberse dado a los afectados la opción de elegir libremente el lugar de su destino, fue controvertido por el representante del Gobierno, expresando que desecharon la oferta formulada sobre el particular, y en tales condiciones no es dable dar crédito a la indicada aserción, ya que se carece de antecedentes que la avallan.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en el art. 306 del Código de Procedimiento Penal, se declaran sin lugar los recursos de amparo deducidos en favor de Eugenio Velasco Letelier y Jaime Castillo Velasco a fs. 1, 3, 8 y 9, en cuanto se refieren al decreto exento de arresto y a los decretos de expulsión del territorio nacional.

Resuelta con el voto en contra del Ministro señor Galecio, quien estuvo por acoger los recursos de amparo en cuanto por ellos se solicita que se supriman los efectos de los decretos de expulsión de los señores Jaime Castillo y Eugenio Velasco y se autorice su reingreso al país. No acepta el disidente, en el fallo de mayoría, el considerando primero, el último párrafo del quinto ni los fundamentos octavo y noveno, décimo y undécimo. En su lugar, tiene presente lo que sigue:

1.- Las disposiciones constitucionales y legales transcritas en el fundamento quinto de este fallo no conducen a la conclusión de que el Decreto Ley N° 81 tenga rango constitucional. El efecto que en todo caso produciría en el artículo 72 N° 17 de la Constitución al ser considerado una norma que ha modificado tácita y parcialmente a este precepto constitucional, no podría ser otro que eliminar el carácter taxativo de las medidas que permite acordar durante el Estado de

Sitio, ya que agrega las de expulsar personas determinadas del territorio nacional; pero en cuanto regula esta medida permanece en su simple carácter legal y no se introduce en el campo normativo de la Constitución. La ausencia de facultades de esta Corte para analizar los efectos derogatorios que se asignan por la defensa de uno de los amparados al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas sobre el mencionado artículo segundo del Decreto Ley N° 81, no podría derivar, pues, de tener este precepto una jerarquía constitucional en su totalidad, sino en que de una manera restringida -- sólo en cuanto ha introducido una nueva facultad durante el Estado de Sitio allí donde la Constitución lo prohibía -- habría modificado, parcialmente, un precepto constitucional.

2°.- El decreto exento que ordenó el arresto de los señores Velasco y Castillo en el Campo de Detenidos Tres Alamos fue extendido y cumplido fuera de los casos previstos por la ley.

Consta de las copias de dichos decretos y de los informes de la Prefectura de Investigaciones y del Ministro del Interior, que el 5 de agosto se decretó la expulsión del territorio nacional de ambos abogados y al día siguiente se ordenó el arresto de ellos mediante esos decretos exentos, para hacer efectiva aquella medida. Así lo ha asegurado también el defensor del Gobierno en estrados y se desprende de la secuencia misma de los hechos.

Pues bien, no hay disposición legal alguna que faculte el uso de las medidas concedidas por los artículos 72 N° 17 de la Constitución, 10 N° 14 del Decreto Ley N° 527 y 1° del Decreto Ley N° 228, con ese fin. Los arrestos no pueden decretarse sino para ser ejecutados en la propia ca-



sa de los afectados o en lugares del territorio nacional que no sean cárceles, o para trasladar personas de un punto a otro dentro de él. La exclusión de cualquiera otra finalidad en el uso de la atribución está prescrita expresamente por esos mismos preceptos. De ahí que el decreto exento no pudiera decretar el arresto en el Campo de Detenidos Tres Alamos, para que en la realidad se apresara a los afectados y se les expulsara sin más trámite del territorio nacional. Pero si efectivamente fue dictado para producir el arresto en ese lugar de detención, entonces, es perentorio concluir que el Servicio de Investigaciones usó de la orden de arresto emanada del Ministro del Interior, no para cumplirla según el objeto específico que está en su texto, sino para conducir directamente a los arrestados hasta el avión en que se los hizo salir del país. En el primer caso la infracción legal está en la dictación de la orden para un fin no previsto por la ley, en el segundo se traslada a la autoridad policial; pero en ambos eventos existe en cuanto tal infracción.

3.- Los decretos de expulsión fueron dictados con infracción de las formalidades determinadas por el Decreto Ley N° 81, en cuanto éste dispone que el decreto de expulsión debe ser fundado, pues esta formalidad no aparece verdaderamente cumplida.

Fundar significa "apoyar con motivos y razones una cosa". La mera cita de preceptos alude sólo a la facultad o competencia para obrar de determinada manera; pero como el decreto expresa la voluntad del Gobierno, la fundamentación no sólo debe referirse a su competencia para expulsar, sino también a aquello que legitima la medida.

Aunque, como es natural, en el pro-

ceso de institucionalización que vive la República la separación de las funciones legislativa y ejecutiva no se encuentra aún completamente demarcada, una vez que la ley se promulga, deja de pertenecer sólo al ámbito potestativo de la autoridad que la dictó y pertenece a la Nación toda; por eso debe ser obedecida tanto por las autoridades como por los gobernados. Si el decreto ley N° 81 ordena fundar los decretos de expulsión, es preciso que así ocurra en la realidad y no sólo en una apariencia.

La aseveración de que los amparados "constituyen un peligro para la seguridad interior del Estado" no funda la medida, pues no establece por qué, en virtud de qué actos o actividades -- o clase de actos o actividades -- han de ser considerados peligrosos para la seguridad del Estado, a tal punto que su expulsión deba considerarse como legítima. Cuando la ley exige que se funde el decreto, no basta aludir a antecedentes que obran en poder del Ministerio del Interior, pues es evidente que la motivación del decreto no tiene por objeto convencer de su legitimidad a quienes lo dictan, sino a quienes deben obedecerlo y, en último término, a los ciudadanos a quienes el propio Decreto Ley 81 ha reconocido el derecho de apreciar los motivos que la autoridad pública tiene al hacer uso de sus facultades discrecionales, para alejar toda duda de que esté ejerciéndolas arbitrariamente, esto es, sin relación con la finalidad de la ley.

Los decretos de expulsión fueron objeto del trámite de la "toma de razón" en la Contraloría General de la República, sin objeciones; pero es lo cierto que a este organismo no compete el amparo de la libertad como garantía individual; quien debe decidir si en el caso se han guardado las forma

lidades legales -- para los efectos señalados -- es este tribunal.

Por último, el defecto formal aludido hace inútil referirse al problema de si corresponde a la Corte revisar los motivos de la autoridad, en recursos de amparo interpuestos contra facultades ejercidas durante el Estado de Sitio; de lo que no cabe duda es de que el cumplimiento del requisito formal puede ser controlado por esta vía.

4.- Que la conclusión sentada en el fundamento segundo de esta disidencia no se altera por la circunstancia de que el decreto de expulsión lleve implícita la orden de arrestar -- como natural a su cumplimiento -- porque en el hecho la detención se produjo en la forma que ha indicado el Gobierno. Tampoco la destruye la derogación posterior del decreto de arresto, si éste causó el efecto de la expulsión, la cual hace imposible la libertad de permanecer en el territorio nacional.

5. La expulsión fue cumplida con infracción de los requisitos previstos en el Decreto Ley N°81 en cuanto establece que "los que sean objeto de las medidas de expulsión o abandono del país podrán elegir libremente el lugar de su destino".

Aparece de los antecedentes que Castillo y Velasco fueron detenidos por personal del Servicio de Investigaciones encargado de cumplir la orden sin más trámite y llevados de inmediato y por la fuerza a sendos automóviles, los que se dirigieron al Aeropuerto donde los esperaba un avión LAN que partió a las 18,10 horas, es decir, apenas 55 minutos después de efectuarse el arresto.

El derecho a "elegir libremente el

destino" significa que la autoridad encargada de hacer cumplir la expulsión está en el deber de dar al afectado una oportunidad razonable para que haga tal elección, la cual no es libre si se encuentra presionada no lo es tampoco si el lugar de destino está previamente fijado por la misma autoridad que cumple el decreto. No hay elección si no hay posibilidad de optar; ni aquélla es libre si no se da oportunidad para razonar la decisión. Desde este doble punto de vista se infringió, pues, por los encargados de cumplir la orden, la disposición legal que limita a la autoridad su poder en el sentido de que no es ella sino el afectado quien tiene primordialmente el derecho de elección.

No cabe deducir que hay una renuncia de esa facultad si los afectados, cuando fueron detenidos y conducidos al Aeropuerto, protestaron por el arresto y se negaron a leer las órdenes que -- según se ha informado -- se les hizo conocer, porque esa renuncia, para ser tal y ser válida, debe provenir de la voluntad del afectado libremente tomada, o deducirse como tácita de circunstancias que transcurran en el libre ejercicio de la conciencia.

6.- Por lo expresado en las tres últimas consideraciones lleva al convencimiento de que se han configurado tres causales que hacen procedente el acogimiento de recurso, según lo previsto en los artículos 16 de la Constitución y 306 del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y archívese.

Ingreso N° 701 y 702.

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MINISTROS DON EDUARDO ARAYA ROJAS,  
DON RUBEN GALECIO GOMEZ Y DON SERGIO DUNLOP RUDOLFFI.

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Santiago, veinticinco de Agosto de mil novecientos setenta y seis.

VISTOS:

En el acápite primero del fundamento 5º de la sentencia de diecisiete de Agosto último, escrita a fojas 61, se reemplaza la palabra " facultad", por la expresión " facultad condicionada"; en el párrafo segundo, se sustituye la locución " a el" por la contracción " del"; se suprime la parte final, desde donde dice : " Como puede advertirse...etc. "; y después del numeral " 81 ", se reemplaza el signo coma (,) por un punto (.); se elimina la parte final del considerando noveno, desde donde dice: "y menos aún en el ámbito...etc."; se suprimen los fundamentos 10º y 11, y se tiene, además presente:

1º.- Que, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por resolución de la 21ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de Diciembre de 1966, a que se refiere dicho fundamento quinto, no ha sido promulgado como ley de la República; y, por tanto, no puede servir de antecedente jurídico para sostener la derogación del art. 2º del Decreto Ley 81 de 1973.-

2º.- Que el conocimiento del presente recurso de amparo, comprende la facultad de ponderar los fundamentos del decreto de expulsión, porque constituyendo uno de sus requisitos, su estudio, como se ha hecho, resulta indispensable, para resolver su procedencia.-

3º.- Que, aún admitiendo que en el cumplimiento del referido decreto se hubiere preterido la facultad de los amparados para elegir el lugar de su destino, tal su puesta omisión no produce su ineficacia, porque se trata

de un derecho que de él deriva, y no de una circunstancia o elemento que lo integre; y, por lo tanto no afecta a la decisión del recurso.-

42.-Que las circunstancias de hecho en que se habría producido el cumplimiento del decreto de expulsión, según se dice en el recurso, no influyen en su decisión; sin perjuicio de los derechos que puedan ejercitarse ante la Justicia Ordinaria.-

Y, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia de diecisiete de Agosto último, escrita a fs. 61.

Se deja constancia de que los Ministros señores Retamal y Erbetta consideran procedente requerir nuevo informe a los señores Ministros del Interior y Defensa Nacional sobre los fundamentos del decreto de expulsión, propuesta que fué rechazada por la mayoría del Tribunal, que estiman innecesaria la diligencia para fallar el recurso, dado lo expuesto en los considerandos de la sentencia.-

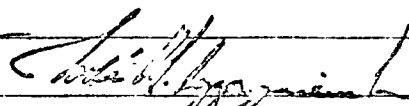
Se previene que el Ministro Sr. Retamal opina que los actos de violencia y el trato vejatorio que los señores Velasco y Castillo atribuyen a sus aprehensores y la imposibilidad en que los habrían puesto de comunicarse con su familia, recoger las cosas necesarias y premunirse de fondos para el viaje desde Pudahuel, son hechos que la Justicia debe investigar, para lo cual propone que se oficie a la Corte de Apelaciones a fin de que adopte las medidas concernientes a la investigación de tales hechos. Del modo dicho el mencionado Ministro disien-

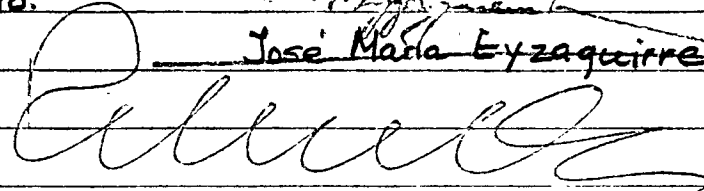
te de la última parte del considerando cuarto del fallo.

Regístrese y devuélvase.

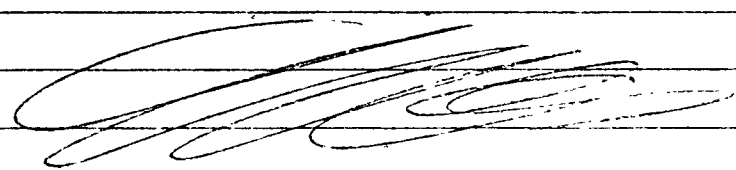
Nº 20184

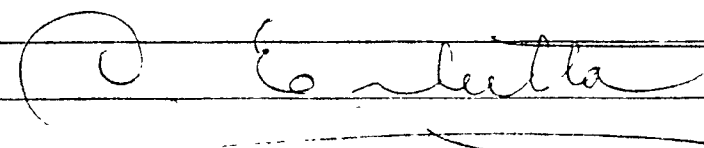
[Firmado:

  
José María Eyzaguirre

  
Rafael Retamal

  
Juan Pomés

  
Enrique Correa

  
Oswaldo Erbetta

Recursos de Amparo de Acción Accidental y  
Proceso de Amparo

Anexo 32

Respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la presentación hecha por  
diversas personas de fecha 18 de agosto de 1976, solicitud que el informe  
transcribe en su anexo XXIII



//tiago, ocho de Septiembre de mil novecientos  
setenta y seis.-

VISTOS:

Atendida la heterogeneidad de los asuntos que  
son objeto de las peticiones de la solicitud precedente,  
procede considerarlas separadamente.-

a) Resolviendo el amparo que se pide que se pres-  
te a los señores Jaime Castillo y Eugenio Velasco, se de-  
cide que no es del conocimiento del Tribunal, sino de la  
Jala que hace el turno correspondiente, la cual pronunció  
veredicto sobre el problema planteado el 17 de agosto úl-  
timo.-

b) Respecto de la adopción de medidas para po-  
ner término a las detenciones injustificadas, o por orga-  
nismos no autorizados públicamente para el efecto por la  
ley, se resuelve que, tratándose de medidas generales ati-  
nentes a las facultades administrativas del Ejecutivo o de  
sus organismos o funcionarios durante el estado de sitio,  
este Tribunal no tiene jurisdicción para impartir instruc-  
ciones, sin perjuicio de lo que resuelva en los respecti-  
vos recursos concretos que se deduzcan.-

c) Sobre el tránsito de los arrestados por lu-  
gares desconocidos, esta Corte carece asimismo de juris-  
dicción; y relativamente a las incomunicaciones, se decla-  
ra que no ha lugar y que debe estarse a los fallos pronun-  
ciados o por pronunciarse en los recursos de amparo dedu-  
cidos o que se deduzcan.-

Se previene que los Ministros señores Eyzaguirre,  
Ortiz y Retamal estuvieron por agregar al final de la ora-  
ción: "para poner término a la incomunicación de algunos//

//detenidos".-

d) En cuanto al interrogatorio de los detenidos por autoridades o individuos extraños al Poder Judicial, si se trata de interrogatorios destinados al ejercicio por el Ejecutivo de las facultades que le confiere el estado de sitio, no ha lugar, y si de interrogatorios por asuntos del orden judicial, sólo se puede resolver la inconducencia del interrogatorio en los casos concretos que se presentan a la consideración de los diversos Tribunales por la vía que corresponde.-

e) Respecto del cumplimiento precipitado de medidas administrativas de expulsión para impedir el ejercicio de los recursos judiciales pertinentes, el Tribunal estudiará la manera legal de establecer medidas y normas sobre la materia.-

Acordado en contra del voto de los ministros señores Betamal y Aburto quienes estuvieron por completar el Auto Acordado de 19 de Diciembre de 1932 que trata del recurso de amparo, con las disposiciones pertinentes.-

f) Relativamente a las medidas que solicitan para evitar la demora de los funcionarios en evacuar los informes correspondientes en los recursos de amparo, se hace saber a los peticionarios que se ha oficiado con mucha anterioridad al Ejecutivo para subsanar esa demora; y en cada caso particular se reiteran, cuando proceden, los informes con especial indicación de premura en su despacho;

Se previene que el Ministro señor Correa estuvo por intercalar después de la voz "demora" la frase "en que incurran".-

g) En cuanto a la petición de que se ponga //

//remedio a las irregularidades que vulneran los derechos humanos y estén contrariando la vigencia del Estado de Derecho en Chile, se procederá como corresponda en los casos concretos que se conozcan o que se denuncien.-

Archivense.

D-2-76.

*José M. Eyzaguirre*

*M. Eduardo Ortíz*

*Rafael Retamal*

*Octavio Ramírez*

*V. Manuel Rivas del C.*

*Enrique Correa*

*Osvaldo Eriberto*

Pronunciada por el Presidente señor José M. Eyzaguirre E., y por los Ministros señores M. Eduardo Ortíz S., Israel Bórquez M., Rafael Retamal J., Octavio Ramírez M., V. Manuel Rivas del C., Enrique Correa L., Osvaldo Eriberto V., Emilio Ulloa M. y Marcos Abanto V.

*Emilio Ulloa*

Anexo 33

"Curriculum Vitae" de los señores miembros de la Corte Suprema  
de Justicia de Chile

"CURRICULUM VITAE" DE LOS MIEMBROS DE LA CORTE  
SUPREMA DE JUSTICIA DE CHILE

1. José María EYZAGUIRRE Echeverría

Actual Presidente de la Corte Suprema. Inició su carrera funcionaria como Oficial Quinto de la Secretaría de la Corte Suprema en el año 1932, luego ascendió a Oficial Primero de la Corte Suprema en el año 1935. Pasó al cargo de Relator de la Corte de Apelaciones en 1941. En 1947 fue nombrado Relator de la Corte Suprema. En 1951 fue designado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y el 31 de marzo de 1960, Ministro de la Corte Suprema. Desde mayo de 1975 es Presidente de la Corte Suprema, por un período legal de tres años.

2. Eduardo ORTIZ Sandoval

Comenzó su carrera funcionaria como Juez de Collipulli en el año 1933. Luego, en 1936, pasó al cargo de Juez de Llanquihue. En 1938 fue promovido al cargo de Relator de la Corte de Apelaciones de Valdivia y, en el mismo año, pasó a ocupar el cargo de Secretario de la Corte de Valdivia. En el año 1939, fue designado Relator de la Corte de Chillán. En 1943, Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ascendió en 1946, a Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena. En 1952, pasó a ocupar el cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y a contar desde el 1° de noviembre de 1961, Ministro de la Corte Suprema.

3. Israel BORQUEZ Montero

Empezó su carrera funcionaria como Secretario del Juzgado de La Unión, en el año 1935. Luego, en 1937, ascendió a Juez de Castro. En 1941, pasó a ocupar el cargo de Juez de Magallanes. En 1946, fue ascendido a Juez del Primer Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago. En 1953 fue designado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y a contar desde el 1° de noviembre de 1963 ocupó el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

4. Rafael RETAMAL López

Comenzó su carrera funcionaria como Juez de Parral, en el año 1936. En 1945, fue designado Juez de San Fernando. En 1949, ascendió a Juez del Segundo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. A fines del mismo año, pasó a ocupar el cargo de Juez del Tercer Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago. En 1953, fue nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y desde el 2 de junio de 1966 ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

5. Luis MALDONADO Boggiano

Inició su carrera funcionaria como Juez de Puerto Natales, el año 1933; luego, en 1934, pasó a ocupar el cargo de Juez de La Unión. En 1937, el cargo de Juez de Aisén; en 1942 Juez del Segundo Juz-

gado de Valdivia. En 1944, fue designado Relator de la Corte de Apelaciones de Chillán. En 1946 pasó a Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ascendió, en 1951, a Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. En 1953, Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca. En 1958, pasa a ocupar el cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, a contar desde el 28 de junio de 1966, ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

6. Octavio RAMIREZ Miranda

Inició su carrera funcionaria como Secretario del Juzgado de Traiguén en 1933. En el año 1938, fue ascendido a Juez del mismo Departamento. En 1946, fue designado Relator de la Corte de Apelaciones de Temuco y en 1951, pasa a ocupar el mismo cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Luego, en 1953, fue ascendido a Relator de la Corte Suprema, y a contar desde el 1° de enero de 1957 fue trasladado al cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde el 6 de marzo de 1968 ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

7. Víctor Manuel RIVAS del Canto

Empezó su carrera funcionaria como Oficial Supernumerario de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el año 1920. Luego ocupa el cargo de Oficial Primero de la Corte de Concepción, entre el 15 de enero de 1925 hasta el 27 de agosto de 1926. En el año 1928, fue nombrado Secretario del Juzgado de Collipulli. A fines del mismo año, pasó al cargo de Secretario del Juzgado de Angol; en 1930, al cargo de Secretario del Primer Juzgado de Temuco. En 1935, fue designado Defensor Público de Chillán y unos días después relator de la Corte de Apelaciones de Temuco. En el año 1942, fue ascendido a Fiscal de la Corte de Apelaciones de Valdivia. En 1943, pasa a ocupar el mismo cargo en la Corte de Apelaciones de Temuco y en 1945, el mismo cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde el 2 de octubre de 1969, ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

8. Enrique CORREA Labra

Comenzó su carrera funcionaria como Secretario del Juzgado de Chanco en 1929. En 1930 pasa a ocupar el mismo cargo en el Juzgado de San Carlos y en 1937 fue ascendido a Juez de Maullín. En 1939 ocupa el mismo cargo en el Primer Juzgado de Osorno y en 1942, el mismo cargo en el Primer Juzgado de Valdivia. En 1946 fue ascendido a Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. En 1951, pasa a Ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán. En 1953, Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y a contar desde el 30 de diciembre de 1971, ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

9. Osvaldo ERBETTA Vaccaro

Inició su carrera funcionaria como Secretario del Juzgado de La Unión en el año 1937. en 1939 fue ascendido a Juez de la Unión. En 1942 pasa a ocupar el mismo cargo en el Primer Juzgado de Osorno. En 1945 ocupa el mismo cargo en el Segundo Juzgado de Chillán y en 1959 asciende a Ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán. En 1960 pasa al cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y a contar del 7 de marzo de 1974 ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

10. Emilio ULLOA Muñoz

Empezó su carrera funcionaria como Secretario del Juzgado de Yungay en el año 1933. Pasó, en 1938, a ocupar el mismo cargo en el Juzgado de La Laja y luego, en 1942, el mismo cargo en el Tercer Juzgado de Concepción. En 1948 fue ascendido a Relator de la Corte de Apelaciones de Concepción. En 1953, fue designado Relator de la Corte Suprema. En 1959, fue designado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y a contar del 16 de agosto de 1974 ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

11. Marcos ABURTO Ochoa

Inició su carrera funcionaria como Juez de Menor Cuantía en San José de la Mariquina, en el año 1945. En 1946 pasó a ocupar el cargo de Secretario del Juzgado de Magallanes y en el mismo año fue designado Juez de Quinchao. Meses más tarde pasó a ser Juez de Mulchén. En 1950, fue nombrado Secretario del Primer Juzgado de Valdivia. En 1952, ascendió a Relator de la Corte de Apelaciones de Valdivia, siendo nombrado Fiscal de la misma Corte en 1956. En 1960 pasa a ser Ministro de la misma Corte pasando en 1964 a Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde el 7 de enero de 1974 ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

12. Estanislao ZUÑIGA Collao

Comenzó su carrera funcionaria como Juez de Chañaral en 1937, pasando, luego, a ocupar el mismo cargo en el Primer Juzgado de Antofagasta, en 1942. En 1951 pasa al mismo cargo en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. En 1953 asciende a Ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique y en 1961, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde el 26 de mayo de 1975 ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

13. Abraham MEERSOHN Schijman

Inició su carrera funcionaria como Secretario del Juzgado de Puerto Varas en 1943. Luego pasa a ocupar el mismo cargo en Angol, en 1945. En 1946 fue designado Juez de Curacautín, pasando a ocupar el mismo cargo en San Carlos en 1950. Juez en el Segundo Juzgado de Osorno en 1951. Asciende en 1953 a Relator de la Corte de Apelaciones de Valdivia, pasando, el mismo año, a ocupar el mismo cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago. En 1957 fue nombrado Juez del Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago. En 1964, es designado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, desde el 17 de septiembre de 1976, ocupa el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

Anexo 34

Estadística de Matrículas de las Universidades chilenas



- 1.- MATRICULAS TOTALES UNIVERSIDADES CHILENAS EN AÑO 1975 SON 147.049 CANTIDAD QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUENTE MANERA:

UNIVERSIDAD DE CHILE	63.777
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO	14.699
U. CONCEPCION	16.647
U. CATOLICA VALPARAISO	7.127
U. TECNICA SANTA MARIA	2.967
U. TECNICA DEL ESTADO	32.274
U. AUSTRAL	3.792
U. DEL NORTE	6.405

- 2.- MATRICULA AÑO 1976 SON 135.643:

U. DE CHILE	58.207
U. CATOLICA SANTIAGO	13.048
U. CONCEPCION	16.782
U. CATOLICA VALPARAISO	6.121
U. TECNICA SANTA MARIA	3.320
U. TECNICA DEL ESTADO	28.000
U. AUSTRAL	4.200
U. DEL NORTE	5.249

- 3.- LOS DATOS INDICADOS PARA 1976 TIENEN CARACTER DE PRELIMINARES, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE U. DE CONCEPCION, U. TECNICA DEL ESTADO Y U. AUSTRAL

Anexo 35

Decreto No. 19 del Ministerio de Educación Pública, de fecha 14 de enero de 1976. De su texto completo se desprende la falsedad de la interpretación dada por el Informe en relación con la intervención del Estado en la totalidad de las iniciativas culturales

## Ministerio de Educación Pública

### **DETERMINA QUE LAS INICIATIVAS DE ORIGEN PÚBLICO O PRIVADO RELACIONADAS CON ASUNTOS CULTURALES DEBEN SER SOMETIDAS A ESTUDIO Y REVISIÓN POR LA COMISIÓN ASESORA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y ASESOR CULTURAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

Núm. 19.— Santiago, 14 de Enero de 1976.— Considerando:

Que con fecha 29 de Mayo de 1975 se publicó el decreto N° 457, de los Ministerios de Educación y Justicia, constituyendo una Comisión de Estudio y Reforma de la legislación cultural, con miras a obtener un ordenamiento jurídico y adecuado al desenvolvimiento cultural del país.

Que con posterioridad se dictó el decreto N° 585, del Ministerio de Educación Pública, el que estableció las pautas de coordinación entre el Ministro de dicha Cartera y el Asesor Cultural de la Excm. Junta de Gobierno, a fin de que ambos, de acuerdo a sus finalidades y

funciones específicas, determinen la política de desarrollo cultural del Estado.

Que en ese mismo acto se designó una Comisión de Trabajo, dependiente del Ministro de Educación y el Asesor Cultural, e integrada por funcionarios de ambas reparticiones y las Universidades, con el objeto de estudiar las bases y proponer a sus mandantes ya indicados, los proyectos tendientes a desarrollar y estimular las actividades culturales, así como su extensión a nivel nacional.

Que las iniciativas y proyectos analizados o propuestos por esta Comisión, deben ser aprobados o rechazados por el Ministro de Educación y el Asesor Cultural, en cuyo primer caso, deben ser remitidos a la Comisión de Reforma de la Legislación Cultural, creada por el decreto 457, ya indicado, a fin de que esta última les dé la debida forma legal, cuando ello sea procedente.

Que la experiencia práctica ha demostrado que es necesario reglamentar el trabajo conjunto de ambas Comisiones, así como prorrogar el mandato de la de Reforma a la Legislación Cultural, y

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes N°s. 1, de 1973; 527, de 1974; 804, de 1974; el Art. 72 N° 2 de la Constitución Política del Estado, y el decreto de Justicia N° 78, de 1975,

#### Decreto:

**Art. 1°**— Todas las iniciativas, tanto de origen público como privado que digan relación con asuntos culturales, deben ser sometidas en primer termino a estudio y revisión de la Comisión Asesora del Ministro de Educación y Asesor Cultural de la Junta de Gobierno.

**Art. 2°**— Durante dicho estudio o revisión, la Comisión aludida podrá requerir la colaboración que estime pertinente a la Comisión de Reforma de la Legislación Cultural.

**Art. 3°**— Cuando la índole de los asuntos sometidos a estudio lo requiera y según sea la fase que esté cumpliendo, el Ministro de Educación y/o el Asesor Cultural, podrán disponer el funcionamiento conjunto de ambas Comisiones.

**Art. 4°**— Cuando la Comisión de Reforma de la

Legislación Cultural, en uso de las facultades que le confiere el Art. 1° del decreto N° 457, acuerde proponer nuevos textos o introducir modificaciones a los existentes en materias culturales, deberá analizar unos y otros conjuntamente con la Comisión Asesora del Ministro de Educación y del Asesor Cultural, a menos que se trate de detalles específicamente legales o reglamentarios.

**Art. 5°**— Deberá existir un intercambio permanente y regular de informaciones entre ambas Comisiones, de lo cual se encargarán los respectivos secretarios.

**Art. 6°**— La Comisión de Reforma de la Legislación Cultural creada por decreto N° 457 tendrá carácter permanente.

**Art. 7°**— Sin perjuicio de las normas comunes señaladas en el presente Reglamento, cada una de las Comisiones actuará de acuerdo a las atribuciones específicas que les confieren sus respectivos estatutos.

**Art. 8°**— Cada tres meses, a partir de la fecha de promulgación de este Reglamento, los presidentes de las Comisiones deberán emitir un informe conjun-

to de las actividades desarrolladas, el cual será presentado a los señores Ministros de Educación y Justicia, así como al Asesor Cultural de la Excm. Junta de Gobierno.

Tómese razón. comuníquese, regístrese y publíquese. — AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército. Presidente de la República.— Arturo Troncoso Daroch, Contraalmirante, Ministro de Educación Pública.— Miguel Schwenzer Speisky, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento — Saluda Atte. a Ud. — Ceiba Pedreros Vergara, Subsecretario de Educación Pública subrogante.

Anexo 36

Copia de la Nota, de fecha 15 de octubre de 1976, dirigida al señor Secretario General de las Naciones Unidas en la que se transcribe el desmentido del Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago a supuestas declaraciones atribuidas al Cardenal don Raúl SILVA Henríquez y aparecidas en una publicación europea

OEG/mvd.

N° 1101/124

Nueva York, 15 de octubre de 1975

Señor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a Vues  
tra Excelencia con respecto a la intervención del Embajador Re-  
presentante Permanente de Cuba, en la sesión del Plenario de a-  
yer, en la que aludió a unas declaraciones del señor Arzobispo  
de Santiago, Cardenal don Raúl SILVA Henríquez, aparecidas en u  
na publicación europea y que, dío, haría distribuir en Naciones  
Unidas.

Sobre este particular, me permito  
transcribir a Vuestra Excelencia el Comunicado Oficial que en re  
lación con las referidas declaraciones del señor Cardenal, entre  
gó a la publicidad, el día 23 de septiembre pasado, el Departa-  
mento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago:

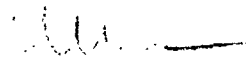
"Despachos internacionales dan cuenta de presuntas  
"declaraciones que el Cardenal Raúl SILVA Henríquez habría  
"formulado a un pastor evangélico de nacionalidad noruega.  
"La entrevista solicitada por dicho pastor, versó sobre pro-  
"blemas que afectan a la comunidad cristiana evangélica de  
"Chile.

"Los conceptos de orden político atribuidos al señor  
"Cardenal representan, en la forma y en el fondo, una to-  
"tal tergiversación de su pensamiento, claramente formula-  
"do en las actuaciones y declaraciones públicas del pastor  
"chileno."

Excelentísimo Señor  
Dr. Kurt Waldheim,  
Secretario General de las Naciones Unidas,  
Naciones Unidas,  
Nueva York.

Pongo lo anterior en conocimiento de Vuestra Excelencia en cumplimiento a lo que personalmente expresara en la misma citada reunión del Plenario del día de ayer.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.



ISMAEL HUERTA DIAZ  
Vicealmirante  
Embajador Representante Permanente

-----